



Ubicación 1999 – 8  
Condenado INDIRA MARIA SOTO NAVARRO  
C.C # 22520764

### CONSTANCIA TRASLADO REPOSICIÓN

A partir de hoy 23 de Agosto de 2023, quedan las diligencias en secretaria a disposición de quien interpuso recurso de reposición contra la providencia 905 del VEINTICINCO (25) de JULIO de DOS MIL VEINTITRES (2023), por el término de dos (2) días de conformidad a lo dispuesto en el Art. 189 inciso 2° del C.P.P. Vence el día 24 de Agosto de 2023.

Vencido el término del traslado, SI ☒ NO ☐ se presentó sustentación del recurso.

JULIO NEL TORRES QUINTERO  
SECRETARIO

Ubicación 1999  
Condenado INDIRA MARIA SOTO NAVARRO  
C.C # 22520764

### CONSTANCIA TRASLADO REPOSICIÓN

A partir de hoy 25 de Agosto de 2023, quedan las diligencias en secretaria a disposición de los demás sujetos procesales por por el término de dos (2) días de conformidad a lo dispuesto en el Art. 189 inciso 2° del C.P.P. Vence el 28 de Agosto de 2023.

Vencido el término del traslado, SI ☐ NO ☒ se presentó escrito.

JULIO NEL TORRES QUINTERO  
SECRETARIO

AR 26/7/23 ✓

Radicación : 11001600000020190257100 (NI 1999)  
Condenado : Indira María Soto Navarro  
Identificación : 22.520.764  
Fallador : Juzgado 4º Penal del Circuito Especializado de Conocimiento de Bogotá  
Delitos : Concierto para delinquir agravado y tráfico de estupefacientes  
Decisión : Redime pena, niega condicional  
Reclusión : Reclusión de Mujeres el Buen Pastor  
Normatividad : Ley 906 de 2004

AUTO NO. **905.23**

Pago  
28/8/23

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



**JUZGADO OCTAVO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE  
SEGURIDAD DE BOGOTÁ**

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de julio de dos mil veintitrés (2023)

**ASUNTO**

En atención a lo ordenado por una Sala Penal del Tribunal Superior del distrito judicial de Bogotá en sentencia de tutela adoptada dentro del radicado 11001 22 04 000 2023 02215 00, el despacho se pronuncia en torno a la libertad condicional de la condenada **INDIRA MARÍA SOTO NAVARRO**.

**ANTECEDENTES**

Este despacho ejecuta la pena de sesenta y seis (66) meses de prisión amen del pago de la multa equivalente a mil ochocientos ochenta y dos punto sesenta y siete (1882,67) salarios mínimos mensuales legales vigentes que, por el delito de concierto para delinquir agravado y tráfico de estupefacientes, impuso a **INDIRA MARÍA SOTO NAVARRO** el Juzgado 4º Penal del Circuito Especializado de Conocimiento de Bogotá en sentencia de 27 de abril de 2022.

Por cuenta de esta actuación, la prenombrada condenada viene privada de la libertad desde el 12 de junio de 2019, reconociéndose a su favor las siguientes redenciones de pena:

PROVIDENCIAS	DESCUENTO	
	MESES	DÍAS
24-11-2022	00	17.00



09-05-2023	00	15.00
<b>TOTAL</b>	<b>01</b>	<b>02.00</b>

### LA SOLICITUD

Mediante sentencia de tutela de 12 de julio hogaño, adoptada dentro del radicado 2023 02215 00, una Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá ordenó: *«se pronuncie de fondo respecto de la solicitud de libertad condicional elevada por la accionante el 16 de diciembre de 2022, teniendo en cuenta los aspectos novedosos que en esta se plantean y que no hicieron parte de la motivación del auto del 24 de noviembre de ese mismo año».*

### CONSIDERACIONES

La libertad condicional es un mecanismo sustitutivo de la pena de prisión que se instituyó como instrumento de resocialización y de reinserción social del individuo, cuyo objeto está encaminado a brindar al condenado la oportunidad de que, en su caso y bajo ciertas condiciones en consideración al tiempo de pena cumplido y a la conducta presentada en dicho lapso, se pueda dejar de ejecutar la condena, primero a manera de prueba durante un tiempo determinado (el que faltare para el cumplimiento de la condena) y luego de forma definitiva si lo exigido se cumple.

El artículo 471 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), impone al interesado en el subrogado la obligación de adjuntar con la solicitud la resolución favorable expedida por el Consejo de Disciplina o, en su defecto, por el director del establecimiento penitenciario, copia de la cartilla biográfica debidamente actualizada y de los demás documentos que acrediten las exigencias previstas en el Código Penal, requisitos estos que se erigen como **presupuesto de procesabilidad** para posibilitar el estudio del subrogado

A su turno el artículo 30 de la Ley 1709 de 2014, que modificó el artículo 64 del Código Penal, establece los **requisitos sustanciales** básicos para la concesión del mencionado subrogado, esto es, que el sentenciado haya descontado mínimo las tres quintas (3/5) partes de la pena que se le impuso y reparado a la víctima (lo que se ha denominado *«factor objetivo»*) y que de la buena conducta durante el cautiverio, así como de la valoración de la conducta punible objeto de reproche, el Juez pueda colegir que no existe necesidad de proseguir el tratamiento penitenciario (*«factor subjetivo»*) y, finalmente, que se acredite el arraigo familiar y social del penado.

Descendiendo al asunto objeto de análisis, tenemos que se acreditó el cumplimiento del primer presupuesto en mención (*procesabilidad*) por

cuanto la dirección de la Reclusión de Mujeres de Bogotá «*El Buen Pastor*», en anterior oportunidad, allegó los soportes documentales que exige el mencionado artículo 471 del Código de Procedimiento Penal a saber, cartilla biográfica actualizada, certificados de conducta y la resolución favorable 0003 de 3 de enero hogaño; en consecuencia procederá el Despacho a estudiar las exigencias objetivas y subjetivas consagradas en el artículo 64 del Código Penal, modificado por el artículo 30 de la Ley 1709 de 2014.

Tal cual se indicó en precedencia, **INDIRA MARÍA SOTO NAVARRO** descuenta una condena de sesenta y seis (66) meses de prisión, por lo que las tres quintas partes de esa sanción equivalen a treinta y nueve (39) meses y dieciocho (18) días.

Como la encartada viene privado de la libertad desde el 12 de junio de 2019, ha descontado físicamente cuarenta y nueve (49) meses y catorce (14) días discriminados así:

2019	- - - - -	06 meses y 19 días
2020	- - - - -	12 meses y 00 días
2021	- - - - -	12 meses y 00 días
2022	- - - - -	12 meses y 00 días
2023	- - - - -	06 meses y 25 días

Al anterior guarismo han de adicionarse un (1) mes y dos (2) días reconocidos hoy como redención de pena, de donde se desprende que, a la fecha, **SOTO NAVARRO** acredita un descuento total de pena de **CINCUENTA (50) MESES Y DIECISÉIS (16) DÍAS**, satisfaciéndose la exigencia cuantitativa mínima prevista por el legislador en el artículo 64 del Código Penal.

En punto de la comprobación del arraigo familiar y/o social, en anterior oportunidad la condenada afirmó residir en la «*Carrera 79 número 10 D – 95, Bloque 7, Apartamento 104 de Bogotá*», junto con la quien al parecer es su familiar, el señor *Néstor de Jesús Martínez*, información que se encuentra soportada con un escrito que elaboró el prenombrado, varias fotográficas del interior del predio y un recibo de servicio público domiciliario del mismo, elementos que en principio acreditan su existencia; por lo tanto, se dispone dar plena credibilidad a la información suministrada por virtud del principio de buena fe consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política.

Con relación a la indemnización de los daños, las conductas punibles por las cuales se profirió condena no genera ese tipo de responsabilidad en cabeza del sancionado.

Ahora, sobre el desempeño de la sentenciada durante el cautiverio tenemos que, según lo informado por la Reclusión de Mujeres de Bogotá «El Buen Pastor», su conducta únicamente ha sido calificada como «buena», de conformidad con la cartilla biográfica que se allegó, lo que conllevó a que el consejo de disciplina del penal expidiera la Resolución 0003 del pasado 3 de enero por medio de la cual conceptuó favorablemente la concesión de la gracia que nos ocupa.

No obstante, lo propio no ocurre con el denominado factor subjetivo toda vez que, después de un concienzudo análisis de la actuación, se revelan al Despacho serios motivos que llevan a desestimar la pretensión liberatoria por fallar lo relativo a la valoración de la conducta punible y, en punto de ello, conviene hacer ciertas precisiones, y traer a colación las consideraciones realizadas por la Corte Constitucional en Sentencia C-194 de 2005, que sobre el particular manifestó:

*En primer lugar, debe advertirse que el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad no puede apartarse del contenido de la sentencia condenatoria al momento de evaluar la procedencia del subrogado penal. Esta sujeción al contenido y juicio de la sentencia de condena garantiza que los parámetros dentro de los cuales se adopta la providencia del Juez de Ejecución de Penas y Medidas de seguridad sea restringido, es decir, no pueda versar sobre la responsabilidad penal del condenado.*

*En los mismos términos, cuando la norma acusada dice que la libertad condicional podrá concederse previa valoración de la gravedad de la conducta, no significa que el Juez de Ejecución de Penas y Medida de Seguridad quede autorizado para valorar la gravedad de la conducta. Lo que la norma indica es que dicho funcionario deberá tener en cuenta la gravedad del comportamiento punible, calificado y valorado previamente en la sentencia condenatoria por el juez de conocimiento, como criterio para conceder el subrogado penal.*

*Adicionalmente, el juicio que adelanta el Juez de Ejecución de Penas tiene una finalidad específica, cual es la de establecer la necesidad de continuar con el tratamiento penitenciario a partir del comportamiento carcelario del condenado.*

*En este contexto, el estudio del Juez de Ejecución no se hace desde la perspectiva de la responsabilidad penal del condenado resuelta ya en la instancia correspondiente, ante el juez de conocimiento- sino desde la necesidad de cumplir una pena ya impuesta. En el mismo sentido, el estudio versa sobre hechos distintos a los que fueron objeto de reproche en la sentencia condenatoria, cuáles son los ocurridos con posterioridad a la misma, vinculados con el comportamiento del sentenciado en reclusión.*

*(...)*

*Así pues, para conceder el subrogado penal de la libertad condicional, el juez debe verificar, tanto el cumplimiento de los requisitos objetivos exigidos por la norma (haberse cumplido las dos terceras partes de la pena y haberse pagado la multa, más la reparación a la víctima), como el cumplimiento de los requisitos subjetivos que se derivan de la valoración de las condiciones particulares del condenado, valoración que de ninguna manera implica una nueva condena por los mismos hechos.*

En la sentencia de control C-757 de 2014, la misma Corte estudió si esa valoración posterior de la conducta afectaba el *non bis in ídem*, jurisprudencia de la cual se resaltará, para ilustración, algunos apartados:

*23. Para la Corte, aunque hay identidad de persona, no existe ni identidad de hechos, ni identidad de causa. No existe una identidad total de hechos en la medida en que si bien el juez de ejecución de penas debe valorar la conducta punible, debe analizarla como un elemento dentro de un conjunto de circunstancias. Sólo una de tales circunstancias es la conducta punible. Además de valorar la conducta punible, el juez de ejecución de penas debe estudiar el comportamiento del condenado dentro del penal, y en general considerar toda una serie de elementos posteriores a la imposición de la condena. Con fundamento en este conjunto de circunstancias, y no sólo en la valoración de la conducta punible, debe el juez de ejecución de penas adoptar su decisión.*

En la misma providencia, indicó:

*24. Adicionalmente, la Corte concluye que tampoco existe identidad de causa, pues el objeto de la decisión en uno y otro caso es diferente. El proceso penal tiene por objeto determinar la responsabilidad penal del sindicado por la conducta que le está siendo imputada en el proceso, e imponerle una pena de conformidad con una serie de circunstancias predicables de la conducta punible. Entre tanto, al juez de ejecución de penas le corresponde determinar si la ejecución de dicha pena es necesaria o no, una vez que la conducta ha sido valorada y la pena ha sido impuesta. Ello implica que no sólo se trata de causas diferentes, sino que el ejercicio de la competencia del juez penal limita los alcances de la competencia del juez de ejecución de penas. En primer lugar, porque el juez de ejecución de penas no puede valorar de manera diferente la conducta punible, ni puede tampoco salirse del quantum punitivo determinado por el juez penal”.*

Luego, la exigencia de valoración de la conducta punible por parte del Juez de Ejecución de Penas resulta ser exequible siempre y cuando se haga con total apego a las circunstancias, elementos y consideraciones realizadas por el juez fallador de instancia en el fallo condenatorio sean éstas favorables o desfavorables para la concesión del subrogado, posición reiterada en la Sentencia T-640 de 2017, la cual valga decir, trae a colación el condenado en su escrito. En esta última providencia se consignó lo siguiente:

*7.3. Así, los jueces competentes para decidir acerca de una solicitud de libertad condicional deben interpretar y aplicar el inciso 1° del artículo 30 de la Ley 1709 de 2014, tal como fue condicionado en la Sentencia C-757 de 2014, esto es, bajo el entendido de que **la valoración que realice de la conducta punible tenga en cuenta las circunstancias, elementos y consideraciones hechas por el juez penal en la sentencia condenatoria, sean estas favorables o desfavorables al otorgamiento de la libertad condicional.***

(...)

*Lo relevante de este asunto es que la Corte reiteró la importancia constitucional que tienen la resocialización de las personas condenadas y la*

*finalidad preventiva especial de la pena. Por ello, indicó que el juez de ejecución de penas si bien puede tener en cuenta la conducta punible, la personalidad y antecedentes de todo orden para efectos de evaluar el proceso de readaptación social del condenado en procura de proteger a la sociedad de nuevas conductas delictivas, en todo caso, debe valorar la conducta punible teniendo en cuenta las circunstancias, elementos y consideraciones hechas por el juez penal en la sentencia condenatoria, sean estas favorables o desfavorables al otorgamiento de la libertad condicional de los condenados. (Negrilla del Juzgado).*

Es de anotar que los precedentes jurisprudenciales traídos a colación son vinculantes y en los mismos se ha señalado que el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad debe analizar el tópico de la conducta punible sin inmiscuirse en la competencia del juez penal de conocimiento y le está vedado realizar valoraciones distintas a las analizadas por el fallador.

De modo que, cuando el Juez Ejecutor debe abordar el aspecto relacionado con la valoración de la conducta, ha de invocar las mismas consideraciones que el juez de conocimiento determinó como indicativas de la gravedad; por ende, al respecto, el Juez de Instancia, al negar la concesión un mecanismo sustitutivo, advirtió lo siguiente:

*(...) por lo demás, las conductas desplegadas no pueden menos que catalogarse de graves, si se tiene en cuenta la ejecución de un comprendido de actividades ilícitas planteadas y coordinadas con la finalidad de comercializar pequeñas cantidades de sustancias alucinógenas, así como la de transportar grandes dosis en el barrio Kennedy de esta ciudad a través de maniobras, las cuales se prolongaron durante algunos meses con el único objetivo de obtener un provecho económico sin consideración al daño que podrían causar esas sustancias a los habitantes del territorio nacional, especialmente a los residentes de dicho barrio que habitualmente concurren dichos espacios públicos, así la protección a la comunidad de las víctimas, a las que se alude en el artículo 2° del Código de Procedimiento Penal como principio rector, prevalece e informa el contenido del ordenamiento jurídico procesal, es el que permite afirmar que la detención intramural se hace indispensable y necesaria en este caso, máxime que esta protección no debe entenderse solamente en el campo de la prevención especial sino la general desde el punto de la prevención general la sociedad, debe conocer la drásticidad con la que deben ser tratados ciertos comportamientos aspecto que lleva a fortalecer la confianza de los coasociados en un sistema jurídico cuyo objeto general es regular la vida del hombre en sociedad, para que exista sea mejor, además del mensaje de justicia que debe quedar en contra oposición a la estipulación de la impunidad por la que la benevolencia al adoptar decisiones en casos como la que aquí se está analizando.*

Bajo esa misma dirección y gracias a la narración fáctica expuesta en la sentencia condenatoria, se puede concluir que estamos frente a conductas punibles altamente nocivas y reprochables, pues las mismas sumergen al conglomerado en un constante estado de zozobra toda vez que siembran en la ciudadanía miedo y desconfianza, razón por la cual legislador ha consagrado penas considerablemente altas para combatir su proliferación.

Nótese que la condenada, conocida con el alias «Indira», consciente de las consecuencias nefastas para niños, jóvenes, adultos y ancianos y con el único propósito de lucrarse fácilmente, hizo parte de la organización criminal denominada «Las Patisucias» dedicada al tráfico de estupefacientes en pequeñas cantidades en la Localidad de Kennedy de esta ciudad capital, específicamente en los barrios «Las Delicias, Villa Nueva, Nueva York, San Lucas, Carvajal e Igualdad», utilizando diferentes lugares públicos para almacenar y vender los alucinógenos que comercializaban.

Aquí conviene precisar que el rol que desempeñaba la sentenciada en la organización criminal resultaba trascendental para el cumplimiento del fin ilegal, pues era quien comercializaba el estupefacientes dentro de la línea asignada a alias «Néstor», actuar delictivo que se encuentran debidamente documentados a través de las diferentes interceptaciones y registros fotográficos contenidos en los informes de vigilancia y seguimiento elaborados por policía judicial.

No puede perderse de vista que este tipo de acciones están revestidas de una alta lesividad y, por tanto, son dignas del máximo reproche, dado el impacto negativo que genera no solo en la salud del conglomerado sino en otros aspectos como el orden económico y social e incluso, si se quiere, la seguridad pública y la vida de los asociados, pues para nadie es un secreto que el tráfico de estupefacientes es un delito pluriofensivo y en muchas ocasiones se constituye en la puerta escénica para la comisión de otros ilícitos incluso de mayor nocividad.

De modo que sus conductas punibles permiten deducir fundadamente la personalidad desbordada del sentenciado y lo muestran como un ciudadano carente de respeto por el ordenamiento jurídico y de límites comportamentales, quien con tal de satisfacer sus intereses ilícitos, poco le importa afectar la salud de la población e incluso de la vida de los congéneres, de ahí que se torne improcedente su liberación anticipada, aun cuando sea condicional.

Y es que la capacidad logística que alcanzó en tampoco tiempo la organización delictiva que integraba, le permitió a la organización criminal controlar la venta de estupefacientes en diferentes barrios de la Localidad de Kennedy, llegando incluso a corromper la fuerza pública al entregar diferentes sumas de dinero cuando alguno de sus miembros eran capturados, circunstancias que inciden precisamente en que el conglomerado no vea con buenos ojos que este tipo de infractores sean agraciados con la libertad anticipada, lo cual a su vez alentaría a otras personas a incurrir en similares delitos, bajo el supuesto equívoco de que no tendrán que cumplir la totalidad de la pena, máxime cuando no se cuenta con elementos ciertos que den cuenta de un verdadero

arrepentimiento y resocialización y que, a su vez, garanticen que no continuará realizando la misma actividad delictiva al salir de prisión.

En efecto, revisada la cartilla biográfica aportada por las autoridades penitenciarias, especialmente la remitida por la Cárcel Distrital de Varones Anexo Mujeres, lugar donde permaneció recluida entre junio de 2019 y septiembre de 2022, se observa que la condenada no ha tenido un progreso significativo en su tratamiento penitenciario, pues de un lado, su conducta para los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021 fue calificada en el grado «Mala», para después ser promovida a «Buena» el 18 de diciembre de 2021, distinción que al parecer conserva a la fecha ya que no ha logrado alcanzar la calificación «Ejemplar».

Y de otro, conforme lo informado por la Reclusión de Mujeres «El Buen Pastor», pese a sus más de cuatro (4) años de reclusión no ha logrado superar la primera fase del tratamiento penitenciario permaneciendo en «Observación y diagnóstico», aspecto resulta de gran importancia para el estudio que hoy se adelanta, pues según la Resolución 7302 de 2005 del INPEC, en las fases subsiguientes del tratamiento, como la denominada «mediana seguridad», el interno accede a programas educativos y laborales, además de orientarse a fortalecer su ámbito personal con el fin de adquirir, afianzar y desarrollar hábitos y competencias socio laborales, incluso, en la fase «mínima seguridad» se establecen estrategias para afrontar la integración social positiva y la consolidación de su proyecto de vida en libertad, de ahí que al no contar con estos programas de rehabilitación muy difícilmente puede concluirse que no existe necesidad de continuar con su proceso de penitenciario dada la magnitud de los delitos cometidos.

De manera que en el presente asunto la valoración de la conducta punible tiene un resultado negativo por las razones descritas, por ello, el accionar de la penada en mención amerita severidad en la efectividad material del tratamiento penitenciario, en la medida que es la manera como lo teóricamente previsto en la Ley llega a tener existencia real.

Por lo expuesto, se negará la libertad condicional a **INDIRA MARÍA SOTO NAVARRO**, toda vez que la valoración de la forma como se ejecutó la conducta punible devela que carece de respeto hacia las normas y sus semejantes, por lo que prevalece el fin de protección al conglomerado, entre tanto surte efectos el tratamiento penitenciario.

### **Cuestión final**

Por el Centro de Servicios Administrativos, remítase copia de la presente providencia a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá

con el fin de que obre dentro de la acción de tutela identificada con el radicado 11001 22 04 000 2023 02215 00.

En mérito de lo expuesto, el **JUZGADO OCTAVO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BOGOTÁ**,

**RESUELVE:**

**PRIMERO: NEGAR** el subrogado de la **LIBERTAD CONDICIONAL** a **INDIRA MARÍA SOTO NAVARRO** de conformidad con lo anotado.

**SEGUNDO: DESE** cumplimiento a lo dispuesto en el acápite denominado «*Cuestión Final*».

**TERCERO: ENVIAR** copia de esta determinación a la Penitenciaria «*El Buen Pastor*» para fines de consulta y que obre en la hoja de vida de la penada.

**CUARTO:** Contra esta providencia proceden los recursos de ley.

**NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE**


**ARMANDO PADILLA ROMERO**  
**JUEZ**

Elr

Centro de Servicios Administrativos y Sancionados  
de Ejecución de Pena y Medidas de Seguridad  
En la fecha 15/03/2023 No. 00-003  
La anterior providencia  
SECRETARIA 2



opelo Dación de la condicional

 Poder Judicial Poder Superior de la Judicatura República de Colombia	
CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS JUZGADOS DE EJECUCIÓN DE PENAS BOGOTÁ	
NOTIFICACIONES	
FECHA: 270723	HORA: _____
NOMBRE: Indira Soto Navarrete	
CÉDULA: 22520764	
NOMBRE DE FUNCIONARIO QUE NOTIFICA: Rocio Celia	



Bogotá D.C., Julio 31/2023

1-

Señores  
Juzgado Octavo (8) de Ejecución de Penas  
y Medidas de Seguridad de Bogotá D.C.  
E.S.D.

Referencia: Presento los recursos de ley, principalmente, aplico el Recurso de Reposición ante su Juzgado Octavo (8) de E. P. y M. S. de Bogotá, ya que persiste mi inconformidad, respecto a, las violaciones flagrantemente de mis derechos humanos, todo por vía de hecho, persecución personal, al no atender decisiones judiciales, por jueces Constitucionales, al no concederme por derecho, mi LIBERTAD CON-  
DICIONAL, a pesar que cumplo con todo los requisitos de ley, tener en cuenta mis (10) meses de Redención, en la Distrital y todas las donde me amparan mis derechos, ya que existen fallos, como F, la Sentencia C-640 de 2017, Jueces deben otorgar libertades a Condenados que cumplan con requisitos, Corte Constitucional M.P. Dr. Antonio José Isaaza. Un llamado de atención hizo la Corte Consti-

(1)



truncional a los jueces del país, para que en adelante cumplan con las normas establecidas para conceder libertades. No se debe discriminar por la CONDUCTA PUNIBLE, tener en cuenta el contenido de la Sentencia condenatoria, tanto en lo favorable como en lo desfavorable, lo que puede motivar la decisión que se adopte en uno u otro sentido.

1) No estoy de acuerdo, en cuanto a lo que usted manifiesta, por lo ordenado por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en sentencia de tutela 110012204000202302215-00, el despacho se pronunció en torno a la libertad condicional de la condenada. Esta solicitud no es de fondo, es desconocer las decisiones judiciales, que ampara mis derechos, a pesar que me notificaron, por FALTO ILLIBABLE, y puede entenderse al final, en Consideraciones de la Sala; lo siguiente: Resta por, agregar la improcedencia de emitir un orden como lo pretendida por la actora de saber la libertad CONDICIONAL, para

(2)



3-

de manera alguna el Juez Constitucional  
sino encuentra facultado para desplazar  
al natural o quien compete verificar  
el cumplimiento de las condiciones para  
acceder a la libertad CONDICIONAL,  
ante el cual, la demandante cuenta con  
la posibilidad de ejercer sus derechos de  
contradicción de los recursos ordinarios.

2) Esto hago, ya que en la notificación  
del Auto del 25) de julio de (2023),  
teniendo en cuenta los aspectos mencionados  
que en esta se plantean y que no hicieron  
parte de la motivación del auto del 24  
de noviembre de ese mismo año, anexo copia

### Peticiones

1) Pido y solicito, tener en cuenta la fe-  
cha de captura 06 de junio de 2019.  
no el 12 de junio de 2019.

2) tengo 50 meses 16 días, sin redención, del  
Trimeste del Buen Pastor, de los meses  
de abril, mayo, junio.

3) Sin los meses que me restan, en la Car-  
cel Distrital, que son 10 meses que re-  
stami en la Carcel Distrital de Varones

(3)



que son y Suman, 3.371 horas.

4) Me encuentro en FASE ALTA, y actualmente, me tengo en cuenta mi FASE MEDIANA, por el tiempo, y que es un requisito, para el beneficio de mi LIBERTAD CONDICIONAL.

Estoy en ALTA, no en OBSERVACIÓN y DIAGNOSTICO desde el 05 de enero de 2023 día en que fui notificada de mi FASE ALTA.

5) He hecho los cursos, como Reeducación en INDUCCIÓN, PSICOLOGÍA INDIVIDUAL, y asistí a mesorredondos, misión caracter con éxito.

6) Manifiesto que si túe tus (3) meses mi conducta MALA, Sept, octubre, noviembre y Diciembre.

7) En enero, febrero, Marzo, Subió de Buena, 2022, y desde entonces no hay habido, ningún reporte malo hasta la fecha, de lo que se dio el REPORTE DE CONCEPTO FAVORABLE del mes de Julio 05-07-2023.

Actualmente me encuentro descontando en TALLER DE FIBRA y MATERIALES.



8) Pido y Solicito, un nuevo estudio, para la actualización, hasta el día de hoy, sobre mi Resocialización, ya que no estoy de acuerdo lo que manifiesta usted, Señor Juez, que no me he Resocializado, que no he superado la FASE DE OBSERVACIÓN Y DIAGNOSTICO, cuando la suscrita des cuenta, desde la Carcel Distrital, desde el año 2019-09 - hasta 08 de 2022, fui trasladado a la Carcel el Buen Pastor del 1 de septiembre de 2022, y en octubre 2022 cuando comienzo el curso de inducción.

Estuve en FASE Y OBSERVACIÓN Y DIAGNOSTICO, hasta el 05 de enero de 2023 fue notificado en FASE ALTA.

La suscrita nota, que solo la persecución es conmigo, INDIRA SOTO NAVARRO, por que mis dos CAUSAS, ANA MARJORI BENAVIDES GARZON, y MAIDA ALEJANDRA BENAVIDES GARZON, mantuvieron su conducta MALA, durante mucho tiempo, que estuvieron, junto a mí en la Carcel Distrital de VARONES ANEXO DE MUJERES, más sin embargo les pedí mi su

(5)



tiempo de prisión concediéndole (7) meses (23) días y tales personas privadas de su libertad, como la Suscrita P.P.L, Por lo tanto considero que es una Persecución personal, por VIA DE HECHO, ya que he reclamado mis derechos con tutelas que me amparan el derecho, con HABEAS CORPUS, DESACATOS, IMPULSO PROCESAL, Apelación y Reposición por el Sistema Criminario, peticiones, y todas mis inconformidades, por desconocer mi LIBERTAD CONDICIONAL

### ANEXO

- 1) Anexo Fase ALTA SEGURIDAD.
- 2) Resolución Favorable No 10601, del 05 de julio de 2023.
- 3) FALLO DE TUTELA, ilegible, donde amparo mis derechos.
- 4) AUTO de 23 de julio de (2023)
- 5) AUTO de (24) de noviembre (2022)
- 6) AUTO 46401-23 donde reconocen (7) meses (23,88) días a mis Causas ANA MARJORITA BENAVIDES GARZÓN.
- 7) Certificado de Conductos por trabajo y estudio Carcel Distrital de Varones



- 7 -

ANEXO DE MUJERES. donde aparece los  
3 meses de mi conducta MALA, comienza  
Buena, Buena Mala, Ejemplar, Buena, Sobre-  
saliente,

Anexo copia de la Defensoría del Pueblo  
del junio 26 de 2023. Notifícase 11/07/2023

### Notificación

Recibire notificación en la Rectusión  
de Mujeres el Buen Pastor, Patio(3) hano  
(3A) celosa (11)

Atentamente,

Trinidad María Soto Navarro

CCF 22520764

ID # 79392

MU 1 # (79) 1150370

correo: ejep08bt@cendj.ramajudicial.gov.co

secsptribsupbta@cendj.ramajudicial.gov.co

proasosjudiciales@procuraduria.gov.co

(1)



**INPEC**



La justicia es de todos

MinJusticia

**CPAMSM BOGOTA - REGIONAL CENTRAL**

Fecha generación: 05/01/2023 03:29 PM

**CLASIFICACIÓN EN FASE Y/O SEGUIMIENTO**

**DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO**

Bogota Distrito Capital, 05 de Enero de 2023

Señor(a):

**SOTO NAVARRO INDIRA MARIA**

N.U 1150370

Ubicación: PABELLON 3, PISO 3, PASILLO 1, CELDA 11

Teniendo en cuenta que usted fue condenado mediante providencia proferida por el

**UZGADO 8 DE EJECUCION DE PENAS BOGOTA D.C.**

por el delito(s) de **TRAFFICO FABRICACION O PORTE DE ESTUPEFACIENTES-CONCIERTO PARA DELINQUIR**

El Consejo de Evaluación y Tratamiento le comunica que dando cumplimiento a los artículos No. 144 y 145 de la Ley 65 y con base en el estudio y análisis de la evaluación - diagnóstico lo ha ubicado en la Fase de Tratamiento

**ALTA SEGURIDAD**

mediante Acta No.

**129-001-2023**

del

**04/01/2023**

en la cual se sugiere el siguiente plan de tratamiento:

**Estrategias de Intervención:**

participar activamente de las sesiones de atención psicológica individual a partir de la elaboración de un diagnóstico y actuación de trabajo social, desde los 4 ejes de acción de trabajo: "la prestacional o asistencial, la preventiva, promocional y de acompañamiento abordar la problemática identificada. programa de atención trabajo social asistir a las actividades programadas del sistema de oportunidades programas laborales y/o educativos. asistir a las sesiones o encuentros de mesas redondas del programa misión carácter

**Objetivos:**

mejorar condiciones emocionales, de ansiedad y de autocontrol actuales por medio de atención psicológica individual  
mejorar las condiciones y calidad de vida de las ppl, durante el tiempo de privación de la libertad, desde un desarrollo integral de la persona en sus dimensiones afectiva, cultural y social. programa de atención trabajo social.  
sensibilización del privado de libertad con el fin de fortalecer sus capacidades, habilidades, destrezas y potencialidades, a través de la vinculación a programas laborales y/o educativos.  
transformar con un carácter comprometido y de alta exigencia ética, nuestro mundo inmediato y abrir la construcción de cultura sana, productiva y próspera en todos sus aspectos desde lo material hasta lo ético en el programa misión carácter.

**Criterio de Exito :**

Disminución de auto reportes sobre los niveles de ansiedad, depresión y otros síntomas asociados a la atención psicológica individual. (dejar registros de atención en sisispec)  
aprovechamiento del 100% de los servicios sociales enfocados a las necesidades primarias sociales a través de una adecuada lectura de la ppl en la atención de programa de atención trabajo social (dejar registros de atención en sisispec)  
realizar las actividades asignadas de manera acorde y obtener desempeño sobresaliente de programas laborales y/o educativos.

rp\_comunicacion\_fase\_tto

USUARIO: LG29684608



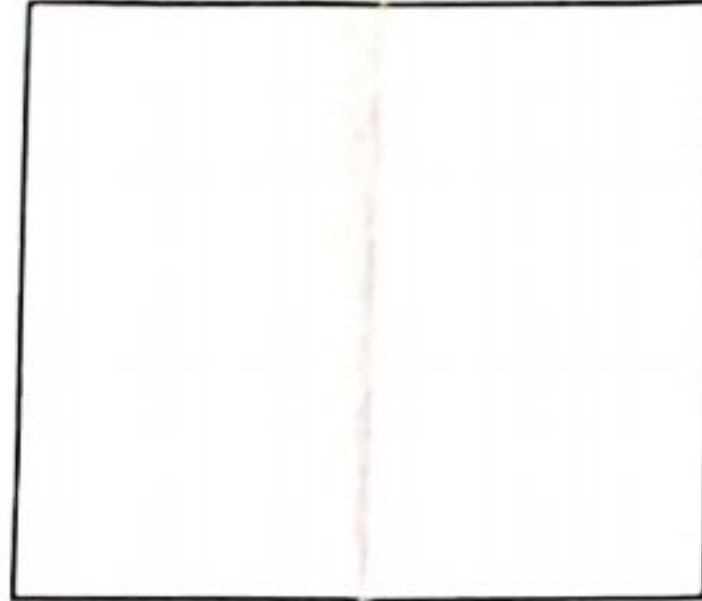


## CLASIFICACIÓN EN FASE Y/O SEGUIMIENTO

### DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO

realiza los talleres programados en el programa misión carácter

El interno manifiesta: Aceptar ☐ No aceptar ☐ el Tratamiento Penitenciario sugerido  
El interno manifiesta: Aceptar ☐ No aceptar ☐ la fase de tratamiento asignada.



HUELLA

**INDIRA MARIA SOTO NAVARRO**

Nombre del Interno

*Esperanza Gallón*  
**LUZ ESPERANZA GALLON LOMELIN**

Funcionario que Comunica



Bogotá D.C. 05 de JULIO de 2023

Señores,  
**JUZGADO 8 DE EJECUCIÓN DE PENAS DE BOGOTA D.C.**  
Calle 11 No. 9ª - 24  
Edificio Kaysser  
**PPL. SOTO NAVARRO INDIRA MARIA**  
**Radicado: 2019-02571**

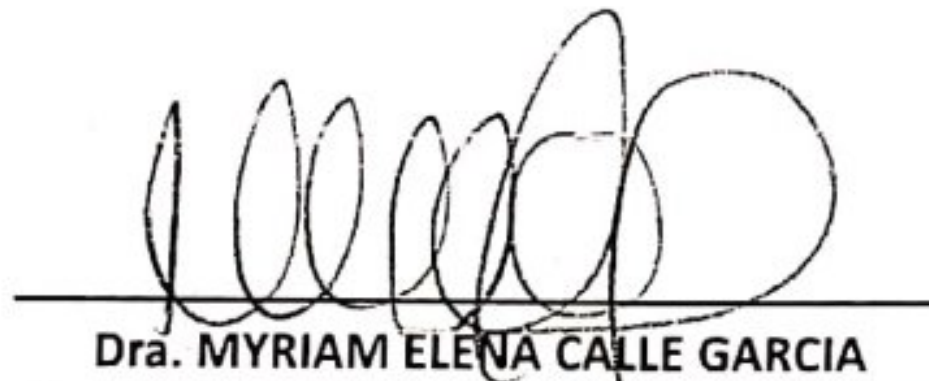
Reclusión de Mujeres de Bogotá  
Nu. **1150370** P. 3  
**REF: RESOLUCIÓN FAVORABLE PARA POSIBLE LIBERTAD CONDICIONAL**

Se remite los documentos de la PPL, **SOTO NAVARRO INDIRA MARIA** para el estudio del subrogado de libertad condicional de la condenada, en virtud al artículo 64 C.P:

1. CARTILLA BIOGRÁFICA
2. HISTORIAL DE CONDUCTA
3. RESOLUCIÓN FAVORABLE No. 1069 DEL 05 DE JULIO DE 2023

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



**Dra. MYRIAM ELENA CALLE GARCIA**  
Directora Cárcel y penitenciaria con Alta y Mediana Seguridad para Mujeres de Bogotá

  
**DG. ASTRID MILENA QUINTERO SOSA**  
Asesor Jurídico Establecimiento CPAMSM Bogotá

ELABORÓ: ANA MARIA SANCHEZ  
PROYECTO: ANA MARIA SANCHEZ  
REVISÓ: DG. ASTRID QUINTERO - ASESORA JURÍDICA  
FECHA: 5 JULIO 2023  
Carrera 58 No. 80-95 Entre Rios  
TELEFAX. 3111626

(10)



## RES. FAV ESTUDIO LIBERTAD CONDICIONAL PPL SOTO NAVARRO INDIRA MARIA

1 mensaje

7 de julio de 2023, 16:13

Juridica RM Bogota <juridica.rmbogota@inpec.gov.co>

Para: "Ventanilla 2 Centro Servicios Juzgado Ejecucion Penas Medidas Seguridad - Bogotá - Bogotá D.C."

<ventanilla2csjepmsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Cordial saludo,

Cordial saludo,


De conformidad con la solicitud interpuesta por la PPL en mención y una vez realizado el estudio de libertad condicional, al presente se adjunta **RESOLUCIÓN FAVORABLE** No. 1069 de la PPL SOTO NAVARRO INDIRA MARIA para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

Juridica RM Bogota

**INPEC**  
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

 **COLOMBIA**  
POTENCIA DE LA  
**VIDA**

 RESFAV.PPL. SOTO NAVARRO INDIRA MARIA.pdf  
2628K



12)



El capitán más experto que se le presentará al momento de salir a la mara, el capitán de la fuerza naval, se encargará de la custodia y traslado de los restos a bordo de una flota de Navarri, por lo cual la Santa abordará el estuario del río.

procedente de un fraude a pesar de la seguridad de su oferta  
basada en CC 1 (a) de 2012)

En lo que concierne a las peticiones ante los jueces de  
especialidad de penales, como lo tiene establecido el artículo 1.º de la Ley  
de la Corte Suprema de Justicia, puede representarse en cualquier  
tiempo, no obstante, esta consideración no constituye medio alguno  
que el funcionario judicial competente deba resolver de fondo las  
solicitudes en las cuales simplemente se afirma lo pretendido con  
antoridad, pues:

1. *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud. - Common in wetlands, along waterways, and in coastal areas. It is a tall, grass-like plant with long, narrow leaves and a dense, upright growth habit.

[illegible]

prostituição de fundos, dando-lhes condições para serem utilizados

En el auto del 24 de noviembre de 1977 se dispuso que se le conceda el Premio a Modesto de la Cruz, el cual se entregará personalmente al representante de la Academia de la Lengua en la ciudad de Nueva San Salvador, o en su defecto, al representante de la Academia a la acreditación del mismo y la valoración de la personalidad de su conducta, en esa oportunidad, respecto del punto expuesto, considero que:



...sus derechos de separación por medio de la  
...los recursos ordinarios.

...de sus derechos y favorecer las demás  
...hasta la plena vigencia de la igualdad.  
...sobre la impunidad  
...de los recursos ordinarios  
...derechos.

...Tribunal Superior de  
Bogotá, D. C., en Sala de Decisión de Tutela, administrando  
...de la ley.

#### RESUELVE:

Primero: TUTELAR el derecho fundamental del demandante  
...por los recursos ordinarios.

Segundo: En caso contrario, ORDENAR...  
...de la igualdad...  
...de la igualdad...  
...de la igualdad...  
...de la igualdad...

Tercero: notificar esta providencia de conformidad con el  
artículo 30 del Decreto 2501 de 1991.

Cuarto: Dejar sin efecto esta determinación dentro de  
los tres (3) días siguientes a la notificación, remitiendo la  
actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

ALEXANDRA OSSA SÁNCHEZ  
Magistrada

FERNANDO ADOLFO PAREJA REINEMER  
Magistrado

ALBERTO POVEDA PERDOMO  
Magistrado

115)



3

Radicación : 11001600000020190257100 (NI 1999)  
Condenado : Indira María Soto Navarro  
Identificación : 22.520.764  
Fallador : Juzgado 4º Penal del Circuito Especializado de Conocimiento de Bogotá  
Delitos : Concierto para delinquir agravado y tráfico de estupefacientes  
Decisión : Redime pena, niega condicional  
Reclusión : Reclusión de Mujeres el Buen Pastor  
Normatividad : Ley 906 de 2004

AUTO NO.

9.05.23

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



JUZGADO OCTAVO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE  
SEGURIDAD DE BOGOTÁ

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de julio de dos mil veintitrés (2023)

ASUNTO

En atención a lo ordenado por una Sala Penal del Tribunal Superior del distrito judicial de Bogotá en sentencia de tutela adoptada dentro del radicado 11001 22 04 000 2023 02215 00, el despacho se pronuncia en torno a la libertad condicional de la condenada **INDIRA MARÍA SOTO NAVARRO**.

ANTECEDENTES

Este despacho ejecuta la pena de sesenta y seis (66) meses de prisión amen del pago de la multa equivalente a mil ochocientos ochenta y dos punto sesenta y siete (1882,67) salarios mínimos mensuales legales vigentes que, por el delito de concierto para delinquir agravado y tráfico de estupefacientes, impuso a **INDIRA MARÍA SOTO NAVARRO** el Juzgado 4º Penal del Circuito Especializado de Conocimiento de Bogotá en sentencia de 27 de abril de 2022.

Por cuenta de esta actuación, la prenombrada condenada viene privada de la libertad desde el 12 de junio de 2019, reconociéndose a su favor las siguientes redenciones de pena:

PROVIDENCIAS	DESCUENTO	
	MESES	DÍAS
24-11-2022	00	17.00

11001600000020190257100 (NI 1999)



09-05-2023	00	15.00
<b>TOTAL</b>	<b>01</b>	<b>02.00</b>

### LA SOLICITUD

Mediante sentencia de tutela de 12 de julio hogaño, adoptada dentro del radicado 2023 02215 00, una Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá ordenó: *«se pronuncie de fondo respecto de la solicitud de libertad condicional elevada por la accionante el 16 de diciembre de 2022, teniendo en cuenta los aspectos novedosos que en esta se plantean y que no hicieron parte de la motivación del auto del 24 de noviembre de ese mismo año».*

### CONSIDERACIONES

La libertad condicional es un mecanismo sustitutivo de la pena de prisión que se instituyó como instrumento de resocialización y de reinserción social del individuo, cuyo objeto está encaminado a brindar al condenado la oportunidad de que, en su caso y bajo ciertas condiciones en consideración al tiempo de pena cumplido y a la conducta presentada en dicho lapso, se pueda dejar de ejecutar la condena, primero a manera de prueba durante un tiempo determinado (el que faltare para el cumplimiento de la condena) y luego de forma definitiva si lo exigido se cumple.

El artículo 471 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), impone al interesado en el subrogado la obligación de adjuntar con la solicitud la resolución favorable expedida por el Consejo de Disciplina o, en su defecto, por el director del establecimiento penitenciario, copia de la cartilla biográfica debidamente actualizada y de los demás documentos que acrediten las exigencias previstas en el Código Penal, requisitos estos que se erigen como **presupuesto de procesabilidad** para posibilitar el estudio del subrogado

A su turno el artículo 30 de la Ley 1709 de 2014, que modificó el artículo 64 del Código Penal, establece los **requisitos sustanciales** básicos para la concesión del mencionado subrogado, esto es, que el sentenciado haya descontado mínimo las tres quintas (3/5) partes de la pena que se le impuso y reparado a la víctima (lo que se ha denominado *«factor objetivo»*) y que de la buena conducta durante el cautiverio, así como de la valoración de la conducta punible objeto de reproche, el Juez pueda colegir que no existe necesidad de proseguir el tratamiento penitenciario (*«factor subjetivo»*) y, finalmente, que se acredite el arraigo familiar y social del penado.

Descendiendo al asunto objeto de análisis, tenemos que se acreditó el cumplimiento del primer presupuesto en mención (*procesabilidad*) por

11001600000020190257100 (NI 1999)

2 (17)



cuanto la dirección de la Reclusión de Mujeres de Bogotá «El Buen Pastor», en anterior oportunidad, allegó los soportes documentales que exige el mencionado artículo 471 del Código de Procedimiento Penal a saber, cartilla biográfica actualizada, certificados de conducta y la resolución favorable 0003 de 3 de enero hogano; en consecuencia procederá el Despacho a estudiar las exigencias objetivas y subjetivas consagradas en el artículo 64 del Código Penal, modificado por el artículo 30 de la Ley 1709 de 2014.

Tal cual se indicó en precedencia, **INDIRA MARÍA SOTO NAVARRO** descuenta una condena de sesenta y seis (66) meses de prisión, por lo que las tres quintas partes de esa sanción equivalen a treinta y nueve (39) meses y dieciocho (18) días.

Como la encartada viene privado de la libertad desde el 12 de junio de 2019, ha descontado físicamente cuarenta y nueve (49) meses y catorce (14) días discriminados así:

2019	- - - - -	06 meses y 19 días
2020	- - - - -	12 meses y 00 días
2021	- - - - -	12 meses y 00 días
2022	- - - - -	12 meses y 00 días
2023	- - - - -	06 meses y 25 días

Al anterior guarismo han de adicionarse un (1) mes y dos (2) días reconocidos hoy como redención de pena, de donde se desprende que, a la fecha, **SOTO NAVARRO** acredita un descuento total de pena de **CINCUENTA (50) MESES Y DIECISÉIS (16) DÍAS**, satisfaciéndose la exigencia cuantitativa mínima prevista por el legislador en el artículo 64 del Código Penal.

En punto de la comprobación del arraigo familiar y/o social, en anterior oportunidad la condenada afirmó residir en la «Carrera 79 número 10 D – 95, Bloque 7, Apartamento 104 de Bogotá», junto con la quien al parecer es su familiar, el señor *Néstor de Jesús Martínez*, información que se encuentra soportada con un escrito que elaboró el prenombrado, varias fotografías del interior del predio y un recibo de servicio público domiciliario del mismo, elementos que en principio acreditan su existencia; por lo tanto, se dispone dar plena credibilidad a la información suministrada por virtud del principio de buena fe consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política.

Con relación a la indemnización de los daños, las conductas punibles por las cuales se profirió condena no genera ese tipo de responsabilidad en cabeza del sancionado.



Ahora, sobre el desempeño de la sentenciada durante el cautiverio tenemos que, según lo informado por la Reclusión de Mujeres de Bogotá «El Buen Pastor», su conducta únicamente ha sido calificada como «buena», de conformidad con la cartilla biográfica que se allegó, lo que conllevó a que el consejo de disciplina del penal expidiera la Resolución 0003 del pasado 3 de enero por medio de la cual conceptuó favorablemente la concesión de la gracia que nos ocupa.

No obstante, lo propio no ocurre con el denominado factor subjetivo toda vez que, después de un concienzudo análisis de la actuación, se revelan al Despacho serios motivos que llevan a desestimar la pretensión liberatoria por fallar lo relativo a la valoración de la conducta punible y, en punto de ello, conviene hacer ciertas precisiones, y traer a colación las consideraciones realizadas por la Corte Constitucional en Sentencia C-194 de 2005, que sobre el particular manifestó:

*En primer lugar, debe advertirse que el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad no puede apartarse del contenido de la sentencia condenatoria al momento de evaluar la procedencia del subrogado penal. Esta sujeción al contenido y juicio de la sentencia de condena garantiza que los parámetros dentro de los cuales se adopta la providencia del Juez de Ejecución de Penas y Medidas de seguridad sea restringido, es decir, no pueda versar sobre la responsabilidad penal del condenado.*

*En los mismos términos, cuando la norma acusada dice que la libertad condicional podrá concederse previa valoración de la gravedad de la conducta, no significa que el Juez de Ejecución de Penas y Medida de Seguridad quede autorizado para valorar la gravedad de la conducta. Lo que la norma indica es que dicho funcionario deberá tener en cuenta la gravedad del comportamiento punible, calificado y valorado previamente en la sentencia condenatoria por el juez de conocimiento, como criterio para conceder el subrogado penal.*

*Adicionalmente, el juicio que adelanta el Juez de Ejecución de Penas tiene una finalidad específica, cual es la de establecer la necesidad de continuar con el tratamiento penitenciario a partir del comportamiento carcelario del condenado.*

*En este contexto, el estudio del Juez de Ejecución no se hace desde la perspectiva de la responsabilidad penal del condenado resuelta ya en la instancia correspondiente, ante el juez de conocimiento- sino desde la necesidad de cumplir una pena ya impuesta. En el mismo sentido, el estudio versa sobre hechos distintos a los que fueron objeto de reproche en la sentencia condenatoria, cuáles son los ocurridos con posterioridad a la misma, vinculados con el comportamiento del sentenciado en reclusión.*

*(...)*

*Así pues, para conceder el subrogado penal de la libertad condicional, el juez debe verificar, tanto el cumplimiento de los requisitos objetivos exigidos por la norma (haberse cumplido las dos terceras partes de la pena y haberse pagado la multa, más la reparación a la víctima), como el cumplimiento de los requisitos subjetivos que se derivan de la valoración de las condiciones particulares del condenado, valoración que de ninguna manera implica una nueva condena por los mismos hechos.*



En la sentencia de control C-757 de 2014, la misma Corte estudió si esa valoración posterior de la conducta afectaba el *non bis in idem*, jurisprudencia de la cual se resaltarán, para ilustración, algunos apartados:

*23. Para la Corte, aunque hay identidad de persona, no existe ni identidad de hechos, ni identidad de causa. No existe una identidad total de hechos en la medida en que si bien el juez de ejecución de penas debe valorar la conducta punible, debe analizarla como un elemento dentro de un conjunto de circunstancias. Sólo una de tales circunstancias es la conducta punible. Además de valorar la conducta punible, el juez de ejecución de penas debe estudiar el comportamiento del condenado dentro del penal, y en general considerar toda una serie de elementos posteriores a la imposición de la condena. Con fundamento en este conjunto de circunstancias, y no sólo en la valoración de la conducta punible, debe el juez de ejecución de penas adoptar su decisión.*

En la misma providencia, indicó:

*24. Adicionalmente, la Corte concluye que tampoco existe identidad de causa, pues el objeto de la decisión en uno y otro caso es diferente. El proceso penal tiene por objeto determinar la responsabilidad penal del sindicado por la conducta que le está siendo imputada en el proceso, e imponerle una pena de conformidad con una serie de circunstancias predicables de la conducta punible. Entre tanto, al juez de ejecución de penas le corresponde determinar si la ejecución de dicha pena es necesaria o no, una vez que la conducta ha sido valorada y la pena ha sido impuesta. Ello implica que no sólo se trata de causas diferentes, sino que el ejercicio de la competencia del juez penal limita los alcances de la competencia del juez de ejecución de penas. En primer lugar, porque el juez de ejecución de penas no puede valorar de manera diferente la conducta punible, ni puede tampoco salirse del quantum punitivo determinado por el juez penal”.*

Luego, la exigencia de valoración de la conducta punible por parte del Juez de Ejecución de Penas resulta ser exequible siempre y cuando se haga con total apego a las circunstancias, elementos y consideraciones realizadas por el juez fallador de instancia en el fallo condenatorio sean éstas favorables o desfavorables para la concesión del subrogado, posición reiterada en la Sentencia T-640 de 2017, la cual valga decir, trae a colación el condenado en su escrito. En esta última providencia se consignó lo siguiente:

*7.3. Así, los jueces competentes para decidir acerca de una solicitud de libertad condicional deben interpretar y aplicar el inciso 1° del artículo 30 de la Ley 1709 de 2014, tal como fue condicionado en la Sentencia C-757 de 2014, esto es, bajo el entendido de que **la valoración que realice de la conducta punible tenga en cuenta las circunstancias, elementos y consideraciones hechas por el juez penal en la sentencia condenatoria, sean estas favorables o desfavorables al otorgamiento de la libertad condicional.***

(...)

*Lo relevante de este asunto es que la Corte reiteró la importancia constitucional que tienen la resocialización de las personas condenadas y la*



*finalidad preventiva especial de la pena. Por ello, indicó que el Juez de Ejecución de Penas si bien puede tener en cuenta la conducta punible, la personalidad y antecedentes de todo orden para efectos de evaluar el proceso de readaptación social del condenado en procura de proteger a la sociedad de nuevas conductas delictivas, en todo caso, debe valorar la conducta punible teniendo en cuenta las circunstancias, elementos y consideraciones hechas por el juez penal en la sentencia condenatoria, sean estas favorables o desfavorables al otorgamiento de la libertad condicional de los condenados. (Vergara del Aguayo).*

Es de anotar que los precedentes jurisprudenciales traídos a colación son vinculantes y en los mismos se ha señalado que el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad debe analizar el tópico de la conducta punible sin inmiscuirse en la competencia del juez penal de conocimiento y le está vedado realizar valoraciones distintas a las analizadas por el fallador.

De modo que, cuando el Juez Ejecutor debe abordar el aspecto relacionado con la valoración de la conducta, ha de invocar las mismas consideraciones que el juez de conocimiento determinó como indicativas de la gravedad; por ende, al respecto, el Juez de Instancia, al negar la concesión un mecanismo sustitutivo, advirtió lo siguiente:

*[...] por lo demás, las conductas desplegadas no pueden menos que catalogarse de graves, si se tiene en cuenta la ejecución de un comprendido de actividades ilícitas planeadas y coordinadas con la finalidad de comercializar pequeñas cantidades de sustancias alucinógenas, así como la de transportar grandes dosis en el barrio Kennedy de esta ciudad a través de maniobras, las cuales se prolongaron durante algunos meses con el único objetivo de obtener un provecho económico sin consideración al daño que podrían causar esas sustancias a los habitantes del territorio nacional, especialmente a los residentes de dicho barrio que habitualmente concurren dichos espacios públicos, así la protección a la comunidad de las víctimas, a las que se alude en el artículo 2° del Código de Procedimiento Penal como principio rector, prevalece e informa el contenido del ordenamiento jurídico procesal, es el que permite afirmar que la detención intramural se hace indispensable y necesaria en este caso, máxime que esta protección no debe entenderse solamente en el campo de la prevención especial sino la general desde el punto de la prevención general la sociedad, debe conocer la drástica con la que deben ser tratados ciertos comportamientos aspecto que lleva a fortalecer la confianza de los ciudadanos en un sistema jurídico cuyo objeto general es regular la vida del hombre en sociedad, para que exista sea mejor, además del mensaje de justicia que debe quedar en contra oposición a la estipulación de la impunidad por la que la benevolencia al adoptar decisiones en casos como la que aquí se está analizando.*

Bajo esa misma dirección y gracias a la narración fáctica expuesta en la sentencia condenatoria, se puede concluir que estamos frente a conductas punibles altamente nocivas y reprochables, pues las mismas sumergen al conglomerado en un constante estado de zozobra toda vez que siembran en la ciudadanía miedo y desconfianza, razón por la cual legislador ha consagrado penas considerablemente altas para combatir su proliferación.

REPUBLICA VENEZOLANA



Nótese que la condenada, conocida con el alias «Indira», consciente de las consecuencias nefastas para niños, jóvenes, adultos y ancianos y con el único propósito de lucrarse fácilmente, hizo parte de la organización criminal denominada «Las Patisucias» dedicada al tráfico de estupefacientes en pequeñas cantidades en la Localidad de Kennedy de esta ciudad capital, específicamente en los barrios «Las Delicias, Villa Nueva, Nueva York, San Lucas, Carvajal e Igualdad», utilizando diferentes lugares públicos para almacenar y vender los alucinógenos que comercializaban.

Aquí conviene precisar que el rol que desempeñaba la sentenciada en la organización criminal resultaba trascendental para el cumplimiento del fin ilegal, pues era quien comercializaba el estupefacientes dentro de la línea asignada a alias «Néstor», actuar delictivo que se encuentran debidamente documentados a través de las diferentes interceptaciones y registros fotográficos contenidos en los informes de vigilancia y seguimiento elaborados por policía judicial.

No puede perderse de vista que este tipo de acciones están revestidas de una alta lesividad y, por tanto, son dignas del máximo reproche, dado el impacto negativo que genera no solo en la salud del conglomerado sino en otros aspectos como el orden económico y social e incluso, si se quiere, la seguridad pública y la vida de los asociados, pues para nadie es un secreto que el tráfico de estupefacientes es un delito pluriofensivo y en muchas ocasiones se constituye en la puerta escénica para la comisión de otros ilícitos incluso de mayor nocividad.

De modo que sus conductas punibles permiten deducir fundadamente la personalidad desbordada del sentenciado y lo muestran como un ciudadano carente de respeto por el ordenamiento jurídico y de límites comportamentales, quien con tal de satisfacer sus intereses ilícitos, poco le importa afectar la salud de la población e incluso de la vida de los congéneres, de ahí que se torne improcedente su liberación anticipada, aun cuando sea condicional.

Y es que la capacidad logística que alcanzó en tampoco tiempo la organización delictiva que integraba, le permitió a la organización criminal controlar la venta de estupefacientes en diferentes barrios de la Localidad de Kennedy, llegando incluso a corromper la fuerza pública al entregar diferentes sumas de dinero cuando alguno de sus miembros eran capturados, circunstancias que inciden precisamente en que el conglomerado no vea con buenos ojos que este tipo de infractores sean agraciados con la libertad anticipada, lo cual a su vez alentaría a otras personas a incurrir en similares delitos, bajo el supuesto equivoco de que no tendrán que cumplir la totalidad de la pena, máxime cuando no se cuenta con elementos ciertos que den cuenta de un verdadero

11001600000020190257100 (NI 1999)



arrepentimiento y resocialización y que, a su vez, garanticen que no continuará realizando la misma actividad delictiva al salir de prisión.

En efecto, revisada la cartilla biográfica aportada por las autoridades penitenciarias, especialmente la remitida por la Cárcel Distrital de Varones Anexo Mujeres, lugar donde permaneció recluida entre junio de 2019 y septiembre de 2022, se observa que la condenada no ha tenido un progreso significativo en su tratamiento penitenciario, pues de un lado, su conducta para los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021 fue calificada en el grado «Mala», para después ser promovida a «Buena» el 18 de diciembre de 2021, distinción que al parecer conserva a la fecha ya que no ha logrado alcanzar la calificación «Ejemplar».

Y de otro, conforme lo informado por la Reclusión de Mujeres «El Buen Pastor», pese a sus más de cuatro (4) años de reclusión no ha logrado superar la primera fase del tratamiento penitenciario permaneciendo en «Observación y diagnóstico», aspecto resulta de gran importancia para el estudio que hoy se adelanta, pues según la Resolución 7302 de 2005 del INPEC, en las fases subsiguientes del tratamiento, como la denominada «mediana seguridad», el interno accede a programas educativos y laborales, además de orientarse a fortalecer su ámbito personal con el fin de adquirir, afianzar y desarrollar hábitos y competencias socio laborales, incluso, en la fase «mínima seguridad» se establecen estrategias para afrontar la integración social positiva y la consolidación de su proyecto de vida en libertad, de ahí que al no contar con estos programas de rehabilitación muy difícilmente puede concluirse que no existe necesidad de continuar con su proceso de penitenciario dada la magnitud de los delitos cometidos.

De manera que en el presente asunto la valoración de la conducta punible tiene un resultado negativo por las razones descritas, por ello, el accionar de la penada en mención amerita severidad en la efectividad material del tratamiento penitenciario, en la medida que es la manera como lo teóricamente previsto en la Ley llega a tener existencia real.

Por lo expuesto, se negará la libertad condicional a **INDIRA MARÍA SOTO NAVARRO**, toda vez que la valoración de la forma como se ejecutó la conducta punible devela que carece de respeto hacia las normas y sus semejantes, por lo que prevalece el fin de protección al conglomerado, entre tanto surte efectos el tratamiento penitenciario.

### Cuestión final

Por el Centro de Servicios Administrativos, remítase copia de la presente providencia a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá

11001600000020190257100 (NI 1999)



con el fin de que obre dentro de la acción de tutela identificada con el radicado 11001 22 04 000 2023 02215 00.

En mérito de lo expuesto, el **JUZGADO OCTAVO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BOGOTÁ**,

**RESUELVE:**

**PRIMERO: NEGAR** el subrogado de la **LIBERTAD CONDICIONAL** a **INDIRA MARÍA SOTO NAVARRO** de conformidad con lo anotado.

**SEGUNDO: DESE** cumplimiento a lo dispuesto en el acápite denominado «Cuestión Final».

**TERCERO: ENVIAR** copia de esta determinación a la Penitenciaría «El Buen Pastor» para fines de consulta y que obre en la hoja de vida de la penada.

**CUARTO:** Contra esta providencia proceden los recursos de ley.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

ARMANDO PADILLA ROMERO  
JUEZ

Elr

11001600000020190257100 (NI 1999)

(24)



Radicación : 11001600000020190257100 (NI 1999)  
Condenado : Indira María Soto Navarro  
Identificación : 22.520.764  
Fallador : Juzgado 4º Penal del Circuito Especializado de Conocimiento de Bogotá  
Delitos : Concierto para delinquir agravado y tráfico de estupefacientes  
Decisión : Recima pena, niega condicional  
Reclusión : Reclusión de Mujeres el Buen Pastor  
Normatividad : Ley 906 de 2004

AUTO NO. 13290222

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



JUZGADO OCTAVO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE  
SEGURIDAD DE BOGOTÁ

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

ASUNTO

Se pronuncia el despacho en torno a la solicitud de libertad condicional formulada por la condenada **INDIRA MARÍA SOTO NAVARRO**, previo al estudio de redención de pena conforme la documentación remitida tanto por la Cárcel Distrital de Varones anexo Mujeres como por la Reclusión de Mujeres «El Buen Pastor».

ANTECEDENTES

Este despacho ejecuta la pena de sesenta y seis (66) meses de prisión amen del pago de la multa equivalente a mil ochocientos ochenta y dos punto sesenta y siete (1882,67) salarios mínimos mensuales legales vigentes que, por el delito de concierto para delinquir agravado y tráfico de estupefacientes, impuso a **INDIRA MARÍA SOTO NAVARRO** el Juzgado 4º Penal del Circuito Especializado de Conocimiento de Bogotá en sentencia de 27 de abril de 2022.

Por cuenta de esta actuación, la prenombrada condenada viene privada de la libertad desde el 12 de junio de 2019 sin que a su favor se hubiere reconocido redención de pena alguna.

LA SOLICITUD

La dirección de la Cárcel Distrital de Varones anexo Mujeres y la Penitenciaria Femenina «El Buen Pastor» a través de dos (2) diferentes oficios, hacen llegar los comprobantes de las actividades realizadas por

11001600000020190257100 (NI 1999)



**SOTO NAVARRO** en desarrollo del régimen ocupacional, además de su cartilla biográfica debidamente actualizada, certificados de conducta y Resolución Favorable, para el estudio de redención de pena y libertad condicional.

### CONSIDERACIONES

#### 1.º De la redención punitiva.

La legislación que ha regulado el reconocimiento judicial de las actividades realizadas por los condenados para rebaja de pena por estudio, trabajo o enseñanza (Ley 32 de 1971, Decreto 2119 de 1977, Ley 600 de 2000 y Ley 65 de 1993), exige para tal efecto, que las labores en cuestión estén certificadas por el director del establecimiento donde se descuenta la sanción, y que el condenado haya observado buena conducta durante los periodos en los cuales realizó las tareas válidas para la reducción de la pena, circunstancia que debe acreditar con la resolución del Consejo de Disciplina o certificación del propio director del centro de reclusión.

Adicionalmente a partir de la vigencia de la Ley 65 de 1993 (agosto 19), las labores propias de redención no son válidas los días domingos y festivos salvo por excepción, debidamente justificada por el director del reclusorio (art. 100). Ahora bien, el Decreto 2119 de 1977 y la Ley 65 de 1993, señalan que las tareas propias para redimir la sanción, se limitarán a 8 horas diarias por trabajo, 6 por estudio y 4 por enseñanza.

Por otra parte el artículo 101 de la Ley 65 de 1993 prevé que para conceder o negar la redención el Juez deberá tener en cuenta la evaluación que se haga del trabajo, estudio o enseñanza por la junta correspondiente, de conformidad con las previsiones de los artículos 81 y 96 ibidem. La Resolución 3272 del 26 de mayo de 1995, vigente a partir del primero de julio de esa anualidad, emitida por el Inpec reglamentó lo concerniente a la evaluación de las labores adecuadas para redimir pena, indicando en sus artículos 27 a 29, quienes integran la junta de evaluación, los criterios para realizarla, su periodicidad y la forma de registro y control; acto administrativo que fuera subrogado por la Resolución 2376 del 17 de junio de 1997, emitida por la dirección del mismo instituto.

Hechas las precisiones anteriores, se ocupará el despacho del estudio de la documentación aportada para efectuar los reconocimientos a que hubiere lugar de la manera siguiente:

Certificado	Periodo	Horas	Días	Redime
024891	Junio y julio de 2022	204 estudio	34	17 dias

Así las cosas, como las calificaciones de las precitadas actividades educativas realizadas por la condenada **INDIRA MARÍA SOTO NAVARRO** fue sobresaliente y que su comportamiento en los periodos que comprende

11001600000020190257100 (NI 1999)

(26)  
(63)



los precitados certificados objeto de estudio se catalogó como «bueno» y «ejemplar», resulta viable reconocer una redención de pena en proporción de **DIECISIETE (17) DÍAS**, como en efecto se dispondrá en la parte resolutive de este proveído.

## **2° De la libertad condicional.**

Se trata de un mecanismo sustitutivo de la pena de prisión, que se instituyó como instrumento de resocialización y de reinserción social del individuo, cuyo objeto está encaminado a brindar al condenado la oportunidad de que, en su caso y bajo ciertas condiciones en consideración al tiempo de pena cumplido y a la conducta presentada en dicho lapso, se pueda dejar de ejecutar la condena, primero a manera de prueba durante un tiempo determinado (el que faltare para el cumplimiento de la condena) y luego de forma definitiva si lo exigido se cumple.

El artículo 471 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), impone al interesado en el subrogado la obligación de adjuntar con la solicitud la resolución favorable expedida por el Consejo de Disciplina o, en su defecto, por el director del establecimiento penitenciario, copia de la cartilla biográfica debidamente actualizada y de los demás documentos que acrediten las exigencias previstas en el Código Penal, requisitos estos que se erigen como **presupuesto de procesabilidad** para posibilitar el estudio del subrogado

A su turno el artículo 30 de la Ley 1709 de 2014, que modificó el artículo 64 del Código Penal, establece los **requisitos sustanciales** básicos para la concesión del mencionado subrogado, esto es, que el sentenciado haya descontado mínimo las tres quintas (3/5) partes de la pena que se le impuso y reparado a la víctima (lo que se ha denominado «factor objetivo») y que de la buena conducta durante el cautiverio, así como de la valoración de la conducta punible objeto de reproche, el Juez pueda colegir que no existe necesidad de proseguir el tratamiento penitenciario («factor subjetivo») y, finalmente, que se acredite el arraigo familiar y social del penado.

Descendiendo al asunto objeto de análisis, tenemos que se acreditó el cumplimiento del primer presupuesto en mención (*procesabilidad*) por cuanto la dirección de la Reclusión de Mujeres de Bogotá «El Buen Pastor» allegó los soportes documentales que exige el mencionado artículo 471 del Código de Procedimiento Penal a saber, cartilla biográfica actualizada, certificados de conducta y la resolución favorable 1930 de 9 de noviembre hogaño; en consecuencia procederá el Despacho a estudiar las exigencias objetivas y subjetivas consagradas en el artículo 64 del Código Penal, modificado por el artículo 30 de la Ley 1709 de 2014.

Tal cual se indicó en precedencia, **INDIRA MARÍA SOTO NAVARRO** descuenta una condena de sesenta y seis (66) meses de prisión, por lo que

11001600000020190257100 (NI 1999)

164  
(27)  
3



las tres quintas partes de esa sanción equivalen a treinta y nueve (39) meses y dieciocho (18) días.

Como la encartada viene privado de la libertad desde el 12 de junio de 2019, ha descontado físicamente cuarenta y un (41) meses y trece (13) días discriminados así:

2019 - - - - 06 meses y 19 días  
2020 - - - - 12 meses y 00 días  
2021 - - - - 12 meses y 00 días  
2022 - - - - 10 meses y 24 días

Al anterior guarismo han de adicionarse los diecisiete (17) días reconocidos hoy como redención de pena, de donde se desprende que, a la fecha, **GARZÓN MORENO** acredita un descuento total de pena de **CUARENTA Y DOS (42) MESES**, satisfaciéndose la exigencia cuantitativa mínima prevista por el legislador en el artículo 64 del Código Penal.

En punto de la comprobación del arraigo familiar y/o social, la condenada ni las autoridades penitenciarias aportaron documento alguno que acredite el cumplimiento de este requisito, circunstancia que aumenta la incertidumbre que existe a este momento pues en la cartilla biográfica se consigna la siguiente información al respecto: «*Dirección No Aporta*», en consecuencia no cumple con esta exigencia legal.

Pese a que lo anterior resultaría suficiente para despachar de manera desfavorable la pretensión liberatoria, en aras de ofrecer una respuesta de fondo, se abordará el estudio de los demás requisitos, es decir, la indemnización de perjuicios, el comportamiento de la penada a lo largo del tratamiento penitenciario y la valoración de la conducta punible.

En punto de lo primero, las conductas punibles por la que se juzgó al aquí condenado no lleva aparejada este tipo de condena crematística pues la seguridad pública es un bien jurídico abstracto e impersonal.

Ahora, sobre el desempeño de la sentenciada durante el cautiverio tenemos que, en términos generales, su conducta ha sido calificada entre «buena» y «ejemplar», de conformidad con la cartilla biográfica que se allegó, lo que conllevó a que el consejo de disciplina del penal expidiera la Resolución 1902 del pasado 2 de noviembre por medio de la cual conceptuó favorablemente la concesión de la gracia que nos ocupa.

De la revisión de tales elementos se concluye que la penada ha observado un adecuado comportamiento durante su reclusión, al punto que siempre ha sido calificado de forma satisfactoria y no ha sido objeto de sanción disciplinaria alguna, lo que da muestra que ha acatado los reglamentos internos del reclusorio y ha ido amoldando su conducta al rigor del tratamiento penitenciario.

11001600000020190257100 (NI 1999)

4  
(28) 1051



No obstante, lo propio no ocurre con el denominado factor subjetivo toda vez que, después de un concienzudo análisis de la actuación, se revelan al Despacho serios motivos que llevan a desestimar la pretensión liberatoria por fallar lo relativo a la valoración de la conducta punible y, en punto de ello, conviene hacer ciertas precisiones, y traer a colación las consideraciones realizadas por la Corte Constitucional en Sentencia C-194 de 2005, que sobre el particular manifestó:

*En primer lugar, debe advertirse que el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad no puede apartarse del contenido de la sentencia condenatoria al momento de evaluar la procedencia del subrogado penal. Esta sujeción al contenido y juicio de la sentencia de condena garantiza que los parámetros dentro de los cuales se adopta la providencia del Juez de Ejecución de Penas y Medidas de seguridad sea restringido, es decir, no pueda versar sobre la responsabilidad penal del condenado.*

*En los mismos términos, cuando la norma acusada dice que la libertad condicional podrá concederse previa valoración de la gravedad de la conducta, no significa que el Juez de Ejecución de Penas y Medida de Seguridad quede autorizado para valorar la gravedad de la conducta. Lo que la norma indica es que dicho funcionario deberá tener en cuenta la gravedad del comportamiento punible, calificado y valorado previamente en la sentencia condenatoria por el juez de conocimiento, como criterio para conceder el subrogado penal.*

*Adicionalmente, el juicio que adelanta el Juez de Ejecución de Penas tiene una finalidad específica, cual es la de establecer la necesidad de continuar con el tratamiento penitenciario a partir del comportamiento carcelario del condenado.*

*En este contexto, el estudio del Juez de Ejecución no se hace desde la perspectiva de la responsabilidad penal del condenado resuelta ya en la instancia correspondiente, ante el juez de conocimiento- sino desde la necesidad de cumplir una pena ya impuesta. En el mismo sentido, el estudio versa sobre hechos distintos a los que fueron objeto de reproche en la sentencia condenatoria, cuales son los ocurridos con posterioridad a la misma, vinculados con el comportamiento del sentenciado en reclusión.*

*(...)*

*Así pues, para conceder el subrogado penal de la libertad condicional, el juez debe verificar, tanto el cumplimiento de los requisitos objetivos exigidos por la norma (haberse cumplido las dos terceras partes de la pena y haberse pagado la multa, más la reparación a la víctima), como el cumplimiento de los requisitos subjetivos que se derivan de la valoración de las condiciones particulares del condenado, valoración que de ninguna manera implica una nueva condena por los mismos hechos.*

En la sentencia de control C-757 de 2014, la misma Corte estudió si esa valoración posterior de la conducta afectaba el *non bis in idem*, jurisprudencia de la cual se resaltarán, para ilustración, algunos apartados:

11001600000020190257100 (NI 1999)



23. Para la Corte, aunque hay identidad de persona, no existe ni identidad de hechos, ni identidad de causa. No existe una identidad total de hechos en la medida en que si bien el juez de ejecución de penas debe valorar la conducta punible, debe analizarla como un elemento dentro de un conjunto de circunstancias. Sólo una de tales circunstancias es la conducta punible. Además de valorar la conducta punible, el juez de ejecución de penas debe estudiar el comportamiento del condenado dentro del penal, y en general considerar toda una serie de elementos posteriores a la imposición de la condena. Con fundamento en este conjunto de circunstancias, y no sólo en la valoración de la conducta punible, debe el juez de ejecución de penas adoptar su decisión.

En la misma providencia, indicó:

24. Adicionalmente, la Corte concluye que tampoco existe identidad de causa, pues el objeto de la decisión en uno y otro caso es diferente. El proceso penal tiene por objeto determinar la responsabilidad penal del sindicado por la conducta que le está siendo imputada en el proceso, e imponerle una pena de conformidad con una serie de circunstancias predicables de la conducta punible. Entre tanto, al juez de ejecución de penas le corresponde determinar si la ejecución de dicha pena es necesaria o no, una vez que la conducta ha sido valorada y la pena ha sido impuesta. Ello implica que no sólo se trata de causas diferentes, sino que el ejercicio de la competencia del juez penal limita los alcances de la competencia del juez de ejecución de penas. En primer lugar, porque el juez de ejecución de penas no puede valorar de manera diferente la conducta punible, ni puede tampoco salirse del quantum punitivo determinado por el juez penal”.

Luego, la exigencia de valoración de la conducta punible por parte del Juez de Ejecución de Penas resulta ser exequible siempre y cuando se haga con total apego a las circunstancias, elementos y consideraciones realizadas por el juez fallador de instancia en el fallo condenatorio sean éstas favorables o desfavorables para la concesión del subrogado, posición reiterada en la Sentencia T-640 de 2017, la cual valga decir, trae a colación el condenado en su escrito. En esta última providencia se consignó lo siguiente:

7.3. Así, los jueces competentes para decidir acerca de una solicitud de libertad condicional deben interpretar y aplicar el inciso 1º del artículo 30 de la Ley 1709 de 2014, tal como fue condicionado en la Sentencia C-757 de 2014, esto es, bajo el entendido de que **la valoración que realice de la conducta punible tenga en cuenta las circunstancias, elementos y consideraciones hechas por el juez penal en la sentencia condenatoria, sean estas favorables o desfavorables al otorgamiento de la libertad condicional.**

(...)

Lo relevante de este asunto es que la Corte reiteró la importancia constitucional que tienen la resocialización de las personas condenadas y la finalidad preventiva especial de la pena. Por ello, indicó que el

11001600000020190257100 (NI 1999)

6 (30)  
1671



**juez de ejecución de penas si bien puede tener en cuenta la conducta punible, la personalidad y antecedentes de todo orden para efectos de evaluar el proceso de readaptación social del condenado en procura de proteger a la sociedad de nuevas conductas delictivas, en todo caso, debe valorar la conducta punible teniendo en cuenta las circunstancias, elementos y consideraciones hechas por el juez penal en la sentencia condenatoria, sean estas favorables o desfavorables al otorgamiento de la libertad condicional de los condenados. (Negrilla del Juzgado).**

Es de anotar que los precedentes jurisprudenciales traídos a colación son vinculantes y en los mismos se ha señalado que el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad debe analizar el tópico de la conducta punible sin inmiscuirse en la competencia del juez penal de conocimiento y le está vedado realizar valoraciones distintas a las analizadas por el fallador.

De modo que, cuando el Juez Ejecutor debe abordar el aspecto relacionado con la valoración de la conducta, ha de invocar las mismas consideraciones que el juez de conocimiento determinó como indicativas de la gravedad; por ende, al respecto, el Juez de Instancia, al negar la concesión un mecanismo sustitutivo, advirtió lo siguiente:

*(...) por lo demás, las conductas desplegadas no pueden menos que catalogarse de graves, si se tiene en cuenta la ejecución de un comprendido de actividades ilícitas planteadas y coordinadas con la finalidad de comercializar pequeñas cantidades de sustancias alucinógenas, así como la de transportar grandes dosis en el barrio Kennedy de esta ciudad a través de maniobras, las cuales se prolongaron durante algunos meses con el único objetivo de obtener un provecho económico sin consideración al daño que podrían causar esas sustancias a los habitantes del territorio nacional, especialmente a los residentes de dicho barrio que habitualmente concurren dichos espacios públicos, así la protección a la comunidad de las víctimas, a las que se alude en el artículo 2º del Código de Procedimiento Penal como principio rector, prevalece e informa el contenido del ordenamiento jurídico procesal, es el que permite afirmar que la detención intramural se hace indispensable y necesaria en este caso, máxime que esta protección no debe entenderse solamente en el campo de la prevención especial sino la general desde el punto de la prevención general la sociedad, debe conocer la drasticidad con la que deben ser tratados ciertos comportamientos aspecto que lleva a fortalecer la confianza de los coasociados en un sistema jurídico cuyo objeto general es regular la vida del hombre en sociedad, para que exista sea mejor, además del mensaje de justicia que debe quedar en contra oposición a la estipulación de la impunidad por la que la benevolencia al adoptar decisiones en casos como la que aquí se está analizando.*

Así las cosas, este despacho comparte lo expuesto por el Juzgado Fallador pues gracias a la narración fáctica expuesta en la sentencia condenatoria, se puede concluir que estamos frente a conductas punibles altamente nocivas y reprochables, pues las mismas sumergen al conglomerado en un

(31)  
(63)



constante estado de zozobra, toda vez que siembran en la ciudadanía miedo y desconfianza, razón por la cual legislador ha consagrado penas considerablemente altas para combatir su proliferación.

Nótese que la condenada, conocida con el alias «Indira», consciente de las consecuencias nefastas para niños, jóvenes, adultos y ancianos y con el único propósito de lucrarse fácilmente, hizo parte de la organización criminal denominada «Las Patisucias» dedicada al tráfico de estupefacientes en pequeñas cantidades en la Localidad de Kennedy de esta ciudad capital, específicamente en los barrios *Las Delicias*, *Villa Nueva*, *Nueva York*, *San Lucas*, *Carvajal* e *Igualdad*, empleando diferentes lugares públicos para almacenar y vender los alucinógenos que comercializaban.

Aquí conviene precisar que el rol que desempeñaba la sentenciada en la organización criminal resultaba trascendental para el cumplimiento del fin ilegal, pues era quien comercializaba la sustancia estupefaciente que administraba su compañero de causa *Néstor José*, actuar que se encuentran debidamente documentado a través de las diferentes interceptaciones y registros fotográficos contenidos en los informes de vigilancia y seguimiento elaborados por policía judicial.

No puede perderse de vista que este tipo de acciones están revestidas de una alta lesividad y, por tanto, son dignas del máximo reproche, dado el impacto negativo que genera no solo en la salud del conglomerado sino en otros aspectos como el orden económico y social e incluso, si se quiere, la seguridad pública y la vida de los asociados, pues para nadie es un secreto que el tráfico de estupefacientes es un delito pluriofensivo y en muchas ocasiones se constituye en la puerta escénica para la comisión de otros ilícitos incluso de mayor nocividad.

De modo que sus conductas punibles permiten deducir fundadamente la personalidad desbordada de la sentenciada y la muestran como un ciudadana carente de respeto por el ordenamiento jurídico y de límites comportamentales, quien con tal de satisfacer sus intereses ilícitos, poco le importa afectar la salud de la población e incluso de la vida de los congéneres, de ahí que se torne improcedente su liberación anticipada, aun cuando sea condicional.

Y es que la capacidad logística que alcanzó en tampoco tiempo la organización delictiva que integraba, les permitió controlar la venta de estupefacientes en diferentes barrios de la Localidad de Kennedy, llegando incluso a corromper la fuerza pública al entregar diferentes sumas de dinero cuando alguno de sus miembros era capturado, circunstancias que inciden precisamente en que el conglomerado no vea con buenos ojos que este tipo de infractores sean agraciados con la libertad anticipada, lo cual a su vez alentaría a otras personas a incurrir en similares delitos, bajo el supuesto equivoco de que no tendrán que cumplir la totalidad de la pena, máxime cuando no se cuenta con elementos ciertos que den cuenta de un

109/1327



verdadero arrepentimiento y resocialización y que, a su vez, garanticen que no continuará realizando la misma actividad delictiva al salir de prisión.

En efecto, revisada la cartilla biográfica aportada por las autoridades penitenciarias, pese las *buenas y ejemplares* calificaciones en torno a su comportamiento intramuros, se observa que la fulminada no ha tenido un progreso significativo en su tratamiento penitenciario y esto es así por cuanto pese a sus más de tres (3) años de reclusión no ha logrado superar la primera fase del tratamiento penitenciario.

Dicho aspecto resulta de gran importancia para el estudio que hoy se adelanta, pues según la Resolución 7302 de 2005 del INPEC, en las fases subsiguientes del tratamiento, como la denomina «*mediana seguridad*», el interno accede a programas educativos y laborales, además de orientarse a fortalecer su ámbito personal con el fin de adquirir, afianzar y desarrollar hábitos y competencias socio laborales, incluso, en la fase «*mínima seguridad*» se establecen estrategias para afrontar la integración social positiva y la consolidación de su proyecto de vida en libertad, de ahí que al no contar con estos programas de rehabilitación muy difícilmente puede concluirse que no existe necesidad de continuar con su proceso de penitenciario dada la magnitud de los delitos cometidos.

De manera que en el presente asunto la valoración de la conducta punible tiene un resultado negativo por las razones descritas, por ello, el accionar de la penada en mención amerita severidad en la efectividad material del tratamiento penitenciario, en la medida que es la manera como lo teóricamente previsto en la Ley llega a tener existencia real.

Por lo expuesto, se negará la libertad condicional a **INDIRA MARÍA SOTO NAVARRO**, toda vez que la valoración de la forma como se ejecutó la conducta punible devela que carece de respeto hacia las normas y sus semejantes, por lo que prevalece el fin de protección al conglomerado, entre tanto surte efectos el tratamiento penitenciario.

En consecuencia, se considera indispensable que la prenombrada continúe privado de dicho derecho cumpliendo la sanción intramuralmente, en aras de lograr una verdadera resocialización, pues solo así podría garantizarse a la comunidad que no se verá desprotegida frente a la ocurrencia de actividades delictivas que pudiera desplegar la condenada.

En mérito de lo expuesto, el **JUZGADO OCTAVO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BOGOTÁ,**

**RESUELVE:**

**PRIMERO: REDIMIR** la pena a la sentenciada **INDIRA MARÍA SOTO NAVARRO** en proporción de **DIECISIETE (17) DÍAS**, por el estudio que realizó entre junio y julio de 2022.

11001600000020190257100 (NI 1999)

(33)  
(10)  
9



**SEGUNDO: NEGAR** el subrogado de la libertad condicional a **INDIRA MARÍA SOTO NAVARRO** de conformidad con lo anotado.

**TERCERO: ENVIAR** copia de esta determinación a la Penitenciaría «El Buen Pastor» para fines de consulta y que obre en la hoja de vida de la penada.

**CUARTO:** Contra esta providencia proceden los recursos de ley.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

**ARMANDO MADILLA ROMERO**  
**JUEZ**

Elr



Radicación : 11001600000020190257100 (NI 1000)  
Condenado : Ana Maryuri Benavides Garzón  
Identificación : 102.378.635  
Fallador : Juzgado 4º Penal del Circuito Especializado de Conocimiento de Bogotá  
Delitos : Concierto para delinquir agravado y tráfico de estupefacientes  
Decisión : Avoca conocimiento, niega libertad condicional  
Reclusión : Reclusión de Mujeres de Bogotá «El Buen Pastor»  
Normatividad : Ley 906 de 2004

AUTO NO. 461.01.23

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



JUZGADO OCTAVO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE  
SEGURIDAD DE BOGOTÁ

Bogotá, D. C., ocho (8) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

ASUNTO

Se pronuncia el despacho en torno a la solicitud de libertad condicional formulada por la condenada **ANA MARYURI BENAVIDES GARZÓN**, previo al estudio de redención de pena conforme la documentación remitida por la Reclusión de Mujeres «El Buen Pastor».

ANTECEDENTES

Este despacho ejecuta la pena de sesenta y cinco (65) meses de prisión amen del pago de la multa equivalente a mil ochocientos dos (1802) salarios mínimos mensuales legales vigentes que, por el delito de concierto para delinquir agravado y tráfico de estupefacientes, impuso a **ANA MARYURI BENAVIDES GARZÓN** el Juzgado 4º Penal del Circuito Especializado de Conocimiento de Bogotá en sentencia de 27 de abril de 2022.

Por cuenta de esta actuación, la prenombrada condenada viene privada de la libertad desde el 12 de junio de 2019 sin que a su favor se hubiere reconocido redención de pena alguna.

LA SOLICITUD

La dirección de la Penitenciaría Femenina «El Buen Pastor» a través de tres (3) diferentes oficios, hacen llegar los comprobantes de las actividades realizadas por **BENAVIDES GARZÓN** en desarrollo del régimen

(35)  
(55)



ocupacional, además de su cartilla biográfica debidamente actualizada, certificados de conducta y Resolución Favorable, para el estudio de redención de pena y libertad condicional.

Por su parte, la sentenciada remite un nuevo escrito en el que reitera el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 64 del Código Penal para acceder al beneficio liberatorio.

### CONSIDERACIONES

#### 1º De la redención punitiva.

La legislación que ha regulado el reconocimiento judicial de las actividades realizadas por los condenados para rebaja de pena por estudio, trabajo o enseñanza (Ley 32 de 1971, Decreto 2119 de 1977, Ley 600 de 2000 y Ley 65 de 1993), exige para tal efecto, que las labores en cuestión estén certificadas por el director del establecimiento donde se descuenta la sanción, y que el condenado haya observado buena conducta durante los periodos en los cuales realizó las tareas válidas para la reducción de la pena, circunstancia que debe acreditar con la resolución del Consejo de Disciplina o certificación del propio director del centro de reclusión.

Adicionalmente a partir de la vigencia de la Ley 65 de 1993 (agosto 19), las labores propias de redención no son válidas los días domingos y festivos salvo por excepción, debidamente justificada por el director del reclusorio (art. 100). Ahora bien, el Decreto 2119 de 1977 y la Ley 65 de 1993, señalan que las tareas propias para redimir la sanción, se limitarán a 8 horas diarias por trabajo, 6 por estudio y 4 por enseñanza.

Por otra parte el artículo 101 de la Ley 65 de 1993 prevé que para conceder o negar la redención el Juez deberá tener en cuenta la evaluación que se haga del trabajo, estudio o enseñanza por la junta correspondiente, de conformidad con las previsiones de los artículos 81 y 96 ibidem. La Resolución 3272 del 26 de mayo de 1995, vigente a partir del primero de julio de esa anualidad, emitida por el Inpec reglamentó lo concerniente a la evaluación de las labores adecuadas para redimir pena, indicando en sus artículos 27 a 29, quienes integran la junta de evaluación, los criterios para realizarla, su periodicidad y la forma de registro y control; acto administrativo que fuera subrogado por la Resolución 2376 del 17 de junio de 1997, emitida por la dirección del mismo instituto.

Hechas las precisiones anteriores, se ocupará el despacho del estudio de la documentación aportada para efectuar los reconocimientos a que hubiere lugar de la manera siguiente:

Certificado	Periodo	Horas	Días	Redime
-------------	---------	-------	------	--------



Octubre 2019	132 estudio	22	11 días
Noviembre 2019	78 estudio	13	6.5 días
Marzo 2020	18 estudio	3	1.5 días
Abril 2020	87 estudio	14.5	7.25 días
Mayo 2020	114 estudio	19	9.5 días
Junio 2020	94 estudio	16.6	7.83 días
Julio 2020	132 estudio	22	11 días
Agosto 2020	114 estudio	19	9.5 días
Septiembre 2020	114 estudio	19	9.5 días
Octubre 2020	126 estudio	21	10.5 días
Noviembre 2020	112 estudio	18.6	9.33 días
Diciembre 2020	126 estudio	21	10.5 días
Enero 2021	111 estudio	18.5	9.25 días
Febrero 2021	120 estudio	20	10 días
Marzo 2021	132 estudio	22	11 días
Abril 2021	120 estudio	20	10 días
Mayo 2021	120 estudio	20	10 días
Del 1º al 17 de junio de 2021 (120 estudio)	68 estudio	11.32	5.66 días
Julio 2021	120 estudio	0	0
Agosto 2021	126 estudio	0	0
Del 18 al 30 de Septiembre 2021 (132 estudio)	57.2 estudio	9.52	4.76 días
Octubre 2021	114 estudio	19	9.5 días



	Del 1° al 17 de Diciembre 2021 (78 estudio)	44.2 estudio	7.36	3.68 días
	Febrero 2022	96 estudio	0	0
	Del 18 al 31 de Marzo 2022 (132 estudio)	59.6 estudio	9.92	4.96 días
	Abril 2022	105 estudio	17.5	8.75 días
	Mayo 2022	96 estudio	16	8 días
	Junio 2022	120 estudio	20	10 días
18748876	Octubre de 2022	96 estudio	16	8 días

De entrada el Juzgado debe advertir que no reconocerá a la condenada **ANA MARYURI BENAVIDES GARZÓN** redención de pena respecto a las actividades que realizó entre los lapsos comprendidos entre **(i)** el 18 de junio al 17 de septiembre de 2021 y el **(ii)** 18 de diciembre de 2021 al 17 de marzo de 2022, pues para dichos periodos su conducta se calificó en el grado «Mala» según actas 801-0067 y 801-0021; en consecuencia, del certificado 024831, para los meses de junio de 2021 solo se reconocen 68 de las 120 horas de estudio registradas, de diciembre 2021 se hará lo propio con 44.2 de las 78 horas reportadas y, finalmente, de marzo de 2022 solo 59.6 de las 132 horas informadas, dejando de lado, claro está, las horas de estudio de los meses de julio, agosto de 2021 y febrero de 2022.

En ese orden, como las calificaciones de las demás actividades educativas relacionadas fue sobresaliente y que el comportamiento de la prenombrada fue «bueno» y «ejemplar», resulta viable reconocer una redención de pena en proporción de doscientos treinta y tres punto ochenta y ocho (233.88) días, es decir, **SIETE (7) MESES Y VEINTITRÉS PUNTO OCHENTA (23.88) DÍAS**, como en efecto se dispondrá en la parte resolutive de este proveído.

### 3° De la libertad condicional.

Se trata de un mecanismo sustitutivo de la pena de prisión, que se instituyó como instrumento de resocialización y de reinserción social del individuo, cuyo objeto está encaminado a brindar al condenado la oportunidad de que, en su caso y bajo ciertas condiciones en consideración al tiempo de pena cumplido y a la conducta presentada en dicho lapso, se pueda dejar de ejecutar la condena.



El artículo 471 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), impone al interesado en el subrogado la obligación de adjuntar con la solicitud la resolución favorable expedida por el Consejo de Disciplina o, en su defecto, por el director del establecimiento penitenciario, copia de la cartilla biográfica debidamente actualizada y de los demás documentos que acrediten las exigencias previstas en el Código Penal, requisitos estos que se erigen como presupuesto de procesabilidad para posibilitar el estudio del subrogado

A su turno el artículo 30 de la Ley 1709 de 2014, que modificó el artículo 64 del Código Penal, establece los requisitos sustanciales básicos para la concesión del mencionado subrogado, esto es, que el sentenciado haya descontado mínimo las tres quintas (3/5) partes de la pena que se le impuso y reparado a la víctima (lo que se ha denominado «factor objetivo») y que de la buena conducta durante el cautiverio, así como de la valoración de la conducta punible objeto de reproche, el Juez pueda colegir que no existe necesidad de proseguir el tratamiento penitenciario («factor subjetivo») y, finalmente, que se acredite el arraigo familiar y social del penado.

Descendiendo al asunto objeto de análisis, tenemos que se acreditó el cumplimiento del primer presupuesto en mención (procesabilidad) por cuanto la dirección de la Reclusión de Mujeres de Bogotá «El Buen Pastor» allegó los soportes documentales que exige el mencionado artículo 471 del Código de Procedimiento Penal a saber, cartilla biográfica actualizada, certificados de conducta y la resolución favorable 2107 de 14 de diciembre de 2022; en consecuencia procederá el Despacho a estudiar las exigencias objetivas y subjetivas consagradas en el artículo 64 del Código Penal, modificado por el artículo 30 de la Ley 1709 de 2014.

Tal cual se indicó en precedencia, **ANA MARYURI BENAVIDES GARZÓN** descuenta una condena de sesenta y cinco (65) meses de prisión, por lo que las tres quintas partes de esa sanción equivalen a treinta y nueve (39) meses.

Como la encartada viene privado de la libertad desde el 12 de junio de 2019, ha descontado físicamente cuarenta y seis (46) meses y veintisiete (27) días discriminados así:

2019	- - - - -	06 meses y 19 días
2020	- - - - -	12 meses y 00 días
2021	- - - - -	12 meses y 00 días
2022	- - - - -	12 meses y 00 días
2023	- - - - -	04 meses y 08 días



un descuento total de pena de **CINCUENTA Y CUATRO (54) MESES Y VEINTE PUNTO OCHENTA Y OCHO (20.88) DÍAS**, satisfaciéndose la exigencia cuantitativa mínima prevista por el legislador en el artículo 64 del Código Penal.

Ahora bien, como el solo cumplimiento del factor objetivo indicado en precedencia no deriva automáticamente en el otorgamiento del subrogado que se estudia, procede el Despacho a examinar si en el presente caso confluyen positivamente los demás factores tales como el comportamiento del condenado a lo largo del cautiverio, la verificación del arraigo familiar, la reparación a la víctima y finalmente la valoración de la conducta punible.

En punto de la comprobación del arraigo familiar y/o social, en esta oportunidad la condenada afirmó residir en la *«Manzana 19, Casa 01, Barrio Kennedy, Girardot»* junto con su cuñada *Madeley Katherine Bernate Ángel*, para lo cual aportó diversa documentación; por ende, se dispone dar plena credibilidad a la información suministrada por virtud del principio de buena fe consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política.

Con relación a la indemnización de los daños, la conducta punible por la cual se profirió condena no genera ese tipo de responsabilidad en cabeza de la sancionada.

Ahora, en punto del desempeño del penado durante el tiempo de reclusión, considera el Juzgado que el sistema progresivo ofrecido a **BENAVIDES GARZÓN** no ha surtido en ella el efecto resocializador esperado pues, de conformidad con la cartilla biográfica y el historial de calificaciones de conducta arrimado, se establece que para los lapsos comprendidos entre el 18 de junio al 17 de septiembre de 2021 y del 18 de diciembre de 2021 al 17 de marzo de 2022, su conducta fue valorada como *«mala»* según actas número 801-0057 y 801-0021.

Estas circunstancias son indicativas de que la condenada no ha amoldado su conducta al rigor y disciplina del tratamiento penitenciario al que está siendo sometido para hacer de ella una ciudadana productiva y que pueda reincorporarse a la comunidad como tal, sino que lo ha desdeñado y prueba de ello son las bajas calificaciones de que fue objeto en pretéritas oportunidades; en consecuencia, para el despacho no se encuentra satisfecha la exigencia consagrada en el numeral 2° del artículo 64 del Estatuto Represor.

Así las cosas, el Juzgado no concederá el subrogado de la libertad condicional a la prenombrada condenada.



En mérito de lo expuesto, el **JUZGADO OCTAVO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BOGOTÁ,**

**RESUELVE:**

**PRIMERO: NO RECONOCER** redención de pena en favor de la condenada **ANA MARYURI BENAVIDES GARZÓN** frente a las actividades educativas que realizó entre 18 de junio al 17 de septiembre de 2021 y del 18 de diciembre de 2021 al 17 de marzo de 2022, por su «Mala» conducta.

**SEGUNDO: REDIMIR** la pena a la sentenciada **ANA MARYURI BENAVIDES GARZÓN** en proporción de **SIETE (7) MESES Y VEINTITRÉS PUNTO OCHENTA (23.88) DÍAS**, por el estudio relacionado en la parte motiva de esta providencia.

**TERCERO: NEGAR** el subrogado de la libertad condicional a **ANA MARYURI BENAVIDES GARZÓN** de conformidad con lo anotado.

**CUARTO: ENVIAR** copia de esta determinación a la Penitenciaría «El Buen Pastor» para fines de consulta y que obre en la hoja de vida de la penada.

**QUINTO:** Contra esta providencia proceden los recursos de ley.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ARMANDO PADILLA ROMERO  
JUEZ





SECRETARÍA DE  
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

Al contestar cite Radicado No. 20223320592212  
Fecha: 2022/07/07 03:14:03 PM  
Anexos: COMPUTOS Folios: 1  
Destinatario: INDIRA SOTO NAVARRO  
Radicador: DIXIE GOMEZ BEJARANO  
Asociado: 20223360378641



Bogotá, D.C. 07 de julio de 2022

Señor:  
JUZGADO 08 DE EJECUCIÓN DE PENAS.  
Calle 11 N°9ª-24, P 8, Edf: Kaysser.  
Bogotá.

Asunto: Derecho de Petición.  
Condenado: INDIRA MARIA SOTO NAVARRO.  
Proceso: 11001600000020190257100.  
Radicado Interno: 20223360378641.  
Delito: Concierto para delinquir Agravado.  
Tráfico fabricación o porte de estupefacientes Agravado

Por medio del presente me permito brindarle oportuna respuesta al Oficio allegado a esta Dependencia, oficio mismo en el cual se solicita documentación concerniente al Señor INDIRA MARIA SOTO NAVARRO, para los fines pertinentes.

- Cartilla Biográfica.
- Certificado de Cómputos N° 024803.
- Certificado de Conducta N° 571.

Se informa que los documentos de redención de pena no han sido objeto de redención por despacho alguno a la fecha.

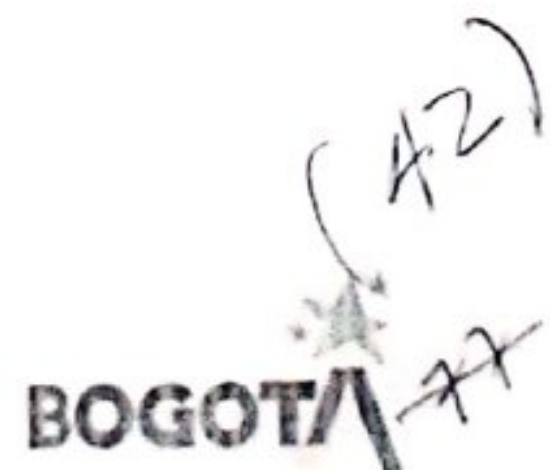
Cordialmente,

CT (rp) ADRIANA PATRICIA HERNÁNDEZ MARÍN  
Directora Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres  
Secretaria Distrital De Seguridad, Convivencia Y Justicia

Cc: Con copia al Privado de la Libertad/Certificado Cómputos 1 folio

Proyectó: Dixie Gómez/Abogada Contratista/Cómputos.  
Revisó: Sonia Ruiz - Profesional Especializado - Jurídica

Av. Calle 26 # 57- 83  
Torre 7 Tel: 3779595  
Código Postal: 111321  
www.scj.gov.co











ALCALDIA MAYOR  
BARRIO DE  
SANTO DOMINGO  
GOBIERNO

PROYECTO

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC -  
CARCEL DISTRITAL DE VARONES Y ANEXO DE MUJERES  
CERTIFICADO DE COMPUTOS POR TRABAJO Y/O ESTUDIO

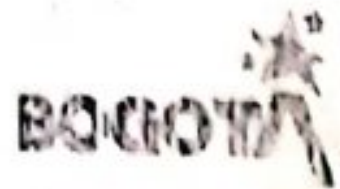
07/07/2022 02:07 PM  
Page 3 of 3

*[Signature]*  
DIXIE GOMEZ BEJARANO

*[Signature]*  
APPROBADO:

(43)





SECRETARÍA  
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

Al contestar cte Radicado No. 20223320548712  
Fecha: 2022/06/21 11:49:57 AM  
Anexos: SIN ANEXOS Folios: 1  
Destinatario: INDIRA SOTO NAVARRO  
Radicador: SONIA RUIZ ORTEGA  
Asociado: 20223380347601



VII. CALIFICACIONES DE CONDUCTA

No. Acta	Fecha	Evaluación desde	Evaluación hasta	Calificación	Observaciones
801-0048	22/06/2022	15/03/2022	17/05/2022	Buena	
801-0021	23/03/2022	13/12/2021	17/03/2022	Buena	
801-0097	21/12/2021	18/08/2021	17/12/2021	Mala	X 3 Meses
801-0037	21/01/2021	18/06/2021	17/09/2021	Ejemplar	
801-0037	22/06/2021	15/03/2021	17/06/2021	Ejemplar	
801-0018	24/03/2021	13/12/2020	17/03/2021	Ejemplar	
801-0051	22/12/2020	15/09/2020	17/12/2020	Ejemplar	
801-0012	22/09/2020	15/06/2020	17/09/2020	Ejemplar	
801-0020	24/03/2020	15/03/2020	17/06/2020	Ejemplar	
801-0009	02/01/2020	13/12/2019	17/03/2020	Buena	
801-0016	20/12/2019	13/09/2019	17/12/2019	Buena	
801-0033	24/09/2019	19/03/2019	17/09/2019	Buena	

Lo anterior para su conocimiento.

Cordialmente,

CT. (rp) ADRIANA PATRICIA HERNÁNDEZ MARÍN

Directora Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

Anexos: SIN ANEXOS Folios: 1

Proyecto: "Sonia Ruiz Ortega Profesional Especializado Área Jurídica"

Archivado a: Criterio y nombre de la serie y/o archivo documental

Av. Calle 23 # 57- 83  
Torre 7 Tel: 3779595  
Código Postal: 111321  
www.sq.gov.co

CCOR CENTRO DE CALIFICACIONES DE CONDUCTA  
CERTIFICADA  
Código de Verificación: 502-111321

CCOR CENTRO DE CALIFICACIONES DE CONDUCTA  
CERTIFICADA  
Código de Verificación: 502-111321

BOGOTÁ





SECRETARÍA DE  
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

Al contestar cite Radicado No. 20223320648652  
Fecha: 2022/08/11 03:05:11 PM  
Anexos: RESPUESTA Y ANEXOS Folios:1  
Destinatario: JUZGADO 8 DE EJECUCION DE PENAS  
Radicador: DIXIE GOMEZ BEJARANO  
Asociado: 20223360439231



Bogotá, D.C. 11 de agosto de 2022

Oficio 1540-22-2022

Señor:

**JUZGADO 08 EJECUCION DE PENAS DE BOGOTÁ D.C.**  
CALLE 11 NO. 9 A 24 EDIFICIO KAYSER  
BOGOTÁ D.C. (CUNDINAMARCA - REPUBLICA DE COLOMBIA)  
[ventanillacsjepmsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:ventanillacsjepmsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co)

Asunto: DOCUMENTOS PARA REDENCIÓN DE PENA

Condenado: **SOTO NAVARRO INDIRA MARIA**

Proceso: 11001600000020190257100


Delitos: 1. Concierto para delinquir Agravado 2. Trafico fabricacion o porte de estupefacientes Agravado  
RI: 20223360439231

Cordial saludo,

En atención a la petición dirigida a este Establecimiento Carcelario, por la persona privada de la libertad **SOTO NAVARRO INDIRA MARIA** a través de la cual se solicita los certificados de actividad TEE, remito para los trámites pertinentes ante la autoridad correspondiente en esa ciudad, los siguientes documentos:

Dos (2) copias de la Cartilla biográfica del privado de la libertad  
Certificado de cómputos TEE N° 24891  
Certificado de conducta N° 658

Cordialmente,

  
**CT (rp) ADRIANA PATRICIA HERNANDEZ MARIN**  
DIRECTORA CARCEL DISTRITAL DE VARONES Y ANEXO DE MUJERES  
SECRETARIA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA

Anexo: Lo enunciado

C.C.: Privado de la libertad - Certificado de cómputos (1 Folio)  
Patio Esperanza

Proyectó: Mana Paula Mendieta- Judicante  
Revisó: Dixie Gomez/ abogada contratista/ área de cómputos  
Revisó: Sonia Ruiz Ortega- Asesora de Dirección





INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC -  
CARCEL DISTRITAL DE VARONES Y ANEXO DE MUJERES  
CERTIFICADO DE COMPUTOS POR TRABAJO Y/O ESTUDIO

11/08/2022 02:08 PM  
Page 1 of 1

Nº 024891

La Dirección del establecimiento en cumplimiento de los artículos 81 y 96 de la Ley 65 de 1993, Código Penitenciario y Carcelario, y bajo la gravedad de juramento

CERTIFICA

Que revisadas las planillas de registro y control de trabajo y/o estudio, entre 01/06/2022 y 29/07/2022 el interno SOTO NAVARRO INDIRA MARIA con T.D. número 801026087 e identificado con cédula de ciudadanía número 22520764 de BARRANQUILLA-ATLANTICO, figura con el siguiente cómputo de estudio y/o trabajo que a continuación se relaciona:

	TRABAJO	ESTUDIO	ENSEÑANZA
Año/Mes	Horas Actividad	Horas Actividad	Horas Actividad
2022/06		120 CURSO ACOND. FISICO Y RECR. (INTRPABELLÓN)	
2022/07		84 CURSO ACOND. FISICO Y RECR. (INTRPABELLÓN)	
		204	

EVALUACIÓN DE TRABAJO, ESTUDIO Y ENSEÑANZA

Analizando los criterios de calidad, intensidad y superación de la ocupación del interno en mención, la Junta de Evaluación de Trabajo, Estudio y Enseñanza, lo evaluó de la manera que se relaciona a continuación:

Acta	Fecha	Orden	Descripción de la labor	Fecha inicial	Fecha final	Calificación
06	11/07/2022	8020031992	PROGRAMAS LITERARIOS; DEPORTIVOS Y ARTÍSTICOS	01/06/2022	30/06/2022	Sobresaliente
07	08/08/2022	8020031992	PROGRAMAS LITERARIOS; DEPORTIVOS Y ARTÍSTICOS	01/07/2022	31/07/2022	Sobresaliente

En constancia de lo anterior se firma en BOGOTÁ D.C. a los Once (11) días del mes de Agosto de Dos mil Veintidos (2022)

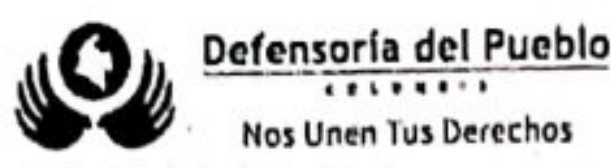
ST. (RA) ADRIANA PATRICIA HERNANDEZ MARIN  
DIRECTORA

PROYECTÓ Y REVISÓ: DIXIE GOMEZ BEJARANO

APROBÓ:



ibido-  
umentación  
107/2023 - por  
correo



DEFENSORIA DEL PUEBLO  
Radicado: 20230060052593481  
Fecha radicado: 2023-06-26

Bogotá D.C. junio 26 de 2023

Señor(a)  
NESTOR DE JESUS MARTES SOTO  
[nestorc165@gmail.com](mailto:nestorc165@gmail.com)

Señora  
INDIRA MARIA SOTO NAVARRO C.C. 22520764 ✓  
RAD.: 11001600000020190257100 TD 79392 NUI 1150370  
PATIO 3 TRAMO 3 CELDA 11 CPAMSM-BOG -CÁRCEL Y PENITENCIARÍA CON ALTA,  
MEDIA Y MÍNIMA SEGURIDAD PARA MUJERES EL BUEN PASTOR Carrera 58 #  
80-95 BOGOTA

Referencia: ... "PIDO QUE EL JUEZ 45 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTA  
ANALICE, PRUEBAS QUE ALLEGA Y PRESENTE DESACATO ANTE EL JUEZ 8 DE  
EPMS POR VIA DE HECHO, Y PERSECUSION PERSONAL ...NO RESPETANDO  
DESICIONES JUDICIALES DE HABEAS CORPUS Y TUTELA,..."

CONDENADO INDIRA MARIA SOTO NAVARRO C.C. 22520764  
RAD.: 11001600000020190257100  
TD 79392 NUI 1150370  
PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD: 5 AÑOS 6 MESES 0 DIAS  
PRIVADO DE LA LIBERTAD DESDE: 12/6/2019  
DELITO: **Concierto para delinquir - Tráfico de Estupefacientes**  
CENTRO DE RECLUSION: PATIO 3 TRAMO 3 CELDA 11 CPAMSM-BOG -CÁRCEL Y  
PENITENCIARÍA CON ALTA, MEDIA Y MÍNIMA SEGURIDAD PARA MUJERES EL  
BUEN PASTOR Carrera 58 # 80-95 BOGOTA  
JUZGADO 8 EPMS

DEFE Nombre	EDWIN GARCIA SANCHEZ	Tarjeta	165671
NSO		Profesional	
R	Dirección	GESTIONDESARROLLOPENAL@HOTMAIL.COM	

Respetado (a) Señor (a):

En atención a la comunicación mediante la cual solicita la designación de Defensor Público para la representación judicial de la referencia, me permito informarle nuevamente, que tiene asignada(o) al (a) doctor(a) AZZA PINEDA LILIANA PATRICIA, para gestionar lo referente a la petición, quien puede ser contactado (a) en el número telefónico 321 488 2607 o en el correo electrónico [lazza@defensoria.edu.co](mailto:lazza@defensoria.edu.co)

El (a) citado (a) profesional actuará, siempre y cuando el proceso respecto del cual solicita la defensa pública no pertenezca a otro Defensor Público, y no se le haya otorgado poder a un defensor de confianza, lo anterior en virtud del derecho de postulación.

En el caso de que el proceso de la referencia cuente con defensor de confianza, se deberá allegar con carácter urgente renuncia presentada ante la autoridad judicial, y paz y salvo del mismo, para que el Defensor Público asignado, pueda asumir la representación.

Cordialmente,

RICARDO EMILIO ROSERO GONZALEZ  
PROFESIONAL ADMINISTRATIVO Y G/R BOGOTA

(247)

Fecha: Junio 26 2023, a las 2:08:28 pm  
Codigo de Seguridad: 140865697480879e6442805e369ad303  
Para verificar se debe abrir con Adobe Acrobat PDF







**Defensoría del Pueblo**  
Nos Unen Tus Derechos

Copia: [laza@defensoria.edu.co](mailto:laza@defensoria.edu.co)  
Anexo: PDF

Tratados y propuestas por MARTHA CECILIA SEGURA HERN - Fecha 28/06/2022  
Revisado para firma por: MARIO PAO  
Diciembre Tratados, propuestas y recomendaciones de defensoría que se documenta la documentación de la defensoría para la firma.

Señor ciudadano, para la Defensoría del Pueblo es  
muy importante conocer su percepción frente a los  
servicios prestados.  
Evaluar los servicios que presta la Defensoría del  
Pueblo es muy fácil, accediendo a nuestra "Encuesta  
de Satisfacción al Usuario" escaneando el siguiente  
código QR.



Calle 55 # 10-32 - Sede Nacional - Bogotá, D.C.  
PBX: (57) (601) 3144000 - Línea Nacional: 018000 914814  
[www.defensoria.gov.co](http://www.defensoria.gov.co)  
Plantilla vigente desde: 04/05/2022



De: Nestor De Jesus Santos Soto <nestsoto155@gmail.com>

Enviado: jueves, 1 de junio de 2023 8:59 p. m.

Para: [admin450ra@notificaciones.gov.co](mailto:admin450ra@notificaciones.gov.co) <[admin450ra@notificaciones.gov.co](mailto:admin450ra@notificaciones.gov.co)>; [Procesos Judiciales](mailto:ProcesosJudiciales@procuraduria.gov.co) <[Procesos Judiciales](mailto:ProcesosJudiciales@procuraduria.gov.co)>; [juridica](mailto:juridica@defensoria.gov.co) <[juridica@defensoria.gov.co](mailto:juridica@defensoria.gov.co)>; [humanjudicial@personerabogota.gov.co](mailto:humanjudicial@personerabogota.gov.co) <[humanjudicial@personerabogota.gov.co](mailto:humanjudicial@personerabogota.gov.co)>; [institucional@personerabogota.gov.co](mailto:institucional@personerabogota.gov.co) <[institucional@personerabogota.gov.co](mailto:institucional@personerabogota.gov.co)>

Asunto: ok.pdf

Buenas noches.

cordial saludo. Por medio del presente correo, adjunto y envío los documentos correspondientes para la radicación del desahucio por parte de la señora Lidia María Soto Navarro, identificada con cédula de ciudadanía 22.531.764, quien se encuentra privada de la libertad en la cárcel del buen pastor.

Agradezco mucho su atención, quedo atento a sus comentarios.

(49)



Bogotá D.C. Junio 04/2023

Señores

- 1 -

Juzgado Cuarto (8°) de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá D.C. y/o Juzgado Cuarenta y Cinco (45) Administrativo del Circuito de Bogotá E.S.D. Solicitud - Libertad Condicional y otros

Referencia: Presento Despacho ante el Juzgado (45) Administrativo del Circuito de Bogotá, por Vía de HECHO, contra el Hez (8°) de E. P. y M. S., en Tiempo administrativo, que gratifica la Condena de (66) meses de Prisión, dentro del Sistema Ordinario, del proceso penal y que no tiene en cuenta, las decisiones judiciales, de tutelas desde me Conceden el derecho de Habeas Corpus, donde también me Conceden por Impugnación el HABEAS CORPUS.

Por tanto pido tener en cuenta las impugnaciones, cuando el Despacho CONCEDE la impugnación presentada por la parte acusante, y ordena remitir el expediente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, previa las anota

(1) (50)



ciones de rigor, como quiera que la providencia de 25 de mayo de 2023 que hizo la unificación de las acciones de habeas corpus que notificadas ese mismo día y el escrito de impugnación recibido en la misma fecha, por tal razón, se encontraba dentro del término de tres (3) días hábiles dispuesto por el artículo 7º de la Ley 1095 de 2006, anexo copia, Proceso No. 11001-33-41-045-2023-00267-00. Ahora el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección "F" M.P. Dra. Beatriz Helena Escobar Rojas, el 29 de mayo de 2023 Acción: Habeas Corpus, Radicado No. 11001-33-41-045-2023-00257-01. Accionados: Juzgado Octavo (8º) de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, Vinculados: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC. Se procede a resolver la impugnación presentada por la accionante contra la providencia dictada el 25 de mayo de 2023 por el Juzgado Cuarenta y Cinco (45) Administrativo del Circuito de Bogotá, mediante el cual NEGÓ el Habeas Corpus interpuesto por la señora INDIRA MARRIA SOTO NAVARRO, y que se porjo a continuación y que en el RESOLVIO:



CONFIRMAR la providencia dictada el 25 de Mayo de 2023, nuevamente Solicito mi Libertad Condicional, por haber cumplido el diez (10) meses de tiempo intranscurrido, se deben descontar (08) meses y (15) días, de la condena que le fue impuesta, y solo queda pendiente (6) meses, meses de la pena. Por consiguiente, tendré derecho a un cambio de ETAPA DE ALTA A MEDIA y el derecho de mi LIBERTAD CONDICIONAL, por transgresión a mis derechos fundamentales, violados por OMISIÓN, por la entidad demandada. Segundo (8º) de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.

1) Por tanto y se pide, Pido y solicito, tener en cuenta que cuando se CONCEDE a consecuencia de HABEAS CORPUS, pero cuando es por VIA DE HECHO, como esta pasando en estos momentos. Son inconsistentes, las medidas que tengan por finalidad impedir la libertad del condenado, tener en cuenta que los artículos (31) y (32) del decreto (2591) de (1991) la impugnación, solo prevén su procedencia respecto a la Sentencia

(4)



de primera instancia.  
En ley y bajo la Constitución de Colombia,  
la única SANCION que puede llegar a ser  
revisada por la segunda instancia es aquella  
en la que se imponga una SANCION,  
por incumplimiento de lo ordenado por el  
Jefe Constitucional, por tanto, tienen que  
CONFIRMAR las ordenes impartidas en  
1ª INSTANCIA.

Por tanto, tener en cuenta las Impugnaciones  
CONCEDIDAS. Cuando se CONCEDE  
el amparo en un FALLO DE TUTELA, no  
puede quejarse en el plano teórico o con-  
ceptual, pues este tiene que materializarse,  
por lo que el destinatario de las ordenes  
impartidas en esta clase de sentencias las  
debe cumplir con prontitud, desde el mo-  
mento en que se ha efectuado la noti-  
ficación.

Los jueces constitucionales por su parte tie-  
nen la responsabilidad de hacer cumplir  
las ordenes impartidas en los FALLOS  
DE HABEAS CORPUS Y DE TUTELA,  
cuando CONCEDEN.

(53) ~~1~~



2) Según los antecedentes, el Centro de Rehabilitación Corpus, en nombre propio, lo presenta, contra el Juzgado (8º) de E. P. M. S. a fin de que se suelte de fondo sobre el beneficio de libertad condicional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo (64) de la Ley 1709 de 2014, toda vez que se encuentran cumplidas "las 3/5 partes de la pena impuesta, la rehabilitación de la pena, del ambiente familiar y social (...) la subjetiva (...) la información de la conducta punible, y el análisis de la buena conducta en el centro penitenciario.

1.2 Sobre los hechos:

Fue capturada el 6 de junio de 2019 y se encuentra detenida en el Centro de Reclusión de Mujeres el Buen Pastor, cumpliendo su condena desde el 18 de junio de 2019. La acusante se encuentra a ordenes del Juzgado Oral (8º) de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad en el proceso con radicación No. 11001-600-00-00-2019-02571-00

1.3 Promunciamiento de la Autoridad Accionada y de la vinculada,

Juzgado (8º) de E. P. M. S. de Bogotá

154



Mediante escrito del 25 de mayo de 2023  
expendo que le correspondió ejecutar la pe-  
na impuesta a la accionante por el Juzga-  
do (4º) Penal del Circuito Especializado de  
Conocimiento de Bogotá en la sentencia dic-  
tada el 27 de abril de 2022, de 66 meses  
de prisión, por los delitos de concierto para  
delinquir agravado y tráfico de estupefa-  
cientes.

Respecto, el juez (8º) de la P y M.S. persiste  
en que la suscrita ha estado privada de  
la libertad desde el (12 de junio de 2019)  
cuando realmente, la fecha correcta, y como  
manifiesta la Condena, por afluencia  
es el (6 de junio de 2019)

El Juzgado sostiene que el periodo en  
que la accionante ha estado privada de  
la libertad no corresponde al total de la  
condena que le fue impuesta, en razón a  
que de los "sesenta y seis (66) meses determina-  
dos por el Juzgado (4º) Penal del Circuito Especia-  
lizado de Conocimiento de Bogotá, ha purgado cua-  
renta y ocho (48) meses y quince (15) días." Por  
ende le hace falta tiempo intermedio "por

(b) (55)



dieciocho (18) meses y quince (15) días."

EL INSTITUTO PENITENCIARIO Y CAR-  
CELARIO LIMPO

Expuso que la señora INDIKA MARIA SOTO NAVARRO, se encuentra privada de la libertad desde el 6 de junio de 2019)

Se tuvo que:

Nos permitimos informar que tras enterarse hecha a la P.H. Sra Indika Maria Soto Navarro (...) se confirmó que la acción de habeas corpus se instaura contra el Juzgado de Ejecución de penas y medidas de seguridad de Toluca que no ha reconocido la detención ordenada por el establecimiento penitenciario. LA DISTITAL sin embargo en lo concerniente al establecimiento carcelario y penitenciario de alta y mediana seguridad.

EL BUEN PASTOR es menester informar que a la fecha (12 de mayo de 2023) tiene reconocimiento en materia de un mes (1) mes (2) días y estaba de haberse emitido por parte de la oficina jurídica al Juzgado de Ejecución de penas y medidas de seguridad documentación para la detención de penas.

Así mismo aparte la cédula biográfica co

(56)

X



-8-

ma presentant a la causa i no ha rebut  
este informe.

Presidència impugnada

Trinitat a parat el 5 de maig de 2006 per la  
la decisió de la reforma que es portava  
per a la unificació de la jurisprudència  
el 25 de maig a les 15 hores i que es  
va acabar al departament el 26 de maig a  
les 9:34 p.m.

Habent-hi estat interpretada la impugnació  
de manera oportuna, i no habent-hi necesi-  
dad d'altres proves alhora, procedeix donar  
de fons el present cas.

CONSIDERACIONS

La suscita magistratura és competent, en el  
art. 30 de la L 1045 de 2006, per a conèixer la  
presente acció.

PROBLEMA JURÍDIC

A la suscita, se li està prolongant ille-  
galment la privació de la llibertat  
per en tant, segons manifesta, té dret  
a la llibertat condicional, al haver cum-  
plert les 3/5 parts de la pena que li fou  
imposada.

(174)



En los procedimientos judiciales y Jurisprudencia  
Arts. 3, 8, 9 y 10°

Art. 3, 8, 9 y 10°, la Declaración de los derechos humanos (art. 3, 8, 9 y 10°) El Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos (art. 1°, 3° y 4°) la Convención Americana de los derechos humanos (art. 7°, 8° y 25), y en el conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión.

Sentencia T-260 de 1999 y otros.

Por lo anterior, para denegar la acción de habeas Corpus no es suficiente argumentar que la persona se encuentra privada de la libertad por cuenta de una actuación procesal o que dentro del trámite existen recursos para elevar la situación titulada de lesión al derecho a la libertad personal, pues en tal evento resulta necesario examinar el caso concreto a fin de orden a establecer si se presenta una VIA DE HECHO como se está presentando, con el fin de 8°) de F.P. y M.S. y se sistematiza una personación personal en mi contra al no querer reconocer los (10) meses de descuentos de la Dis

(58) 10



total "no respetando la decisión de tutela y Habeas Corpus".  
siga" como brutalmente. puede ocurrir cuando, cumpliéndose las circunstancias fácticas y legales que hacen procedente la libertad, esta se niega sin fundamento legal o razonable.

### EL CASO CONCRETO

Alo he visto lo que manifiesta dicho juzgado a través de auto 24 de noviembre de 2022, dice "por cuanto por a su más de tres (3) años de reclusión no ha logrado superar la primera fase de tratamiento penitenciario" Por ende, obtuvo un resultado negativo en la valoración de la conducta penible.

Posteriormente el 8 de mayo de 2023 el Juzgado (8º) de F. P. y M. S. negó el reconocimiento de prórroga de pena frente a las actividades educativas desarrolladas por la accionante del 18 de junio al 17 de septiembre de 2021 y desde el 18 de noviembre de 2021, hasta el 17 de marzo de 2022 por "MALA CONDUCTA".

(54)



-11-

Indicativamente reduciendo la pena de la  
 contingencia en proporción de 7 meses y  
 23 días por estudio y negar el subrogo de  
 libertad condicional en razón de que  
 habiendo valorado con MALA CONDUCTA  
 Respuesta: Según sea Constitucional,  
 este debate por persecución personal,  
 según auténtica VIA DE HECHO, si el  
 juez puede actuar en cuanto a esta per-  
 secución ya que esta penchente todavía  
 que el juez no reconozca los (10) meses  
 de la Distrital y otros beneficios, nega-  
 dos solamente por omisión, reportándose  
 de la Ley y de la norma, y desconociendo,  
 todos los principios Constitucionales,  
 como la violación a los derechos huma-  
 nos Internacionales. Arts (93) C. Pol.  
 la Acción constitucional que NEGADA  
 e IMPUGNADA, y CONFIRMADA, como  
 debe ser en Ley, cuando se NEGADA, y  
CONCEDE en 1ª INSTANCIA.  
 Con fundamento en los pronun-  
 cios de la Corte Suprema de Jus-  
 ticia-Sala de Casación Penal y el

(60) 111



El Consejo de Estado mencionados en el acápite de fundamentos normativos y jurisprudenciales de esta providencia, pues la misma ha sido concebida como un medio de protección del debido proceso ante una actuación arbitraria, ya sea por captura ilegal o por otros prolongación ilegata de la libertad, o cuando existiere una decisión judicial, esta constituya una verdadera vía de hecho, este es el caso que estamos presentando contra el juez (8°) de F.P. y M.S. Fe' de toda esta persecución, apor to las pruebas, cuando realmente, tenía mala conducta, y que esta acción se presentó en la Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia evaluación 18-08/2021-17-12-2021-18-08-2021-17-09-2021 Ejemplar - MATA 3 meses

Presento Fallo Sancionatorio, fecha de los HECHOS (22) de abril de 2020 Fallo N° 183 - Fecha 08 julio 2021

(12) (61)



Aporto Notificación del Recurso de  
Reposición, 10 de Agosto 2021,  
Aporto, Juzgado 08 de F.P. y M.S.,  
11 de agosto de 2022, Directora Cor.  
del Distrital de Varones y Anexos de  
Mujeres - 204 horas Trabajo-estudio  
y enseñanza,  
Aporto Auto 464 Nueva Condicional,  
(7) de Septiembre (2022)  
Auto (9) de mayo (2023) Negar prisión  
dominiliana (386)  
Aporto, Auto (9) de mayo 2023) Mayor  
la libertad Condicionales

### Peticiones

Por tanto Pido, que el Juez 45)  
Administrativo del Circuito de Bogotá-  
enlace, estas pruebas, y presente De  
sacato, ante el Juez (86) de F.P. y M.S.  
por VIA DE HECHO, y persecución  
personal en mi contra. Abusando del  
Poder que le da la Constitución, y  
no respetando las garantías judiciales  
Habeas Corpus y tutela, cuando

(62) (13)



se tutela un derecho, y cuando se col-  
CE DE antitabus Corpus.  
Pido se traslade este Positivo a  
la Procuraduría General de la Ma-  
ción defensoria del Pueblo, y Personer-  
ría de Bogotá para resguardar mis  
derechos fundamentales. Saludo, por  
el sur (8°) de E. P. y M. S.

### Notificación

Recibe notificación, en la Recusación  
de Mijnes el Buen Pastor, patio (3)  
tramo (3) celula (11).

Atextamente,

INDIRA MARIA SOTO NAVARRO

CC F-22.520.764

TD F-79392

NUI F-1150370

correo: jadmin456ta@notificacionesyj.gov.co

procesosjudiciales@procuraduria.gov.co

judicia@defensoria.gov.co

www.personeria.gov.co

(63)

(14)



Notif-10da  
24/05/2023

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO CUARENTA Y CINCO ADMINISTRATIVO  
DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ

Bogotá D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintitrés (2023).

PROCESO:	11001-33-41-045-2023-00267-00
ACCIONANTE:	INDIRA MARÍA SOTO NAVARRO
ACCIONADO:	JUZGADO OCTAVO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
ACCIÓN:	HABEAS CORPUS
ASUNTO:	CONCEDE IMPUGNACIÓN

Teniendo en cuenta el anterior archivo, el Despacho **CONCEDE** la impugnación presentada por la parte accionante y ordenará remitir el expediente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, previa las anotaciones de rigor, como quiera que la providencia de 25 de mayo de 2023 que negó la acción de hábeas corpus fue notificada ese mismo día y el escrito de impugnación recibido en la misma fecha, por tal razón, se encontraba dentro del término de tres (3) días hábiles dispuesto por el artículo 7º de la Ley 1095 de 2006.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

MARÍA CAROLINA TORRES ESCOBAR  
Juez

CESP

Firmado Por:  
María Carolina Torres Escobar  
Juez  
Juzgado Administrativo  
045  
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,  
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: 1c3a218f03a575f1e43dd4834f4b3e734d26166dae0dda54205a2c4ca0684780  
Documento generado en 25/05/2023 05:04:06 PM

Descargue el archivo y valide este documento electrónico en la siguiente URL:  
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>

(64)



Notificado  
30/05/2023



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA  
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN T  
Registrada Porcentaje: Dña. Sandra Helena Escobedo Rojas  
Sujeto: D.C. MARTINEZ, (20) de mayo de dos mil veintidós (2022)

Accionante: **INDIRA SOTO**  
Identificación: 11001-20-41-045-2003-00007-01  
Identificación: INDIRA MARIA SOTO NAVARRO  
Identificación: JUZGADO OCTAVO (8º) DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BOGOTÁ  
Identificación: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

Se pretende o recibir la reintegración preventiva por la accionante, contra la providencia dictada el 21 de mayo de 2022 por el JUZGADO CUARENTA (4º) PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE CONOCIMIENTO DE BOGOTÁ, mediante la cual negó el habeas corpus interpuesto por la señora INDIRA MARIA SOTO NAVARRO, conforme a lo siguiente:

### I. ANTECEDENTES

#### 1.1. Sin escrito de Habeas Corpus

La señora INDIRA MARIA SOTO NAVARRO presenta acción de habeas corpus en nombre propio, contra el JUZGADO OCTAVO (8º) DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BOGOTÁ a fin de que se resuelva de fondo sobre el beneficio de libertad condicional de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 1712 de 2014, toda vez que se encuentran cumplidos los 20 meses de la pena impuesta, la acreditación de la pena del cargo laboral y la asistencia a la escuela, la valoración de la conducta buena y el control de consumo en el Centro penitenciario.

#### 1.2. Hechos

Del estado efectuado por la accionante en su escrito de habeas corpus se allegan las siguientes fechas:

Fue capturada el 4 de junio de 2019 y se encuentra detenida en el Centro de Reclusión de Mujeres de Bogotá "Calle El Buen Pastor", cumpliendo la condena desde el 16 de junio de 2019.

Archivo "000amando.pdf" del expediente digital

HABEAS CORPUS  
Procedimiento 11001-20-41-045-2003-00007-01  
Accionante: INDIRA MARIA SOTO NAVARRO

La accionante se encuentra a órdenes del JUZGADO OCTAVO (8º) DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD en el proceso con radicado No 11001-400-00-00-2019-02571-00.

Hizo un recuento in extenso de las múltiples acciones de tutela que ha instaurado a fin de que se protejan sus derechos fundamentales de petición y libertad.

Explicó detalladamente el tiempo físico que ha estado privado de la libertad y las reducciones de la condena.

### 1.3. PRONUNCIAMIENTO DE LA AUTORIDAD ACCIONADA Y DE LA VINCULADA

JUZGADO OCTAVO (8º) DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BOGOTÁ.

Mediante escrito del 25 de mayo de 2023 expuso que le correspondió ejecutar la pena impuesta a la accionante por el JUZGADO CUARTO (4º) PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE CONOCIMIENTO DE BOGOTÁ en la sentencia dictada el 27 de abril de 2022, de 66 meses de prisión, por los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico de estupefacientes.

La accionante ha estado privada de la libertad desde el 12 de junio de 2019 y ha tenido las siguientes reducciones de pena:

PROVINCIA	DESCUENTO	
	DIAS	HAS
24-11-2022	00	17,00
09-05-2023	00	15,00
TOTAL	00	32,00

Sostiene que el periodo en que la accionante ha estado privada de la libertad no corresponde al total de la condena que le fue impuesta, en razón a que de los sesenta y seis (66) meses determinados por el Juzgado 4º Penal del Circuito Especializado de Conocimiento de Bogotá, ha purgado cuarenta y ocho (48) meses y quince (15) días. Por ende, le hace falta tiempo intemoral por "diecisiete (17) meses y quince (15) días".

Afirmó que en el caso de la accionante no se han remitido nuevos cómputos, como tampoco hay alguna petición que esté pendiente por resolver.

Consideró que la privación de la libertad de la señora INDIRA MARIA SOTO NAVARRO obedece a la sentencia dictada por el JUZGADO CUARTO (4º) PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE CONOCIMIENTO DE BOGOTÁ, la cual ha tránsito a cosa juzgada. Además, no se encuentra acreditado el cumplimiento de la condena.

Archivo "00RespuestaJOEP.pdf" del expediente digital

(16)

(65)



Concluyó que esta acción es improcedente para que la accionante obtenga su libertad, pues debe acreditar ante el juez que vigila su condena la "documentación relativa a la redención punitiva y el examen de dicha circunstancia escapa de la órbita del juez de habeas corpus pues a este le está vedado realizar valoraciones que son propias del funcionario al que legalmente le corresponde el conocimiento del asunto".

#### -INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC-

Por medio de correo electrónico del 25 de mayo de 2023 informó que en el caso de la accionante no ha recibido boleto de libertad.

Expuso que la señora INDIRA MARÍA SOTO NAVARRO se encuentra privada de la libertad desde el 6 de junio de 2012, en razón a que en su contra se emitió boleto de detención por parte del JUZGADO OCTAVO (8º) DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BOGOTÁ D.C.

Sostiene que dicho juzgado vigila la condena impuesta a la accionante de 5 años y 6 meses de prisión, por los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.

Sostuvo que:

Nos permitimos informar que tras entrevista hecha a la PPL Sra INDIRA MARÍA SOTO NAVARRO (...) se confirmó que la acción de habeas corpus se instaura contra el juzgado octavo de ejecución de penas y medidas de seguridad, toda vez que, NO ha reconocido redención enviada por el establecimiento penitenciario TA DISTRITAL, sin embargo, en lo concerniente al establecimiento carcelario y penitenciario de alta y mediana seguridad - EL BUEN PASTOR, es menester informar (...) que a la fecha 12 de mayo de 2023 tiene reconocimiento en redención de un mes, 2 días y, el día de hoy, remitió por parte de la oficina jurídica al juzgado octavo de ejecución de penas y medidas de seguridad, documentación para redención de pena (...).

Así mismo, aportó la cartilla biográfica correspondiente a la señora INDIRA MARÍA SOTO NAVARRO.

#### II. PROVIDENCIA IMPUGNADA

Mediante providencia dictada el 25 de mayo de 2023<sup>4</sup> el Juzgado Cuarenta y Cinco (45) Administrativo de Bogotá D.C. negó la acción de habeas corpus con fundamento en las siguientes consideraciones:

Indicó que según lo manifestado por el JUZGADO OCTAVO (8º) DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BOGOTÁ, la accionante fue

<sup>3</sup> Archivo "07RespuestaInpec.pdf", del expediente digital

<sup>4</sup> Archivo "08Sentencia(N).pdf" del expediente digital

condenada a la pena de 66 meses de prisión, de los cuales solo ha cumplido 48 meses y 15 días.

Manifestó que en el caso se encuentra acreditado que a la accionante se le ha reconocido un monto total de redención de pena de un (1) mes y (2) días y ha estado reclusa en el centro carcelario "El Buen Pastor" desde el 12 de junio de 2019.

Consideró que la señora INDIRA MARÍA SOTO NAVARRO no se encuentra injustamente privada de la libertad o que se le esté prolongando ilegítimamente la misma, pues su detención obedece a la condena que le fue impuesta por el Juzgado Cuarto (4º) Penal del Circuito Especializado de Conocimiento de Bogotá.

Concluyó que de conformidad con lo manifestado con la autoridad judicial que vigila la condena de la accionante, no hay petición pendiente por resolver en su caso. Por ende, si considera que tiene derecho al beneficio de libertad condicional debe pedirlo ante el JUZGADO OCTAVO (8º) DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BOGOTÁ.

#### III. IMPUGNACIÓN

La accionante impugnó la decisión proferida por la A quo. Mediante memorial allegado al correo electrónico el 29 de mayo de 2023 a las 11:41 am, expuso los argumentos en los que sustentó su impugnación, reiterando lo dicho en el escrito de habeas corpus, en cuanto a las múltiples acciones de tutela que ha interpuesto para la protección de su derecho fundamental de petición y para obtener la entrega de documentos para redención de pena. Añadió que el Juez Octavo (8º) de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá no le ha reconocido 10 meses de tiempo intramural.

Sostuvo que en su caso se configura una vía de hecho constitucional, pues con los 10 meses que ha pagado de condena y con las redenciones de pena que están pendientes de cómputo por el Juzgado Ejecutor, faltaría menos tiempo para que se declare "PENA CUMPLIDA".

Argumentó que se le deben descontar 58 meses y 15 días de la condena que le fue impuesta y solo quedan pendientes 6 meses de la pena. Por consiguiente, le tendría derecho a un cambio de "FASE DE ALTA A MEDIANA y el Derecho de la LIBERTAD - CONDICIONAL".

#### IV. TRÁMITE PROCESAL EN SEDE DE IMPUGNACIÓN

La acción de la referencia fue reportada para su conocimiento en segunda instancia el 25 de mayo a las 5:13 pm, y fue enviada por correo al Despacho el 26 de mayo a las 9:34 am.



Habiendo sido interpuesta la impugnación de manera oportuna, y no habiendo necesidad decretar prueba alguna, procede decidir de fondo el presente asunto.

## V. CONSIDERACIONES

### 5.1. COMPETENCIA

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 3° de la Ley 1095 de 2006, la susrita Magistrada es competente para conocer de la presente acción pública de habeas corpus.

### 5.2. PROBLEMA JURÍDICO

Se debe establecer si los supuestos fácticos y jurídicos que determinan la procedencia de la acción ejercida están presentes en el asunto bajo examen y, en tal caso, si a la señora INDIRA MARÍA SOTO NAVARRRO se le está prolongando ilegalmente la privación de su libertad por cuanto, según manifiesta, tiene derecho a la libertad condicional al haber cumplido las 3/5 partes de la pena que le fue impuesta.

### 5.3. FUNDAMENTOS NORMATIVOS Y JURISPRUDENCIALES

El derecho fundamental y la acción de habeas corpus se encuentra consagrado en el art. 30 de la Constitución Política como la máxima garantía normativa dirigida al amparo de la libertad personal y los derechos conexos, en consonancia con lo establecido en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (art. 25), la Declaración Universal de Derechos Humanos (arts. 3°, 8°, 9° y 10°), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (arts. 1°, 3° y 4°), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (arts. 7°, 8° y 25), y en el conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión<sup>1</sup>.

Como derecho fundamental, su titularidad se extiende a todas las personas y se caracteriza por ser imprescriptible, inalienable, irrenunciable, intangible, inviolable, universal, efectivo, extrínseco e intrínseco, inmediato, perentorio, interdependiente y complementario. Como acción constitucional, esta es pública, cautelar, preferente, celeris, impugnabile, objeto de contradicción, jurisdiccional, informal, breve y tiene un procedimiento especial reglamentado por la Ley 1095 de 2006.

En síntesis, se trata de la garantía más importante para la protección del

<sup>1</sup> ARTÍCULO 30. Quien en su persona se encuentre privada de su libertad, y creyere estarlo ilegalmente, tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial, en todo tiempo, por sí o por interpuesta persona, el Habeas Corpus, el cual debe resolverse en el término de treinta y seis horas.

derecho a la libertad, consagrado en el artículo 28 de la Carta Política así:

ARTÍCULO 28. Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, ni molestado a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.

La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las veinticuatro y sesenta y seis horas siguientes, para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley.

En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles.

Ahora bien, jurisprudencialmente se ha definido que este mecanismo procede cuando una persona considere que se le está privada de la libertad con violación de las garantías constitucionales y legales o si que tal privación se ha prolongado de manera ilegal o injustificada. Al respecto, la H. Corte Constitucional en la sentencia T-724 de 2004<sup>2</sup> señaló:

[...] (E)sta Corporación tiene definida que la protección constitucional que brinda el recurso de habeas corpus procede: (1) cuando se supiere o a una persona en contravención con lo dispuesto en el artículo 28 superior o (2) cuando la privación de la libertad, no obstante haberse verificado a los efectos lineamientos de la norma citada, es ilegal, arbitraria o se ha prolongado indebidamente, porque el derecho fundamental a la libertad es susceptible de limitación<sup>3</sup>, pero sus restricciones deben observarse dentro de razonabilidad y proporcionalidad que fuera de tener el propósito de justificar adecuadamente una medida tan drástica, contribuyan a mantener intacto el necesario equilibrio entre las prerrogativas en que consiste el derecho y los límites del mismo<sup>4</sup>.

Así mismo, frente a la procedencia de la acción, en la sentencia T-240 de 1997 la H. Corte Constitucional señaló lo siguiente:

[...] (L)a garantía de la libertad personal puede ejercerse mediante la acción de Habeas Corpus en alguno de los siguientes eventos: (1) siempre que la vulneración de la libertad se produzca por orden arbitrario de autoridad no judicial; (2) mientras la persona se encuentre ilegalmente privada de su libertad por vencimiento de los términos legales respectivos; (3) cuando, pese a existir una providencia judicial que ampara la limitación del derecho a la libertad personal, la solicitud de Habeas Corpus se formuló durante el periodo de prolongación ilegal de la libertad; es decir, antes de proferir la decisión judicial; (4) si la providencia que ordena la detención es una auténtica vía de hecho judicial.

Por otra parte, a diferencia de la acción de tutela, el habeas corpus no es un mecanismo de carácter residual o subsidiario. No obstante, se tiene que el derecho a la libertad no es absoluto, pues afronta su restricción cuando el

<sup>1</sup> Véase también la sentencia T-240 de 1997, dictada por la misma Corporación.

<sup>2</sup> Entre la jurisprudencia judicial de la detención preventiva y de las medidas de aseguramiento, se pueden citar: sentencias T-104, T-140, T-141, T-142, T-143, T-144, T-145, T-146, T-147, T-148, T-149, T-150, T-151, T-152, T-153, T-154, T-155, T-156, T-157, T-158, T-159, T-160, T-161, T-162, T-163, T-164, T-165, T-166, T-167, T-168, T-169, T-170, T-171, T-172, T-173, T-174, T-175, T-176, T-177, T-178, T-179, T-180, T-181, T-182, T-183, T-184, T-185, T-186, T-187, T-188, T-189, T-190, T-191, T-192, T-193, T-194, T-195, T-196, T-197, T-198, T-199, T-200, T-201, T-202, T-203, T-204, T-205, T-206, T-207, T-208, T-209, T-210, T-211, T-212, T-213, T-214, T-215, T-216, T-217, T-218, T-219, T-220, T-221, T-222, T-223, T-224, T-225, T-226, T-227, T-228, T-229, T-230, T-231, T-232, T-233, T-234, T-235, T-236, T-237, T-238, T-239, T-240, T-241, T-242, T-243, T-244, T-245, T-246, T-247, T-248, T-249, T-250, T-251, T-252, T-253, T-254, T-255, T-256, T-257, T-258, T-259, T-260, T-261, T-262, T-263, T-264, T-265, T-266, T-267, T-268, T-269, T-270, T-271, T-272, T-273, T-274, T-275, T-276, T-277, T-278, T-279, T-280, T-281, T-282, T-283, T-284, T-285, T-286, T-287, T-288, T-289, T-290, T-291, T-292, T-293, T-294, T-295, T-296, T-297, T-298, T-299, T-300, T-301, T-302, T-303, T-304, T-305, T-306, T-307, T-308, T-309, T-310, T-311, T-312, T-313, T-314, T-315, T-316, T-317, T-318, T-319, T-320, T-321, T-322, T-323, T-324, T-325, T-326, T-327, T-328, T-329, T-330, T-331, T-332, T-333, T-334, T-335, T-336, T-337, T-338, T-339, T-340, T-341, T-342, T-343, T-344, T-345, T-346, T-347, T-348, T-349, T-350, T-351, T-352, T-353, T-354, T-355, T-356, T-357, T-358, T-359, T-360, T-361, T-362, T-363, T-364, T-365, T-366, T-367, T-368, T-369, T-370, T-371, T-372, T-373, T-374, T-375, T-376, T-377, T-378, T-379, T-380, T-381, T-382, T-383, T-384, T-385, T-386, T-387, T-388, T-389, T-390, T-391, T-392, T-393, T-394, T-395, T-396, T-397, T-398, T-399, T-400, T-401, T-402, T-403, T-404, T-405, T-406, T-407, T-408, T-409, T-410, T-411, T-412, T-413, T-414, T-415, T-416, T-417, T-418, T-419, T-420, T-421, T-422, T-423, T-424, T-425, T-426, T-427, T-428, T-429, T-430, T-431, T-432, T-433, T-434, T-435, T-436, T-437, T-438, T-439, T-440, T-441, T-442, T-443, T-444, T-445, T-446, T-447, T-448, T-449, T-450, T-451, T-452, T-453, T-454, T-455, T-456, T-457, T-458, T-459, T-460, T-461, T-462, T-463, T-464, T-465, T-466, T-467, T-468, T-469, T-470, T-471, T-472, T-473, T-474, T-475, T-476, T-477, T-478, T-479, T-480, T-481, T-482, T-483, T-484, T-485, T-486, T-487, T-488, T-489, T-490, T-491, T-492, T-493, T-494, T-495, T-496, T-497, T-498, T-499, T-500, T-501, T-502, T-503, T-504, T-505, T-506, T-507, T-508, T-509, T-510, T-511, T-512, T-513, T-514, T-515, T-516, T-517, T-518, T-519, T-520, T-521, T-522, T-523, T-524, T-525, T-526, T-527, T-528, T-529, T-530, T-531, T-532, T-533, T-534, T-535, T-536, T-537, T-538, T-539, T-540, T-541, T-542, T-543, T-544, T-545, T-546, T-547, T-548, T-549, T-550, T-551, T-552, T-553, T-554, T-555, T-556, T-557, T-558, T-559, T-560, T-561, T-562, T-563, T-564, T-565, T-566, T-567, T-568, T-569, T-570, T-571, T-572, T-573, T-574, T-575, T-576, T-577, T-578, T-579, T-580, T-581, T-582, T-583, T-584, T-585, T-586, T-587, T-588, T-589, T-590, T-591, T-592, T-593, T-594, T-595, T-596, T-597, T-598, T-599, T-600, T-601, T-602, T-603, T-604, T-605, T-606, T-607, T-608, T-609, T-610, T-611, T-612, T-613, T-614, T-615, T-616, T-617, T-618, T-619, T-620, T-621, T-622, T-623, T-624, T-625, T-626, T-627, T-628, T-629, T-630, T-631, T-632, T-633, T-634, T-635, T-636, T-637, T-638, T-639, T-640, T-641, T-642, T-643, T-644, T-645, T-646, T-647, T-648, T-649, T-650, T-651, T-652, T-653, T-654, T-655, T-656, T-657, T-658, T-659, T-660, T-661, T-662, T-663, T-664, T-665, T-666, T-667, T-668, T-669, T-670, T-671, T-672, T-673, T-674, T-675, T-676, T-677, T-678, T-679, T-680, T-681, T-682, T-683, T-684, T-685, T-686, T-687, T-688, T-689, T-690, T-691, T-692, T-693, T-694, T-695, T-696, T-697, T-698, T-699, T-700, T-701, T-702, T-703, T-704, T-705, T-706, T-707, T-708, T-709, T-710, T-711, T-712, T-713, T-714, T-715, T-716, T-717, T-718, T-719, T-720, T-721, T-722, T-723, T-724, T-725, T-726, T-727, T-728, T-729, T-730, T-731, T-732, T-733, T-734, T-735, T-736, T-737, T-738, T-739, T-740, T-741, T-742, T-743, T-744, T-745, T-746, T-747, T-748, T-749, T-750, T-751, T-752, T-753, T-754, T-755, T-756, T-757, T-758, T-759, T-760, T-761, T-762, T-763, T-764, T-765, T-766, T-767, T-768, T-769, T-770, T-771, T-772, T-773, T-774, T-775, T-776, T-777, T-778, T-779, T-780, T-781, T-782, T-783, T-784, T-785, T-786, T-787, T-788, T-789, T-790, T-791, T-792, T-793, T-794, T-795, T-796, T-797, T-798, T-799, T-800, T-801, T-802, T-803, T-804, T-805, T-806, T-807, T-808, T-809, T-810, T-811, T-812, T-813, T-814, T-815, T-816, T-817, T-818, T-819, T-820, T-821, T-822, T-823, T-824, T-825, T-826, T-827, T-828, T-829, T-830, T-831, T-832, T-833, T-834, T-835, T-836, T-837, T-838, T-839, T-840, T-841, T-842, T-843, T-844, T-845, T-846, T-847, T-848, T-849, T-850, T-851, T-852, T-853, T-854, T-855, T-856, T-857, T-858, T-859, T-860, T-861, T-862, T-863, T-864, T-865, T-866, T-867, T-868, T-869, T-870, T-871, T-872, T-873, T-874, T-875, T-876, T-877, T-878, T-879, T-880, T-881, T-882, T-883, T-884, T-885, T-886, T-887, T-888, T-889, T-890, T-891, T-892, T-893, T-894, T-895, T-896, T-897, T-898, T-899, T-900, T-901, T-902, T-903, T-904, T-905, T-906, T-907, T-908, T-909, T-910, T-911, T-912, T-913, T-914, T-915, T-916, T-917, T-918, T-919, T-920, T-921, T-922, T-923, T-924, T-925, T-926, T-927, T-928, T-929, T-930, T-931, T-932, T-933, T-934, T-935, T-936, T-937, T-938, T-939, T-940, T-941, T-942, T-943, T-944, T-945, T-946, T-947, T-948, T-949, T-950, T-951, T-952, T-953, T-954, T-955, T-956, T-957, T-958, T-959, T-960, T-961, T-962, T-963, T-964, T-965, T-966, T-967, T-968, T-969, T-970, T-971, T-972, T-973, T-974, T-975, T-976, T-977, T-978, T-979, T-980, T-981, T-982, T-983, T-984, T-985, T-986, T-987, T-988, T-989, T-990, T-991, T-992, T-993, T-994, T-995, T-996, T-997, T-998, T-999, T-1000, T-1001, T-1002, T-1003, T-1004, T-1005, T-1006, T-1007, T-1008, T-1009, T-1010, T-1011, T-1012, T-1013, T-1014, T-1015, T-1016, T-1017, T-1018, T-1019, T-1020, T-1021, T-1022, T-1023, T-1024, T-1025, T-1026, T-1027, T-1028, T-1029, T-1030, T-1031, T-1032, T-1033, T-1034, T-1035, T-1036, T-1037, T-1038, T-1039, T-1040, T-1041, T-1042, T-1043, T-1044, T-1045, T-1046, T-1047, T-1048, T-1049, T-1050, T-1051, T-1052, T-1053, T-1054, T-1055, T-1056, T-1057, T-1058, T-1059, T-1060, T-1061, T-1062, T-1063, T-1064, T-1065, T-1066, T-1067, T-1068, T-1069, T-1070, T-1071, T-1072, T-1073, T-1074, T-1075, T-1076, T-1077, T-1078, T-1079, T-1080, T-1081, T-1082, T-1083, T-1084, T-1085, T-1086, T-1087, T-1088, T-1089, T-1090, T-1091, T-1092, T-1093, T-1094, T-1095, T-1096, T-1097, T-1098, T-1099, T-1100, T-1101, T-1102, T-1103, T-1104, T-1105, T-1106, T-1107, T-1108, T-1109, T-1110, T-1111, T-1112, T-1113, T-1114, T-1115, T-1116, T-1117, T-1118, T-1119, T-1120, T-1121, T-1122, T-1123, T-1124, T-1125, T-1126, T-1127, T-1128, T-1129, T-1130, T-1131, T-1132, T-1133, T-1134, T-1135, T-1136, T-1137, T-1138, T-1139, T-1140, T-1141, T-1142, T-1143, T-1144, T-1145, T-1146, T-1147, T-1148, T-1149, T-1150, T-1151, T-1152, T-1153, T-1154, T-1155, T-1156, T-1157, T-1158, T-1159, T-1160, T-1161, T-1162, T-1163, T-1164, T-1165, T-1166, T-1167, T-1168, T-1169, T-1170, T-1171, T-1172, T-1173, T-1174, T-1175, T-1176, T-1177, T-1178, T-1179, T-1180, T-1181, T-1182, T-1183, T-1184, T-1185, T-1186, T-1187, T-1188, T-1189, T-1190, T-1191, T-1192, T-1193, T-1194, T-1195, T-1196, T-1197, T-1198, T-1199, T-1200, T-1201, T-1202, T-1203, T-1204, T-1205, T-1206, T-1207, T-1208, T-1209, T-1210, T-1211, T-1212, T-1213, T-1214, T-1215, T-1216, T-1217, T-1218, T-1219, T-1220, T-1221, T-1222, T-1223, T-1224, T-1225, T-1226, T-1227, T-1228, T-1229, T-1230, T-1231, T-1232, T-1233, T-1234, T-1235, T-1236, T-1237, T-1238, T-1239, T-1240, T-1241, T-1242, T-1243, T-1244, T-1245, T-1246, T-1247, T-1248, T-1249, T-1250, T-1251, T-1252, T-1253, T-1254, T-1255, T-1256, T-1257, T-1258, T-1259, T-1260, T-1261, T-1262, T-1263, T-1264, T-1265, T-1266, T-1267, T-1268, T-1269, T-1270, T-1271, T-1272, T-1273, T-1274, T-1275, T-1276, T-1277, T-1278, T-1279, T-1280, T-1281, T-1282, T-1283, T-1284, T-1285, T-1286, T-1287, T-1288, T-1289, T-1290, T-1291, T-1292, T-1293, T-1294, T-1295, T-1296, T-1297, T-1298, T-1299, T-1300, T-1301, T-1302, T-1303, T-1304, T-1305, T-1306, T-1307, T-1308, T-1309, T-1310, T-1311, T-1312, T-1313, T-1314, T-1315, T-1316, T-1317, T-1318, T-1319, T-1320, T-1321, T-1322, T-1323, T-1324, T-1325, T-1326, T-1327, T-1328, T-1329, T-1330, T-1331, T-1332, T-1333, T-1334, T-1335, T-1336, T-1337, T-1338, T-1339, T-1340, T-1341, T-1342, T-1343, T-1344, T-1345, T-1346, T-1347, T-1348, T-1349, T-1350, T-1351, T-1352, T-1353, T-1354, T-1355, T-1356, T-1357, T-1358, T-1359, T-1360, T-1361, T-1362, T-1363, T-1364, T-1365, T-1366, T-1367, T-1368, T-1369, T-1370, T-1371, T-1372, T-1373, T-1374, T-1375, T-1376, T-1377, T-1378, T-1379, T-1380, T-1381, T-1382, T-1383, T-1384, T-1385, T-1386, T-1387, T-1388, T-1389, T-1390, T-1391, T-1392, T-1393, T-1394, T-1395, T-1396, T-1397, T-1398, T-1399, T-1400, T-1401, T-1402, T-1403, T-1404, T-1405, T-1406, T-1407, T-1408, T-1409, T-1410, T-1411, T-1412, T-1413, T-1414, T-1415, T-1416, T-1417, T-1418, T-1419, T-1420, T-1421, T-1422, T-1423, T-1424, T-1425, T-1426, T-1427, T-1428, T-1429, T-1430, T-1431, T-1432, T-1433, T-1434, T-1435, T-1436, T-1437, T-1438, T-1439, T-1440, T-1441, T-1442, T-1443, T-1444, T-1445, T-1446, T-1447, T-1448, T-1449, T-1450, T-1451, T-1452, T-1453, T-1454, T-1455, T-1456, T-1457, T-1458, T-1459, T-1460, T-1461, T-1462, T-1463, T-1464, T-1465, T-1466, T-1467, T-1468, T-1469, T-1470, T-1471, T-1472, T-1473, T-1474, T-1475, T-1476, T-1477, T-1478, T-1479, T-1480, T-1481, T-1482, T-1483, T-1484, T-1485, T-1486, T-1487, T-1488, T-1489, T-1490, T-1491, T-1492, T-1493, T-1494, T-1495, T-1496, T-1497, T-1498, T-1499, T-1500, T-1501, T-1502, T-1503, T-1504, T-1505, T-1506, T-1507, T-1508, T-1509, T-1510, T-1511, T-1512, T-1513, T-1514, T-1515, T-1516, T-1517, T-1518, T-1519, T-1520, T-1521, T-1522, T-1523, T-1524, T-1525, T-1526, T-1527, T-1528, T-1529, T-1530, T-1531, T-1532, T-1533, T-1534, T-1535, T-1536, T-1537, T-1538, T-1539, T-1540, T-1541, T-1542, T-1543, T-1544, T-1545, T-1546, T-1547, T-1548, T-1549, T-1550, T-1551, T-1552, T-1553, T-1554, T-1555, T-1556, T-1557, T-1558, T-1559, T-1560, T-1561, T-1562, T-1563, T-1564, T-1565, T-1566, T-1567, T-1568, T-1569, T-1570, T-1571, T-1572, T-1573, T-1574, T-1575, T-1576, T-1577, T-1578, T-1579, T-1580, T-1581, T-1582, T-1583, T-1584, T-1585, T-1586, T-1587, T-1588, T-1589, T-1590, T-1591, T-1592, T-1593, T-1594, T-1595, T-1596, T-1597, T-1598, T-1599, T-1600, T-1601, T-1602, T-1603, T-1604, T-1605, T-1606, T-1607, T-1608, T-1609, T-1610, T-1611, T-1612, T-1613, T-1614, T-1615, T-1616, T-1617, T-1618, T-1619, T-1620, T-1621, T-1622, T-1623, T-1624, T-1625, T-1626, T-1627, T-1628, T-1629, T-1630, T-1631, T-1632, T-1633, T-1634, T-1635, T-1636, T-1637, T-1638, T-1639, T-1640, T-1641, T-1642, T-1643, T-1644, T-1645, T-1646, T-1647, T-1648, T-1649, T-1650, T-1651, T-1652, T-1653, T-1654, T-1655, T-1656, T-1657, T-1658, T-1659, T-1660, T-1661, T-1662, T-1663, T-1664, T-1665, T-1666, T-1667, T-1668, T-1669, T-1670, T-1671, T-1672, T-1673, T-1674, T-1675, T-1676, T-1677, T-1678, T-1679, T-1680, T-1681, T-1682, T-1683, T-1684, T-1685, T-1686, T-1687, T-1688, T-1689, T-1690, T-1691, T-1692, T-1693, T-1694, T-1695, T-1696, T-1697, T-1698, T-1699, T-1700, T-1701, T-1702, T-1703, T-1704, T-1705, T-1706, T-1707, T-1708, T-1709, T-1710, T-1711, T-1712, T-1713, T-1714, T-1715, T-1716, T-1717, T-1718, T-1719, T-1720, T-1721, T-1722, T-1723, T-1724, T-1725, T-1726, T-1727, T-1728, T-1729, T-1730, T-1731, T-1732, T-1733, T-1734, T-1735, T-1736, T-1737, T-1738, T-1739,



ciudadano es objeto de un proceso penal adelantado con base en el respeto del debido proceso y del derecho de defensa, también constitucionalmente reglados.

En ese sentido, el ejercicio de esta acción constitucional debe respetar el principio del juez natural y los conductos procesales regulares, siempre y cuando sean suficientes para garantizar el derecho a la libertad, de tal manera que previo a la interposición del mecanismo es necesario, en principio, que el interesado haya presentado solicitud de libertad ante la autoridad competente, según el caso, pues de lo contrario se desvirtúa la razón de ser del amparo constitucional y se vulnera el debido proceso garantizado por el artículo 29 de la Constitución Política.

Al respecto, la H. Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal, en providencia del 29 de abril de 2016, Radicado No. 48016, ha indicado:

3. Cuando existe un proceso judicial en trámite, el hábeas corpus no puede utilizarse para: i) sustituir los procedimientos judiciales comunes dentro de los cuales deben formularse las peticiones de libertad; ii) reemplazar los recursos ordinarios de reposición y apelación a través de los cuales deben impugnarse las decisiones que interfieren el derecho a la libertad personal; iii) desvirtuar al funcionario judicial competente; y iv) obtener una opinión adivina - a manera de instancia adicional - de la autoridad llamada a resolver la afente a la libertad de las personas.

4. En los casos en que la privación de la libertad está respaldada en providencia judicial, las solicitudes que buscan restablecer esa garantía deben formularse dentro del curso ordinario y a través de los recursos existentes al interior del proceso.

Sólo en eventos extraordinarios se valida la procedencia de la acción de hábeas corpus, siempre y cuando la actuación judicial constituya una auténtica vía de hecho y contra la misma no proceda recurso alguno (extrayado fuera del texto).

De igual manera, la misma Sala de la Corporación referida en providencia del 11 de mayo de 2016, No. de radicado 48074, consideró:

21. La acción de hábeas corpus es un mecanismo constitucional erigido para amparar la libertad personal ante las amenazas o atentados que contra ella puedan producir las autoridades públicas, según se desprende del artículo 1º de la Ley 1095 de 2006, alección que, conforme reiterada jurisprudencia de esta Corporación, se pueda presentar tanto por la ilegalidad de una captura como por la prolongación ilícita de la privación de la libertad (CSJ AHP, 7 Nov 2008, Rad. 30772, CSJ AHP, 23 Ago 2012, 39744).

En embargo, la acción no está concebida para sustituir los mecanismos ordinarios contemplados al interior de la actuación penal para proteger la vigencia del derecho fundamental, pues desconocer su existencia equivaldría a pasar por alto "la observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio", premisa basar en la que descansa la garantía superior a un proceso como es debido prevista en el artículo 29 de la Constitución Política. Ello explica por qué le está vedado al operador judicial al resolver la solicitud de amparo incurrir en tentativas ajenas a la naturaleza del hábeas corpus, so pena de invadir órbitas propias a la competencia del juez natural al que le corresponde el conocimiento de las diligencias de donde proviene la restricción.

Debe agregarse también que el hábeas corpus podrá interponerse en garantía inmediata del derecho fundamental a la libertad, "cuando sea razonable advertir el advenimiento de un mal mayor o de un perjuicio irremediable, en caso de esperar la respuesta a la solicitud de libertad elevada ante el mismo funcionario judicial, o a tal menoscabo puede sobrevenir de superflua la garantía de la libertad o que antes se resuelvan los recursos ordinarios".

Por lo anterior, para denegar la acción de hábeas corpus no es suficiente argumentar que la persona se encuentra privada de la libertad por cuenta de una actuación procesal a que dentro del trámite existen recursos para debatir la situación fidada de leña del derecho a la libertad personal, pues en tal evento resulta necesario examinar el caso concreto en orden a establecer si se presenta una vía de hecho, como eventualmente puede ocurrir cuando, cumpliéndose las circunstancias fácticas y legales que hacen procedente la libertad, esta se niega sin fundamento legal o razonable".

De lo anterior, es claro que la persona privada de la libertad con fundamento en una orden o sentencia judicial, por regla general, debe acudir previamente al procedimiento ordinario y agotar los recursos previos establecidos en la Ley antes que acudir a la acción de hábeas corpus, en atención a los principios de legalidad, del debido proceso y del juez natural. Por ello, se insiste en que el mecanismo no puede ser utilizado para reemplazar los recursos ordinarios que proceden contra decisiones que afectan el derecho a la libertad.

Debe agregarse también que cuando se encuentra en curso un proceso judicial o la privación de la libertad se sustenta en una decisión judicial, el hábeas corpus podrá interponerse en garantía inmediata del derecho fundamental a la libertad "i) cuando sea razonable advertir el advenimiento de un mal mayor o de un perjuicio irremediable, en caso de esperar la respuesta a la solicitud de libertad elevada ante el mismo funcionario judicial, o a tal menoscabo puede sobrevenir de superflua la garantía de la libertad o que antes se resuelvan los recursos ordinarios".

Por lo anterior, para denegar la acción de hábeas corpus no es suficiente argumentar que la persona se encuentra privada de la libertad por cuenta de una actuación procesal a que dentro del trámite existen recursos para debatir la situación fidada de leña del derecho a la libertad personal, pues en tal evento resulta necesario examinar el caso concreto en orden a establecer si se presenta una vía de hecho, como eventualmente puede ocurrir cuando, cumpliéndose las circunstancias fácticas y legales que hacen procedente la libertad, esta se niega sin fundamento legal o razonable".

- Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, decisión del 10 de junio de 2016, radicación No. 48016, magistrado ponente Dr. Jaime Iván Ospina.  
- Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, decisión del 7 de octubre de 2015, radicación No. 43064, magistrado ponente Dr. Fernando Alberto Castro Ceballos.  
- Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, decisión del 10 de junio de 2016, radicación No. 48016, magistrado ponente Dr. Jaime Iván Ospina.  
- Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, decisión del 7 de octubre de 2015, radicación No. 43064, magistrado ponente Dr. Fernando Alberto Castro Ceballos.



SECCIÓN QUINTA  
 25000-23-42-000-2020-00316-01  
 25000-23-42-000-2020-00316-01

Por su parte, el H. Consejo de Estado - Sala de la Contencioso Administrativo - Sección Quinta en providencia del 18 de mayo de 2020, Magistrado Ponente: HEDER GARCÍA SOTO, expediente: 25000-23-42-000-2020-00316-01, respecto a la improcedencia de la Acción constitucional de habeas corpus para sustituir los mecanismos de defensa judicial para la protección del derecho a la libertad, dispuso:

**13.1.2. El carácter principal de la acción de habeas corpus y la imposibilidad de sustituir los mecanismos ordinarios de protección del derecho a la libertad.**

46. En cuanto a las características esenciales de la acción de habeas corpus no puede soslayarse su carácter principal y no subsidiario. Esto significa, que en principio su procedibilidad no depende de la existencia o inexistencia de otros mecanismos dentro del proceso penal.

47. Sobre el particular, la Corte Constitucional de manera reiterada ha destacado que trata con que se presente una privación legal de la libertad o su prolongación ilícita para que proceda la referida acción, motivo por el cual "no es de recibo que en un trámite de habeas corpus se alegue (a) y finalmente que la acción constitucional es improcedente porque la persona se encuentra privada de la libertad por cuenta de una actuación procesal a que dentro del proceso existen recursos para debatir la situación jurídica de la persona de derecho a la libertad personal".

48. No obstante lo anterior, que la acción de habeas corpus sea principal y no subsidiaria, en manera alguna significa que a través de ella se puedan reemplazar los mecanismos ordinarios establecidos por el legislador para la protección del derecho a la libertad y mucho menos, que constituya el medio idóneo para controvertir todas las decisiones judiciales que restringen dicho derecho o modo de una tercera instancia.

49. En tal sentido, con toda claridad la Sección Segunda del Consejo de Estado ha considerado que la acción de habeas corpus no puede convertirse en un mecanismo suplementario o sustitutivo de los procesos en que se investigan conductas punibles, pues se trata de una acción excepcional de protección de libertad y de los derechos que puedan verse afectados como consecuencia de la privación de ésta, motivo por el cual aunque "en principio y no subsidiaria, no está concebida tampoco para sustituir los límites propios del proceso penal".

50. Finalmente, con el fin de prevenir que el habeas corpus sea empleado como un mecanismo alternativo, suplementario o sustitutivo para debatir asuntos que son propios de los procesos en que se investigan y juzgan conductas punibles, la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal, ha destacado la importancia de tener en cuenta en los casos concretos los mecanismos ordinarios de protección y la eficacia de los mismos, sin que ello signifique que dicha circunstancia por sí misma torne improcedente la acción constitucional, en tanto la misma por existencia resulta ser el medio idóneo de protección.

\* Proceso No 32572, Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal, Auto del cuatro (4) de septiembre de dos mil nueve (2009), M.P. Tesis Ramírez Bastidas.

\* Corte Constitucional, Sentencia T-491 de 2014, M.P. Mauricio González Cuervo, el criterio que sobre de exponer ha sido considerado por el Consejo de Estado, como puede apreciarse en los siguientes:

\* Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto del 13 de abril de 2016, rad. 11201-03-15-000-2016-01044-00010, M.P. Gabriel Valbuena Hernández. Sobre este mismo aspecto se ha pronunciado la Sección Quinta del Consejo de Estado, entre otros, en la providencia del 15 de diciembre de 2019, rad. 25000-23-34-000-2019-00848-01, M.P. Rocio Arango Ochoa.

ante vista de hecho o alguna de las circunstancias que hacen procedente la acción de tutela contra providencias, que vulneren o pongan riesgo al derecho a la libertad, e inclusive, cuando dicha situación esté siendo objeto de análisis en un trámite judicial de carácter ordinario.

El anterior criterio fue reiterado por el H. Consejo de Estado - Sala de la Contencioso Administrativo - Sección Quinta en providencia del 29 de septiembre de 2022, Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ALVAREZ PARRA, expediente: 25000-23-42-0002022-00637-01 así:

Pues bien, de la documentación allegada a la presente que a su vez se advierte que el Juzgado Sexto (6°) de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá mediante auto de 4 de marzo de 2022, acogió al expediente por la petición de 21 de febrero de 2021, en la cual el recurrente solicitó las siguientes providencias: 1) liberación definitiva y 2) prescripción de la sanción penal, en relación con los dos primeros expedientes ya mencionados, en los que se alega que en la providencia del 17 de enero de 2020, en el sentido de haberse agotado los recursos procedentes, además de encontrarse en firme esta decisión y, conculcarse que no se ha presentado ninguna circunstancia que constituya defecto de fundamento, considera que el accionante debió esgrimir a lo más reciente.

Ante el último pronunciamiento, a saber, la prescripción de la sanción penal, ordenó que por el Centro de Servicios de los Juzgados Penales de Bogotá se le informara al actor que el Juzgado se encuentra verificando que durante la ejecución de la pena no se hubiera presentado la suspensión y/o interrupción de la prescripción, y que se está a la espera de la información requerida a otras autoridades judiciales.

Ante este escenario, el despacho considera que, el presente caso no se enmarca dentro de ninguna de las hipótesis que ha señalado la jurisprudencia para proteger el derecho a la libertad por medio la acción de habeas corpus, esto es, privación legal de la libertad o prolongación ilícita de la privación de la libertad, pues del contenido del escrito de la impugnación al Auto de estudio, se desprende que el señor Fernando Castro no está privado de su libertad, sino que se encuentra prófugo, según lo informó el Juzgado Sexto (6°) de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá.

Au las cosas resultó claro que, en el subexámen el juez del habeas corpus no tiene competencia para pronunciarse sobre las peticiones tendientes a ordenar "la libertad inmediata" ni "la cancelación de la orden de captura que data de antaño", pues, tal y como se advirtió, está pendiente por decidirse por parte del juez ordinario la solicitud de prescripción de la sanción penal, elevadas el 1 de noviembre de 2019, y reiteradas el 21 de febrero de 2021, según lo ordenó el Juzgado Sexto (6°) de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá.

En interés, se reitera, el juez constitucional no puede interferir en este momento procesal, sino que tiene que permitir que se resuelvan las peticiones al interior del proceso penal y luego si podrá verificarse si existe una legal privación de la libertad del procesado o una prolongación ilegítima de la libertad. Así lo consignó la Corte Suprema de Justicia en otra providencia, en los siguientes términos:

"Allí se torna prematura este amparo, ya que su carácter subsidiario le resta virtualidad para operar concomitantemente con otros medios de defensa, puesto que estando éstos en marcha el interesado debe esperar su denegación y no, como aquí pasó, acudir a este camino de manera anticipada o paralela a su ejercicio. Al contrario sería tanto como



121)

INPEC CORPUS  
Procedimiento 11001-23-41-00014001-01  
Accionante: INDIRA MARIA SOTO NAVARRO

conviene en principio una acción de naturaleza excepcional, reclusión y de intervención respectiva."

Acorde con los razonamientos aquí expuestos, se impone confirmar la providencia proferida el 22 de septiembre de 2022, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección "I", que negó la solicitud de habeas corpus presentada por el actor. (Negritas del Despacho).

#### 5.4. EL CASO CONCRETO

Analizada el caso de la referencia, se considera que debe negarse la presente acción con fundamento en lo siguiente:

Conforme con los antecedentes narrados por la accionante, en el asunto se pretende la libertad condicional, en razón a que afirma que cumplió las 3/5 partes de la condena que le fue impuesta de 66 meses de prisión.

Al respecto, es pertinente precisar que de las pruebas aportadas al expediente y de los informes rendidos por la autoridad accionada y por el INPEC se observa que el JUZGADO CUARTO (4º) PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE CONOCIMIENTO DE BOGOTÁ mediante sentencia del 27 de abril de 2022 condenó a la accionante a 66 meses de prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico de estupefacientes.

Al JUZGADO (8º) OCTAVO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BOGOTÁ le correspondió vigilar la condena impuesta a la accionante, el cual informó que "ha purgado cuarenta y ocho (48) meses y quince (15) días" de condena y aún le faltan "diecisiete (17) meses y quince (15) días para alcanzar el límite temporal" para ordenar su liberación.

Igualmente, dicho Juzgado a través de auto del 24 de noviembre de 2022<sup>17</sup> redujo la pena de la accionante en proporción de 17 días, por los estudios efectuados en los meses de junio y julio del mismo año, y negó el subrogado de la libertad condicional entre otras razones, porque de su cartilla biográfica se advierte que " pese las buenas y ejemplares calificaciones en torno a su comportamiento intramuros, se observa que la fulminada no ha tenido progreso significativo en su tratamiento penitenciario (...) por cuanto pese a sus más de tres (3) años de reclusión no ha logrado superar la primera fase del tratamiento penitenciario". Por ende, obtuvo un resultado negativo en la valoración de la conducta punible.

Posteriormente, el 8 de mayo de 2023<sup>18</sup> el JUZGADO OCTAVO (8º) DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BOGOTÁ negó el reconocimiento de redención de pena frente a las actividades educativas desarrolladas por la accionante del 18 de junio al 17 de septiembre de 2021 y

<sup>17</sup> Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Radicación N°. 23001-22-14-000-2019-00105-01, providencia de 26 de julio de 2019 (Providencia del texto en cita)

<sup>18</sup> Fls 62 y ss del Archivo "02Demanda.pdf", del expediente digital

<sup>19</sup> Fls 55 y ss del Archivo "02Demanda.pdf", del expediente digital

120)

INPEC CORPUS  
Procedimiento 11001-23-41-00014001-01  
Accionante: INDIRA MARIA SOTO NAVARRO

desde el 18 de diciembre de 2021 hasta el 17 de marzo de 2022 por "Mala conducta".

Adicionalmente, redujo la pena de la sentenciada en proporción de 7 meses y 23 días por estudio y negó el subrogado de libertad condicional, en razón a que ha sido valorada con mala conducta.

Posteriormente, por medio de auto del 9 de mayo de 2023<sup>19</sup> dicho Despacho redujo la pena de la señora INDIRA MARIA SOTO NAVARRO en proporción de 15 días por estudio y le negó la prisión domiciliaria, pues pese a cumplir "el factor cuantitativo que exige el artículo 38G de la Ley Penal (...) la sanción que en este expediente se ejecuta fue impuesta entre otras por "concierto para delinquir agravado", conducta que se encuentra expresamente enilada en el catálogo de delitos consagrado en el mismo canon que invoca el condenado", que exceptúa dicho beneficio cuando se ha sido condenada por el delito mencionado.

Así las cosas, en el caso resulta claro que no se configura una captura ilegal o prolongación ilegal o injustificada de la libertad que conlleve a que por medio del presente mecanismo constitucional se ordene la libertad, pues a la fecha de la presente providencia la accionante tiene detención intramural en cumplimiento a la condena de 66 meses de prisión que le fue impuesta por el JUZGADO CUARTO (4º) PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE CONOCIMIENTO DE BOGOTÁ mediante sentencia dictada el 27 de abril de 2022. Además, según la considerada por el Juzgado que ejecuta su condena en el Auto del 9 de mayo de 2023, solo ha descontado de la mencionada pena un total de 48 meses y 1 día.

Aunado a lo anterior, como se expuso anteriormente, la libertad condicional que solicita la accionante en el presente mecanismo constitucional ya fue objeto de pronunciamiento por el JUZGADO OCTAVO (8º) DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BOGOTÁ mediante autos del 24 de noviembre de 2022 y 8 de mayo de 2023, siendo negada por mala conducta.

Adicionalmente, mediante providencia del 9 de mayo del año en curso se negó a la accionante la prisión domiciliaria al haber sido condenada por la conducta de concierto para delinquir agravado, caso en el cual la Ley no contempla dicho beneficio. Contra dichas decisiones proceden los recursos de Ley, sin que se encuentre acreditado que aquella haya hecho uso de los mismos, pues según lo informado por el mencionado Juzgado no "existe petición pendiente de resolverse relativa con su libertad".

En consecuencia, se evidencia que las solicitudes presentadas por la accionante, orientadas a obtener subrogado de libertad condicional y prisión domiciliaria, han sido resueltas en el proceso penal y no puede pretender que

<sup>19</sup> Fls 72 y ss del Archivo "02Demanda.pdf", del expediente digital



el Juez constitucional reemplaza los mecanismos ordinarios establecidos por el legislador para la protección del derecho a la libertad y, mucho menos, que constituya el medio idóneo para controvertir todas las decisiones judiciales como si se tratara de una tercera instancia.

Asimismo, pueda interponer los recursos de Ley ante la negativa de otorgarse la libertad condicional o ante el desacuerdo en el conteo del tiempo en el que ha permanecido privada de la libertad.

En ese sentido, se negará la presente acción constitucional con fundamento en los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Penal y el H. Consejo de Estado mencionados en el acápite de fundamentos normativos y jurisprudenciales de esta providencia, pues la misma ha sido concebida como un medio de protección del debido proceso ante una actuación arbitraria, ya sea por captura ilegal o por prolongación ilícita de la libertad, o cuando existiendo una decisión judicial, esta constituye una verdadera vía de hecho, situaciones que no se acreditaron en el presente caso, por lo que no es procedente acudir a este mecanismo constitucional para obtener el beneficio de la libertad condicional, máxime que dicho aspecto ya fue resuelto por el Juez penal. En consecuencia, no es posible que el Juez constitucional desplace al Juez natural en las decisiones que le competen, valga decir, que no se observa en el presente asunto una situación particular que amerite la intervención del Juez Constitucional a efectos de garantizar la libertad de la accionante.

En mérito de lo expuesto, el Despacho, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

#### RESUELVE:

**PRIMERO. CONFIRMAR** la providencia dictada el 25 de mayo de 2023 por el Juzgado Cuarenta y Cinco (45) Administrativo de Bogotá D.C., que negó el presente mecanismo constitucional, formulado por la señora INDIRA MARÍA SOTO NAYARRO, de conformidad con las razones expuestas en esta providencia.

**SEGUNDO.** Por Secretaría. **NOTIFÍQUESE** esta decisión a las partes por el medio más expedito y eficaz, para lo cual se dejarán las constancias y anotaciones correspondientes.

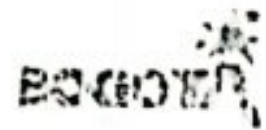
**TERCERO. SE ADVIERTE** que contra esta decisión no procede recurso alguno.

#### NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE  
BEATRIZ HELENA ESCOBAR ROJAS  
Magistrada

CONSTANCIA: La presente providencia no está sujeta a trámite de notificación de la información y trámite mediante el aplicativo SIAJAL, con el fin de garantizar la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, por virtud del artículo 196 del CPACA, modificado por el artículo 44 de la Ley 2093 de 2021.





SECRETARÍA  
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

Al contestar cto Radicado No. 20223320540712  
Fecha: 2022/06/21 11:49:57 AM  
Anexos: SIN ANEXOS Folios: 1  
Destinatario: INDIRA SOTO NAVARRO  
Radicador: SONIA RUIZ ORTEGA  
Asociado: 20223380347601



VS. CALIFICACIONES DE CONDUCTA

No. Acto	Fecha	Evaluación desde	Evaluación hasta	Calificación	Observaciones
801-0048	22/05/2022	15/03/2022	17/03/2022	Buena	
801-0071	23/07/2022	13/12/2021	17/03/2022	Buena	
801-016	21/01/2021	13/02/2021	17/12/2021	Mala	x 3 meses
801-0037	21/01/2021	13/03/2021	17/09/2021	Ejemplar	
801-0037	22/05/2021	15/03/2021	17/08/2021	Ejemplar	
801-0018	24/03/2021	13/12/2020	17/03/2021	Ejemplar	
801-0051	22/12/2020	12/09/2020	17/12/2020	Ejemplar	
801-0051	22/07/2021	12/06/2020	17/09/2020	Ejemplar	
801-0020	24/01/2020	15/03/2021	17/03/2020	Ejemplar	
801-0070	02/01/2020	13/12/2019	17/03/2020	Buena	
801-0116	20/12/2019	13/03/2019	17/12/2019	Buena	
801-0038	24/03/2019	13/03/2019	17/09/2019	Buena	

Lo anterior para su conocimiento.

Cordialmente,

GT. (ip) ADRIANA PATRICIA HERNÁNDEZ MARÍN  
Directora Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres  
SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA

Anexo: SIN ANEXOS Folios: 1  
Proyecto: "Forma Paz Oneja" Proyecto de Reinserción Social Juvenil  
Archivado en: Carpeta y nombre de la carpeta y el archivo documental

A: Celso 13457 82  
Fase 7 Tor 37/5583  
Código: 13457 82  
Módulo: 13457 82

COOR. 13457 82  
COOR. 13457 82  
COOR. 13457 82

COOR. 13457 82  
COOR. 13457 82  
COOR. 13457 82

BOGOTÁ



Por lo anterior, el Consejo de Disciplina adoptará las medidas tendientes a sancionar disciplinariamente a las señoras VALENTAS BORJA LAURA NATALY C.C. No 1.030.545.829, SOTO NAVARRO INDIRIA MARIA C.C. No 22.520.764, RAMIREZ GÓMEZ ANDREA STEFANIA C.C. No 1.010.038.302 y GALLANO FLOREZ YESSICA YOLIMA C.C. No 1.033.983.072, dando aplicación al PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD el cual responde a la idea de evitar una utilización desmedida de las sanciones que conllevan a un uso indiscriminado y/o extralimitado de una sanción, para ello se limita su uso que no es otra cosa que establecerlas e imponerlas exclusivamente para proteger bienes jurídicos valiosos y hacer cumplir el reglamento interno de la institución y demás normas concordantes.

## 5. FUNDAMENTACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE LA FALTA

En el Auto de Apertura de Investigación Disciplinaria de fecha julio 27 de 2020, se le endilgó a las disciplinadas, la conducta específica de "Asumir conductas dirigidas a menoscabar la seguridad y tranquilidad del centro de reclusión."

Consagrada en el artículo 121 de la Ley 65 de 1993, dentro de la clasificación de las faltas en leves y graves, y específicamente la señalada en el numeral veintidós:

- 24. Asumir conductas dirigidas a menoscabar la seguridad y tranquilidad del centro de reclusión.

(...)

Siendo de naturaleza GRAVE.

Teniendo en cuenta lo estipulado en el ARTÍCULO 123. SANCIONES. <Modificado por el artículo 78 de la Ley 1709 de 2014. El nuevo texto es el siguiente.>

(...)

Para las faltas graves, se aplicarán gradualmente atendiendo a los principios de proporcionalidad, necesidad de la sanción y los daños ocasionados con la comisión de la falta, una de las siguientes sanciones:

1. Suspensión hasta de diez visitas sucesivas.
2. Pérdida del derecho de redención de la pena de sesenta (60) a ciento veinte (120) días.

(...)

## 6. ANÁLISIS DE CULPABILIDAD


El Consejo de Disciplina de esta institución, es competente para conocer el presente asunto de conformidad con la Ley 65 de 1993, en concordancia con el Reglamento Interno de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres Resolución 1806 de 2011 y la Resolución 5817 de 1994, enfatizando los principios que rigen la presente actuación disciplinaria los cuales son Legalidad, Igualdad, Debido Proceso, teniendo en cuenta las reglas de la sana crítica para establecer la verdad de los hechos investigados de acuerdo a las normas disciplinarias existentes sin desconocimiento del DEBIDO PROCESO como principio jurídico procesal según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones legítimas frente al fallador, conforme a lo consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia.

"... El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio..."

Las faltas se deben clasificar a la luz de la Constitución Política y al artículo 127 de la Ley 65 de 1993, "En la calificación de la infracción disciplinaria deben tenerse en cuenta las circunstancias

737



 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>Secretaría de la Policía de Bogotá</small>	Procedimiento	de las Personas Privadas de la Libertad	Versión	1
	Documento	Auto Fallo de Primera Instancia	Fecha Aprobación	02/09/2019
			Fecha Vigencia	Página 2 de 9
			03/09/2019	

NAVARRO INDIRIA MARÍA C.C. No. 22.520.764, RAMIREZ GÓMEZ ANDREA STEFANIA C.C. No. 1.010.038.302 y GALEANO FLOREZ YESSICA

C.C. No. 1.033.683.072, por las conductas consagrada en el artículo 121 de la Ley 65 de 1993 consagra la clasificación de las faltas en leves y graves, para el caso sub examine, con la conducta presentada se enmarca dentro del catálogo de faltas graves y específicamente la señalada en los numerales veintidós y veinticuatro:

"... 22. Hacer uso, dañar con dolo o disponer abusivamente de los bienes de la institución..."

24. Asumir conductas dirigidas a menoscabar la seguridad y tranquilidad del centro de reclusión.

(...)

Dentro de las pruebas decretadas se ordenó escuchar en diligencia de descargos a las presuntas infractoras de la norma disciplinaria y practicar todas las diligencias pertinentes y conducentes para el esclarecimiento de los hechos materia de investigación.

### 3. ANÁLISIS DEL MATERIAL PROBATORIO

Con el objeto de dilucidar los hechos materia de investigación, se allegaron al expediente las diligencias que se relacionan a continuación:

1. Informe suscrito por la cabo ADRIANA PATRICIA GALAN OCHOA, radicado bajo el No. 20203340072333 de fecha veintitrés (23) de agosto de 2020, con visto bueno del Sargento HUMBERTO CHAPARRO MARÍN comandante de Compañía Colombia. (Folios 1y 2)
2. Auto de Apertura de Investigación Disciplinaria. (Folios 3 y 4)
3. Acta de Notificación Personal del Auto de apertura de Investigación Disciplinaria de fecha diecinueve (19) de junio de 2020 de la investigada PPL GALEANO FLOREZ YESSICA YOLIMA debidamente suscrita por los intervinientes. (Folio 5)
4. Acta de Notificación Personal del Auto de apertura de Investigación Disciplinaria de fecha diecinueve (19) de junio de 2020 de la investigada PPL VARGAS BORJA LAURA NATALY debidamente suscrita por los intervinientes. (Folio 6)
5. Acta de Notificación Personal del Auto de apertura de Investigación Disciplinaria de fecha diecinueve (19) de junio de 2020 de la investigada PPL SOTO NAVARRO INDIRIA MARÍA debidamente suscrita por los intervinientes. (Folio 7)
6. Acta de Notificación Personal del Auto de apertura de Investigación Disciplinaria de fecha diecinueve (19) de junio de 2020 de la investigada PPL RAMIREZ GÓMEZ ANDREA STEFANIA debidamente suscrita por los intervinientes. (Folio 8)
7. Diligencia de descargos practicada el veintiuno (21) de septiembre de 2020, presentada por la PPL SOTO NAVARRO INDIRIA. (Folio 12).
8. Acta 801-0039 del Consejo de Disciplina celebrado el veintisiete (27) de octubre de 2020. (Folio 13).
9. Diligencia de descargos practicada el quince (15) de diciembre de 2020, presentada por la PPL SOTO NAVARRO INDIRIA MARÍA. (Folio 12).
10. Diligencia de descargos practicada el quince (15) de diciembre de 2020, presentada por la PPL RAMIREZ GÓMEZ ANDREA STEFANIA. (Folio 15).
11. Diligencia de ampliación y ratificación de informe practicada el veintidós (22) de diciembre de 2020 por la cabo ADRIANA PATRICIA GALAN OCHOA. (Folio 16).
12. Oficio radicado bajo el No. 20213320042472 del veinte (20) de enero de 2021 con destino a SERVICONCEL (Folio 17).
13. Correo fechado el veinticuatro (24) de febrero de 2021 respuesta oficio numeral anterior. (Folio 18 y 19).
14. Diligencia de descargos practicada el veinte (20) de abril de 2020, presentada por la PPL GALEANO FLOREZ YESSICA YOLIMA C.C. No. 1.033.683.072. (Folio 22).



15. Impresión de la cartilla biográfica de la PPL RAMIREZ GÓMEZ ANDREA STEFANIA, del aplicativo SISPEC WEB. (Folio 23 y 24).
16. Impresión de la cartilla biográfica de la PPL GALEANO FLOREZ YEBBICA YOLIMA, del aplicativo SISPEC WEB. (Folio 25).
17. Impresión de la cartilla biográfica de la PPL SOTO NAVARRO INDIRIA MARIA, del aplicativo SISPEC WEB. (Folio 26 y 27).
18. Impresión de la cartilla biográfica de la PPL VARGAS BORJA LAURA NATALY, del aplicativo SISPEC WEB. (Folio 28).

Conforme a las reglas de la sana crítica probatoria, se procede a continuación a realizar la valoración razonada de las pruebas tenidas en cuenta para la decisión de fondo, así:

En atención a que el PPL SOTO NAVARRO INDIRIA MARIA, se notificó personalmente del auto de apertura de Investigación Disciplinaria y se recibieron descargos, en relación con los hechos génesis de la presente actuación disciplinaria, diligencia en la cual se lo colocó de presente la normatividad aplicable a la misma, los derechos que le asisten, y que la misma se encuentra libre de todo apremio y sin la gravedad de juramento, entre otras formalidades, dentro de los interrogantes que plantea el Despacho se le colocó de presente el informe que fue la base para la apertura de la investigación disciplinaria, y se lo solicita que manifieste que tiene que señalar sobre el informe, a lo que responde "(...) la cabo Adriana me está involucrando en algo que yo no hice, tendría que involucrar a todo el patio, yo sí grito, pero no hice nada, unas quemaron la caneca otras la cortina, a mí solo me vieron gritar, y acá no veo a ninguna de las personas que estaban involucradas, no veo a la que en verdad hizo esto. Yo la más marica acá y como se le ocurre a la cabo Adriana, yo estaba alrededor, incluso estaba en la mitad un palo de escoba y yo me cogí en la mano y ella viene a meterme en esta huevonada a mí. Que sea seria, hay unas que ya no fueron, yo estaba en el patio y las que quemaron o hicieron todo acá no están. No suministro nombres, para eso están las cámaras. (...)". (Folio 12).

Atendiendo la solicitud de presentarse ante los miembros del Consejo de Disciplina, se atendió la misma y en sesión de fecha veintisiete (27) de octubre de 2020, hizo presencia y luego de hacer lectura del informe base de la investigación ante los integrantes del Consejo de Disciplina señala que lo manifestado en diligencia de descargos es cierto, que la cabo ADRIANA la involucro y solicita se revisen las cámaras, reitera que quienes iniciaron el hecho no están siendo investigadas, el Sargento le pregunta que quienes participaron, a lo cual señala que revisen las cámaras, se le pregunto si ese día hubo un acto de indisciplina y respondió "sí". (Folio 13).

Por su parte la investigada PPL RAMIREZ GÓMEZ ANDREA STEFANIA en diligencia de descargos practicada el quince (15) de diciembre de 2020 manifestó: "la noche anterior nos encontrábamos más de una privada de la libertad escuchando radio uno, donde dice que en la cárcel distrital hay varios privados de la libertad con covid, entonces al otro día le preguntamos a la guardia que nos dijera la verdad sobre sobre los caso de covid en la cárcel, y la guardia ADRIANA nos dice que ella no nos puede dar esa información, entonces nosotras le dijimos que exigiáramos nos digan la verdad, ella nos manda a hacer el número y le exigimos que venga el director y ella nos dice que no es posible, entonces nosotras decimos que nosotras íbamos a hambre y ahí sucedió lo de la caneca, pero yo no la prendí, yo estuve presente en todo, no se quien la prendió, estuve acompañando la bulla pero no se quien la prendió." (Folio 14).

La PPL VARGAS BORJA LAURA NATALY rindió descargos el mismo quince (15) de diciembre de 2020 quien manifestó "ese día YESICA GALEANO quemó la caneca yo estaba observando luego la guardia y la saco y luego llegó el cabo Cruz y dijo que hiciéramos número y hablaremos con el que le presentáramos todas las dificultades y él se fue, y finalmente nos aclararon la situación. Solamente se dañó una caneca. No todas las que señala el informe participaron en la quema Andrea Martínez y yo solo observamos (...)" (Folio 15)

El veintidós (22) de diciembre de 2020 se recibió en diligencia de ampliación y ratificación de informe la versión de la señora cabo ADRIANA PATRICIA GALAN OCHOA quien afirmó: "(...) eso fue iniciando la pandemia, una privada de la libertad dice que escuchó una noticia por medio de comunicación

(20)  
(45)



... que a veces estababamos escuchando casos de COVID entonces yo llamo al Cabo BOTIA oficial de servicio y se le dice a la de derechos humanos y yo les digo que eso es mentira que para ese momento no había casos positivos y las manifestaban que exigían que no se les ocultara la verdad, se le solicita a una ciudadana de la libertad que ya no está ella no recuerdo el nombre, se reunieron y se les dijo que no habían casos y la otra ciudadana el pabellón a unas se les dio por incendiar las canecas de la basita incitando a las ciudadanas a que se quedaran en la Colombia y al América, en ese momento estaba encargado el Cabo CRUZ y él como jefe de servicio y él fue quien tomó el mando de la situación. La que inicio usó el VAWA y SGA y MARYURY ella comenzó con las exigencias yo la llamo y le dije que específicamente que quería saber y ella comenzó a hablar más duro y llamo a la hermana MARYURY y decían que yo la estaba mandando a calar yo les decía que la inconformidad me la hicieran saber y ellas gritaban, cuando ya fueron a varias del pabellón también gritando otras fueron las que quemaron las canecas, creo que fueron dos canecas y a eso es la prueba fundamental para determinar específicamente la responsabilidad. Las FF. que están en el informe si participaron de los hechos irregulares de disciplina. (...) (Folio 16).

8.11.2021  
Cruz  
(11/11/2021)

Mediante oficio radicado bajo el No. 20213320042472 del veinte (20) de enero de 2021 con destino a SERVICONCEL se solicitó el registro filmico correspondiente a la cámara de seguridad PTZ 5,6 y 7 del pabellón Esperanza correspondiente al día 22 de abril de 2020 sobre las 6:30 y 7:30 horas (Folio 17) el cual fue contestado informando que en los términos del anexo 2 especificaciones técnicas del servicio técnico a contratar las grabaciones debían ser garantizadas por tres meses, por tanto a la fecha no se contaba con la información requerida. (Folio 18).

Finalmente, el veinte (20) de abril del 2021 se le recibió diligencia de descargos a la PPL GALEANO FLOREZ YESSICA YOLIMA quien afirmó (...) yo me encontraba dentro del patio porque era en donde yo estaba asignada, todo el patio se reunió en el centro del mismo, yo en ningún momento encendí fuego, ni altere la disciplina solamente una explicación frente a los que estaba pasando en el país con la pandemia del COVID-19, pues no hablan suspendido las visitas y además se había rumorado de posibles caso de covid 19 en los patios de hombres, esa fue la razón por la cual estuve presente en esa manifestación pacífica, porque nadie nos decía nada, dejó claro que no prendí fuego a ninguna caneca, tampoco altere la disciplina del patio, pues la manifestación se realizó con todo el patio sin excepción alguna. (...) PREGUNTADO: cuál era la finalidad de generar fuego CONTESTO: las compañeras la ver que no nos prestaban atención con la manifestación pacífica vieron la necesidad de prender fuego para llamar la atención de las guardias, de esa manera fue la única forma de que nos brindaran la información que estamos necesitando, pero yo solo me encontraba entre la multitud gritando queremos la verdad. (...) (Folio 22)

#### 4. ANÁLISIS Y VALORACIÓN JURÍDICA DE LA CONDUCTA, DESCARGOS Y PRUEBAS

En lo relacionado con el análisis y la valoración jurídica de los argumentos de defensa planteados en diligencia de Descargos por parte del disciplinado, reseñados en el acápite anterior, el Consejo de Disciplina luego de determinar la conducta objeto de reproche que se encuentra acreditada probatoriamente, realizará análisis para abordar cada una de las categorías de estructuración de la responsabilidad.


El artículo 121 de la Ley 65 de 1993 consagra la clasificación de las faltas en leves y graves, para el caso sub examine, con la conducta presentada se enmarca dentro del catálogo de faltas graves y específicamente la señalada en el numeral veintidós, del catálogo de faltas Graves:

- 22. Hacer uso, dañar con dolo o disponer abusivamente de los bienes de la institución." (...)
- 24. Asumir conductas dirigidas a menoscabar la seguridad y tranquilidad del centro de reclusión

Respecto de la primera conducta reprochada, esto es, dañar con dolo los bienes de la institución, si bien es cierto está acreditado el suceso reportado en el informe visto a folio 1, esto es, la quema

102/76



	<b>Documento:</b>	<b>Libertad</b> <b>Auto Fallo de Primera Instancia</b>	<b>Versión:</b>	
			<b>Fecha Aprobación:</b>	02/09/201
			<b>Fecha Vigencia:</b>	03/09/2010
			<b>Página</b>	5 de 9

de una caneca de la basura, por cuanto todas las disciplinadas en sus respectivos descargos, así como la cabo ADRIANA PATRICIA GALAN OCHOA al unísono confirmaron el hecho, lo cierto es que ninguna de las pruebas legalmente practicadas en el proceso disciplinario administrativo acreditan específicamente que alguna de las disciplinadas incurrieron en esa actividad, lo anterior, pues ninguna en sus descargos se atribuyó el hecho, sumado a que en diligencia de ampliación y ratificación de informe la cabo ADRIANA PATRICIA GALAN OCHOA señaló a BENAVIDEZ GARZÓN MAIDA y MARYURY como las privadas de la libertad más incitadoras del desorden, sin embargo, no señaló concretamente a ninguna de las disciplinadas como la responsable de la quema de la caneca de basura, luego, y ante la falta de material probatorio, todas las disciplinadas serán absueltas del cargo dañar con dolo los bienes de la institución

No ocurre lo mismo respecto del segundo tipo disciplinario de que trata el auto de apertura, esto es, asumir conducta dirigida a menoscabar la tranquilidad del centro de reclusión, por cuanto, todas las disciplinadas afirmaron participar en la situación de que trata el informe objeto de este proceso disciplinario, de la siguiente manera.

La PPL SOTO NAVARRO INDIRIA MARÍA refirió: "La cabo Adriana me está involucrando en algo que yo no hice, tendría que involucrar a todo el patio, yo si grite, pero no hice nada, unas quemaron la caneca otras la cortina, a mí solo me vieron gritar, (...)" (Folio 12).

La PPL RAMIREZ GÓMEZ ANDREA STEFANIA manifestó: "(...) entonces nosotras decimos que nosotras íbamos a hambre y ahí sucedió lo de la caneca, pero yo no la prendí, yo estuve presente en todo, no se quien la prendió, estuve acompañando la bulla, pero no se quien la prendió." (folio 14).

La PPL VARGAS BORJA LAURA NATALY expreso: "(...) y nos rebotamos que porque había covid en la cárcel y nos alborotamos y luego llego el cabo CRUZ (...)" (Folio 15)

Finalmente, la PPL GALEANO FLOREZ YESSICA YOLIMA indico: "(...) PREGUNTADO: cuál era la finalidad de generar fuego. CONTESTO: las compañeras la ver que no nos prestaban atención con la manifestación pacífica vieron la necesidad de prender fuego para llamar la atención de las guardias, de esa manera fue la única forma de que nos brindaran la información que estamos necesitando, pero yo solo me encontraba entre la multitud gritando queremos la verdad. (...)" (Folio 22)

Las anteriores versiones, sumado a la afirmación de la cabo cabo ADRIANA PATRICIA GALAN OCHOA en la diligencia de ratificación y ampliación de informe "(...) Las PPL que están en el informe si participaron de los hechos irregulares de indisciplina (...)" (Folio 16), le permite a esta dependencia concluir que las disciplinadas participaron en los eventos que finalmente desembocaron en los desórdenes del veintidos (22) de abril de 2020 aproximadamente a las 7:00 horas, incluso con la quema de la mentada caneca de basura que aunque como ya se dijo no fue ejecutada por ninguna de las investigadas, si fue consecuencia de la indisciplina presentada por varias internas incluyendo las disciplinadas

Y es que la conducta que se reprocha no es la solicitud de información que estaban realizando las internas respecto de la pandemia del covid-19, la cual es por demás legítima como cualquier otra solicitud de información que presente cualquier persona privada de la libertad, es la manera exacerbada en la cual se exigió la información, incitando a las demás personas privadas de la libertad a levantar la voz, incluso a gritar, lo cual terminó en el desorden ya descrito con anterioridad, son esas actuaciones de las investigadas las que menoscabó la tranquilidad del pabellón Esperanza de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres

Por lo anterior, el Consejo de Disciplina evidencia que la conducta en la cual incurrió las PPL va en contravía de la Ley, el orden interno, la disciplina y convivencia que debe existir en una institución carcelaria, determinándose que las disciplinadas son responsables de infringir la Ley y el reglamento interno del centro carcelario, contrariando la finalidad de la pena y la medida de seguridad que se fundamenta en la resocialización y rehabilitación del personal de internos

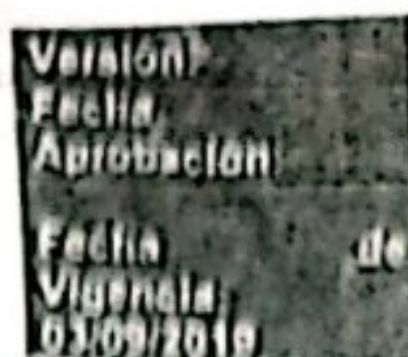
77





Libertad

Auto Fallo de Primera Instancia



12/09/2019

Página 1 de 2

que la agraven o atenúen, las relativas a la modalidad del hecho, el daño producido, el grado del estado anímico del interno, su buena conducta anterior en el establecimiento, su respeto por el orden y la disciplina dentro del mismo."

## 7. RAZONES DE LA SANCIÓN

Conforme a lo expuesto junto con las pruebas allegadas se determina que las disciplinadas son responsables de infringir la Ley y el reglamento interno del Centro Carcelario, al asumir la conducta antes descrita contrariando la finalidad de la pena y la medida de seguridad que se fundamenta en la resocialización y rehabilitación del personal de internos, por tanto, el Consejo de Disciplina adoptará las medidas tendientes a sancionar disciplinariamente a las investigadas.

En aplicación al artículo 3° de la resolución No 5817 de 1994, la sanción disciplinaria tiene función preventiva y correctiva, para evitar que, por acciones u omisiones, los internos menoscaben la disciplina, el respeto a funcionarios y se ponga en peligro la resocialización como fundamento de la reinserción a la sociedad de los mismos. Se trata de encausar las conductas, garantizar la efectividad de los principios y fines previstos en la Constitución, la Ley / los Tratados Internacionales.

Por ello la sanción, cumplirá en el presente caso una función correctiva y a su vez se insta a las investigadas para que no vuelva a incurrir en esta clase de conductas.

## 8. CRITERIOS TENIDOS EN CUENTA PARA LA GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN O LA DECISIÓN DE EXONERACIÓN

Con fundamento en la normatividad aplicable, que establece los criterios para la dosificar la sanción y en el artículo 123 de la ley 65 de 1993 establece las sanciones disciplinarias, de la siguiente manera: "(...) Para las fallas graves, se aplicarán gradualmente atendiendo a los principios de proporcionalidad, necesidad de la sanción y los daños ocasionados con la comisión de la falta, una de las siguientes sanciones:

1. Suspensión hasta de diez visitas sucesivas
2. Pérdida del derecho de redención de la pena de sesenta (60) a ciento veinte (120) días

Ahora bien, en relación con la aplicación de las sanciones el operador disciplinario debe tener en cuenta:

- las circunstancias que la agraven o atenúen,
- las relativas a la modalidad del hecho,
- al daño producido,
- al grado del estado anímico del interno,
- su buena conducta anterior en el establecimiento,
- su respeto por el orden y disciplina dentro del mismo y
- las situaciones análogas,

Atendiendo el principio de proporcionalidad y analizados en contexto los distintos criterios y verificados ante la realidad fáctica y probatoria, la situación refrenda en precedencia estos aspectos permiten determinar el término de la sanción a imponer a las señoras VARGAS BORJA LAURA NATALY C.C. No 1030545829, SOTO NAVARRO INDIRIA MARIA C.C. No 22520764, RAMIREZ GÓMEZ ANDREA STEFANIA C.C. No 1010038302 / GALEANO FLOREZ YESSICA YOLIMA C.C. No 1033683072, identificadas como aparece al pie de sus respectivos nombre, se determina por parte del Consejo de Disciplina que la sanción a imponer es la pérdida del derecho de redención en Setenta (70) días.


En mérito de lo expuesto, los integrantes del Consejo de Disciplina de la Cárcel Distrital De Varones Y Anexo De Mujeres, en ejercicio de las facultades legales y reglamentarias.

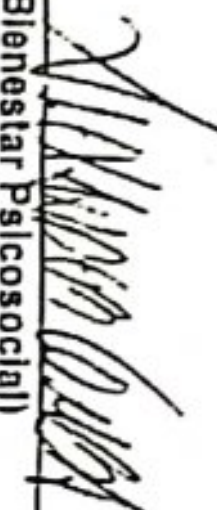
(52) (78)








 ALCALDIA MAYOR DE BUZO, OCAÑA, CUNDINAMARCA	Documento	Año Fallo de Primera Instancia	Fecha Aprobación: Fecha Vigencia: 03/09/2019	12.11.13 Página 3 de 3
---	-----------	-----------------------------------	--	---------------------------

  
(Bienestar Psicosocial)  
Proyecto Juan Camilo Turiansa Mojica -CONVIVIA MORA DISCIPLINADA

  
(Delegado Personería Distrital)

(80)



CARCEL DISTRITAL DE VARONES Y ANEXO DE MUJERES  
Oficina de Asuntos Disciplinarios

Expediente Disciplinario	069-2020
Nombre quien rinde descargos	INDIRA SOTO NAVARRO
Identificación	C.C. 22520764
Fecha de hechos	ABRIL 22-2020
Conducta	HACER USO, DAÑAR CON DOLO, O DISPONER ABUSIVAMENTE DE LOS BIENES DE LA INSTITUCION.
Asunto	DILIGENCIA DE DESCARGOS

En la ciudad de Bogotá, D.C., siendo las 10:19 AM, del día miércoles 21 de septiembre de 2020 concurrió al Comando de la Carcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, debidamente enterado de la presente diligencia, la PPL INDIRA SOTO NAVARRO, con el fin de adelantar diligencia de descargos, dentro de la investigación disciplinaria que se adelanta en su contra radicada bajo el No 147-2019. Acto seguido se le hizo conocer el derecho que tiene a ser asistido (a) por un abogado y además se le informo que esta libre de apremio y juramento. Se le ponen de presente el contenido del Artículo 33 de la Constitución Política de Colombia que prevé: "Artículo 33. Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, o primero civil", así mismo se le pone de presente el inciso primero del artículo 134 de la ley 65 de 1993 el cual establece: "ARTÍCULO 134. DEBIDO PROCESO. Corresponde al director del establecimiento recibir el informe de la presunta falta cometida por el interno. El director lo pasará al subdirector si lo hubiere o caso contrario, lo asumirá directamente para la verificación de la falta denunciada, debiéndose dar en declaración de descargos al interno acusado. Por decisión del instructor o a solicitud del presunto infractor se practicarán las pruebas pertinentes"; el despacho le pregunta a la PPL si es su deseo y voluntad rendir esta diligencia a lo cual manifiesta: Si. Se procede entonces a formular el siguiente interrogatorio a la PPL. **PREGUNTADO** Sirvase decir sus nombres y apellidos completos, documento de identificación, edad, lugar y fecha de nacimiento, residencia, estado civil. **CONTESTÓ**, Mi nombre completo es INDIRA SOTO NAVARRO, con cédula de ciudadanía número 22520764, edad 40, años, nací en Valledupar Cesar, el día 31 de marzo 1988, de estado civil unión libre, grado de instrucción noveno, recibe visitas si, se encuentra en alguno de los programas de redención no. En caso afirmativo en cual y desde que fecha. Acondicionamiento físico.

**PREGUNTADO**, Manifieste si va a nombrar defensor para que lo represente en las presentes diligencias. **CONTESTO**, NO.

**PREGUNTADO**, Obra en el presente expediente disciplinario a folios 1 y 2 y siguiente oficio radicado bajo el No. 20203340072333 de fecha ABRIL 23 de 2019, del cual se hace lectura en este momento. Una vez enterado del mismo, que tiene que manifestar al respecto. **CONTESTÓ**,

la cabo Adriana me está involucrando en algo que yo no hice, tendría que involucrar a todo el patio, yo si grite, pero no hice nada, unas quemaron la caneca otras la cortina, a mi solo me vieron gritar, y acá no veo a ninguna de las personas que estaba involucradas, no veo a la que en verdad hizo esto, yo la mas manca acá y como se le ocurre a la cabo Adriana, yo estaba alrededor, incluso estaba en la mitad un palo de escoba y yo lo cogí en la mano y ella viene a meterme en esta huevonada a mi. Que sea seria, hay unas que ya se fueron, yo estaba en el patio y las que quemaron e hicieron todo acá no están, no suministro los nombres, para eso están las cámaras.


Se deja constancia que el Despacho pregunta al PPL si es su deseo y voluntad responder algunos interrogantes sobre los hechos que se investigan. **CONTESTO**, si. **PREGUNTADO** al momento de su ingreso a la carcel de varones y anexo de mujeres le dieron a conocer el reglamento interno. **CONTESTO** yo misma fui la que lo pedí, por medio de una compañera es una carpeta blanca que yo lei. **PREGUNTO** en el momento en que se presentó el hecho señalado en el informe tenía usted en su poder algún elemento, en caso afirmativo describa el

SECRETARIA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA



ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.



 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA</small>	<b>Proceso:</b>	Trámite Jurídico a la Situación de las Personas Privadas de la Libertad	<b>Código:</b>	F-TJ-561
	<b>Documento:</b>	Notificación Resuelve Recurso	<b>Veración:</b>	2
			<b>Fecha Aprobación:</b>	02/09/2019
			<b>Fecha Vigencia:</b> 20/08/2020	Página 1 de 1

### NOTIFICACION DEL RECURSO DE REPOSICIÓN

NOTIFICACIÓN DEL AUTO DEL DIEZ (10) DE AGOSTO DEL AÑO 2021 MEDIANTE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO.  
 INVESTIGACION DISCIPLINARIA EXPEDIENTE No. 069-2020.

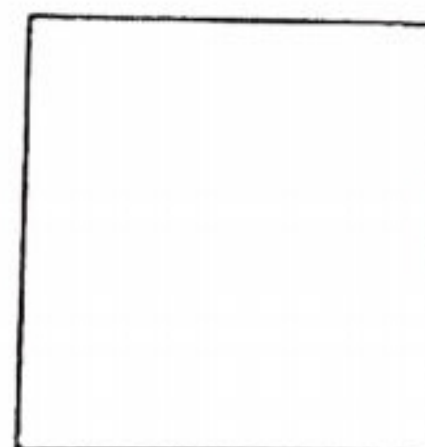
En (ciudad) \_\_\_\_\_, A LOS \_\_\_\_\_ DÍAS, DEL MES DE \_\_\_\_\_ DEL AÑO \_\_\_\_\_, SE NOTIFICA A LA PERSONA PRIVADA DE LA LIBERTAD **SOTO NAVARRO INDIRIA MARÍA** CON CEDULA DE CIUDADANÍA NUMERO 22.520.764 Y T.D. NUMERO 801026087, EL CONTENIDO DEL DEL DIEZ (10) DE AGOSTO DEL AÑO 2021 MEDIANTE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN, CONFORME A LO PREVISTO EN LOS ARTICULOS 66 Y 67 DE LA LEY 1437 DE 2011 (CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO), HACIÉNDOLE SABER QUE CONTRA EL PRESENTE ACTO ADMINISTRATIVO NO PROCEDE RECURSO ALGUNO.

**EL NOTIFICADO:**

**NOMBRE:** \_\_\_\_\_

**CEDULA:** \_\_\_\_\_

**FIRMA:** \_\_\_\_\_



Huella Índice Derecho

**EL NOTIFICADOR:** \_\_\_\_\_

*(Handwritten signature and date 05/08/21)*



mismo CONTESTO yo recogí un palo que estaba tirado antes de que alguien más lo cogiera  
PREGUNTADO que personas intervinieron en los hechos que acá se investigan CONTESTADO  
la guardia PREGUNTADO sirvase decir que motivo prendieron fuego a las canecas de la basura  
CONTESTADO estábamos nosotros pensando en nuestra salud el covid, escuchábamos en la  
radio y queríamos saber la verdad, hablan personas contagiadas que no nos hablan informado.  
solo nos podían que nos dijeran y es la salud de nosotras PREGUNTADO de quien fue la idea  
de prender fuego a la caneca CONTESTO no sé. PREGUNTADO según el informe se  
presentaron a las 7 de la mañana, ya se hablan escuchado comentarios de hacerlo  
CONTESTADO unas compañeras si estaban diciendo, eso fue de pronto PREGUNTADO alguno  
tuvo que ser remitido al área de salud CONTESTO ese día no se llevó a nadie que yo me  
acuerde. nadie le pego a nadie, no fue necesario. El cabo cruz hablo con todos y ya, eso fue solo  
una gritería y ya no pasó nada. PREGUNTADO finalmente obtuvieron la información que  
requerían. CONTESTO ese mismo día no, pero él se comprometió en traernos la información, el  
cabo fue muy conciliador, nos dijo que no nos preocupáramos que iba a subir para decirnos muy  
bien las cosas y ya PREGUNTADO con anterioridad a los hechos habían solicitado información  
sobre el tema CONTESTO no, todo fue un rumor que se dio por lo que escuchamos en la radio.  
PREGUNTADO qué elementos tuvieron daño contestado una sola caneca nada más  
PREGUNTADO desea usted ser citada y escuchada ante el consejo de disciplina para exponer  
este caso. CONTESTO sí, claro. PREGUNTADO. Indique si desea agregar, corregir o enmendar  
algo a la presente diligencia. CONTESTO. no

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por los que en ella  
intervinieron, una vez leída y aprobada el acta, siendo las 10:48 am.

#### QUIEN RECIBE LA DILIGENCIA

INDIRA SOTO NAVARRO  
Quien Rinde Descargos

Huella Índice Derecho PPL

DIANA PAOLA PARDO  
Abogada oficina Disciplinario

(34)  
(82)



**AUTO RESUELVE RECURSO DE REPOSICION No. 069-2020**

Bogotá, D.C., 10 AGO 2021

<b>Radicación Recurso:</b>	20213360355851
<b>Fecha:</b>	VEINTISEIS (26) DE JULIO DE 2021
<b>Investigados:</b>	SOTO NAVARRO INDIRIA MARIA Y OTRAS
<b>Informe cabo:</b>	C.C. No. 22 520 764 ADRIANA PATRICIA GALAN OCHOA

La Privada de la Libertad SOTO NAVARRO INDIRIA MARIA, quien se notificó el día veintidós (22) de julio de 2021, del fallo proferido en primera instancia fallo sancionatorio No. 183 del ocho (08) de julio de 2021, a través de documento radicado el día veintiseis (26) de julio de 2021, interpone recurso de reposición y en subsidio apelación, contra la decisión proferida por el Consejo de Disciplina dentro de la Investigación Disciplinaria No. 069-2020, en la que se sancionó con la pérdida del derecho de redención de setenta (70) días, el recurso lo argumenta de la siguiente manera

(...)  
No estoy de acuerdo en tal fallo ya que no se tuvo en cuenta las cámaras, ni al testimonio de la compañera Laura Nataly Vargas Borda, la cual menciona directamente a la implicada de los hechos, tampoco tuvieron en cuenta mi buena conducta, ni mi versión de los hechos en la cual manifiesto, que expreso diciendo que quería saber la verdad en forma pacífica, en un momento de preocupación a la gravedad de la situación que se estaba presentando como bien sabemos la enfermedad del covid-19 dentro del cuerpo de custodia y algunos privados de la libertad en los diferentes pabellones dentro de la cárcel Distrital ya que temíamos por nuestra salud en ningún momento incurro incite al acto de indisciplina, soy libre de expresar lo que siento y pienso y mucho más si me encuentro en riesgo mi salud, sobre todo cuando pertenezco a población vulnerable, agradezco se tenga en cuenta mi disciplina en este lugar, antes y después de los hechos en el tiempo que llevo en este lugar y sea revisada nuevamente mi situación, quedo atenta gracias.  
(...)

Se procede a realizar pronunciamiento respecto de los motivos de inconformidad de la siguiente manera.

**1. Respecto que no se tuvo en cuenta las cámaras**


Al respecto basta decir que las pruebas recaudadas dentro del proceso administrativo disciplinario se consideran suficientes para decidir el fondo del asunto, máxime que como se especifica en el acto administrativo atacado se realizaron las gestiones pertinentes a fin de recaudar la prueba de la referencia, sin que se lograra, recuérdese que mediante oficio radicado bajo el No. 20213320042472 del veinte (20) de enero de 2021 con destino a SERVICONCEL se solicitó el registro filmico correspondiente a la cámara de seguridad PTZ 5.6 y 7 del pabellón Esperanza correspondiente al día 22 de abril de 2020 sobre las 6:30 y 7:30 horas (Folio 17) el cual fue contestado informando que en los términos del anexo 2 especificaciones técnicas del servicio técnico a contratar las grabaciones debían ser garantizadas por tres meses, por tanto a la fecha no se contaba con la información requerida. (Folio 18)

**2. Respecto que no se tuvo en cuenta el testimonio de la señora Laura Nataly Vargas Borda**

Al respecto se señala que, si se valoró las manifestaciones de la también disciplinada en este asunto señor PPL LAURA NATALY VARGAS BORDA, no obstante, se tuvo como acreditada la consumación de la conducta disciplinaria, principalmente por la aceptación en diligencia de descargos fechada el veintiuno (21) de septiembre de 2020 de su participación en los hechos investigados así.

(36) (84)



 <b>ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>Secretaría de Planeación y Desarrollo Urbano</small>	Procedimiento	Trámite Jurídico a la Situación de las Personas Privadas de la Libertad	Código	1-1-1-550
	Documentos	Auto Resuelve Recurso de Reposición	Versión	1
			Fecha Aprobación	02/09/2019
			Fecha de Vigencia	01/09/2019
Página 2 de 3				

La cabo Adriana me está involucrando en algo que yo no hice, tendría que involucrar a todo el patio, yo sé que gritó pero no hice nada, unas quemaron la caneca otras la cortina, a mí solo me vieron gritar, y acá no veo a ninguna de las personas que estaban involucradas, no veo a la que en verdad hizo esto. Yo la más manica acá y como se lo ocurre a la cabo Adriana, yo estaba alrededor, incluso estaba en la mitad un palo de escoba y yo lo cogí en la mano y ella viene a meterme en esta huevonada a mí. Que sea seria, hay unas que ya se fueron, yo estaba en el patio y las que quemaron o hicieron todo acá no están. No suministro nombres, para eso están las cámaras (...). (Folio 12).

Adicionalmente se contó con la versión de la cabo cabo ADRIANA PATRICIA GALAN OCHOA en la diligencia de ratificación y ampliación de informe "(...) Las PPL que están en el informe si participaron de los hechos irregulares de indisciplina. (...)" (Folio 16)

### 3. Respecto de las justificaciones ofrecidas por la disciplinada y el derecho de expresión

Tal como se señaló en el fallo, no son atendibles las justificaciones de la disciplinada para incurrir en la conducta reprochada, pues se itera, es legítima cualquier solicitud, siempre y cuando sea respetuosa, mas no incurrir en vías de hecho, tales como gritar, lo cual acepto expresamente la recurrente, ahora bien, respecto del derecho de expresión, el mismo no tiene el alcance que le quiere dar la señora SOTO NAVARRO INDIRIA MARÍA, este es, justificar la indisciplina, el irrespeto y el desorden dentro de la institución.

### 4. Respecto de la disciplina de la señora SOTO NAVARRO INDIRIA MARÍA antes y después de los hechos.

Tenga en cuenta la disciplinada, que la sanción impuesta es ligeramente superior al mínimo establecido en la norma aplicable, es decir sesenta (60) días de pérdida de derecho de redención, y también drásticamente inferior a la máxima, es decir, ciento veinte (120) días de pérdida de derecho de redención, luego, ello obedeció precisamente a la conducta de la disciplinada, pues de lo contrario, la sanción hubiera sido ampliamente superior dada la gravedad de los hechos acontecidos el veintidós (22) de abril de 2020 en el pabellón esperanza.

Para este Consejo de Disciplina, no es viable acceder a la solicitud de la persona privada de la libertad sancionada.

Finalmente, el Consejo de Disciplina de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres, confirma en toda y cada una de sus partes la decisión proferida mediante el fallo sancionatorio No 183 del ocho (08) de julio de 2021, mediante la cual se sanciona disciplinariamente con la pérdida del derecho de redención de setenta (70) días y;

## RESUELVE

**PRIMERO:** No reponer la decisión proferida mediante el fallo sancionatorio No 183 del ocho (08) de julio de 2021, por medio de la cual el Consejo de Disciplina Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres, impuso sanción disciplinaria, con fundamento en lo analizado y expuesto en la parte motiva.

**SEGUNDO:** En consecuencia, Confirmar, la sanción impuesta consistente en pérdida del derecho de redención de setenta (70) días.

**TERCERO.** Notificar personalmente a la Privado de la Libertad recurrente de la presente decisión, advirtiéndole que contra la misma no procede recurso alguno y que se correrá traslado a segunda instancia para lo de su competencia.



NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

7/59  
(Cuerpo de Custodia y Vigilancia)

[Signature]  
(Jurídica)

[Signature]  
(Atención Integral)

[Signature]  
(Delegado Personería Distrital)

Proveído Juan Carlos Turrado Méndez -Abogado Contraloría General de la Nación-

(86)  
1-38





SECRETARÍA DE  
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

El contenido que acompaña los 20223360436231  
Fecha: 2022-08-11 11:04:17  
Dirección: SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA  
Destinatario: JUZGADO 8 DE EJECUCIÓN DE PENAS  
Remisor: DINA GOMEZ MEJIA  
Asunto: 20223360436231

Bogotá, D.C. 11 de agosto de 2022

Oficio 1540-22-2022

Señor

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS DE BOGOTÁ D.C.  
CALLE 11 NO. 9 A 24 EDIFICIO KAYSER  
BOGOTÁ D.C. (CUNDINAMARCA - REPÚBLICA DE COLOMBIA)  
[ventanillaquepmibta@cedonjzamaljudicial.gov.co](mailto:ventanillaquepmibta@cedonjzamaljudicial.gov.co)


Asunto: DOCUMENTOS PARA REDENCIÓN DE PENA  
Condenado: SOTO NAVARRO INDIRA MARIA  
Proceso: 11001600000020190257100  
Delitos: 1. Concierto para delinquir Agravado 2. Tráfico fabricación o porte de estupefacientes Agravado  
RI: 20223360436231

Cordial saludo,

En atención a la petición dirigida a este Establecimiento Carcelario, por la persona privada de la libertad SOTO NAVARRO INDIRA MARIA a través de la cual se solicita los certificados de actividad TEE remito para los trámites pertinentes ante la autoridad correspondiente en esa ciudad, los siguientes documentos:

Dos (2) copias de la Cartilla biográfica del privado de la libertad  
Certificado de cómputos TEE N° 24891  
Certificado de conducta N° 658

Cordialmente,

  
CT (rp) ADRIANA PATRICIA HERNANDEZ MARÍN  
DIRECTORA CARCEL DISTRITAL DE VARONES Y ANEXO DE MUJERES  
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA

Anexo: Lo enunciado  
C.C. Privado de la libertad - Certificado de cómputos (1 Folio)  
Pato Esperanza

Proyecto: María Paula Mendel - Jueza  
Revisó: Dina Gómez / Abogada contratista área de computos  
Revisó: Sonia Ruiz Ortega - Asesora de Dirección

Av. Calle 26 # 57-83  
Tone 7 Tel. 3779595  
Codigo Postal: 111321  
[www.sq.gov.co](http://www.sq.gov.co)

>CCR COMPAÑA  
CERTIFICADA  
CERTIFICADO DE ACTIVIDAD

>CCR COMPAÑA  
CERTIFICADA  
CERTIFICADO DE ACTIVIDAD

BOGOTÁ

(2022-08-11)

Powered by  CamScanner

Powered by  CamScanner

Powered by  CamScanner

Powered by  CamScanner





INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC -  
CARCEL DISTRITAL DE VARONES Y ANEXO DE MUJERES  
CERTIFICADO DE COMPUTOS POR TRABAJO Y/O ESTUDIO

11/08/2022 02:02 PM  
Page 1 of 1

N° 024891

La Dirección del establecimiento en cumplimiento de los artículos 81 y 96 de la Ley 65 de 1993, Código Penitenciario y Carcelario, y bajo la gravedad de juramento

CERTIFICA

Que revisadas las planillas de registro y control de trabajo y/o estudio, entre 01/06/2022 y 29/07/2022 el interno **SAO NAVARRO INDIKA MARIA** con T.D. número 801026087 e identificado con cédula de ciudadanía número 92520764 de BARRANQUILLA ATLANTICO, figura con el siguiente cómputo de estudio y/o trabajo que a continuación se relaciona:

TRABAJO		ESTUDIO	ENSEÑANZA
Año Mes	Horas Actividad	Horas Actividad	Horas Actividad
2022 06		100 CURSO MUNDO FISICO Y PSIC. INTERFAMILIAR	
2022 07		54 CURSO MUNDO FISICO Y PSIC. INTERFAMILIAR	
		204	

EVALUACIÓN DE TRABAJO, ESTUDIO Y ENSEÑANZA

Analizando los criterios de calidad, intensidad y superación de la ocupación del interno en mención, la Junta de Evaluación de Trabajo, Estudio y Enseñanza, lo evaluó de la manera que se relaciona a continuación:

Acta	Fecha	Orden	Descripción de la labor	Fecha inicial	Fecha final	Calificación
04	01/07/2022	8720001442	PROGRAMAS LITERARIOS, DEPORTIVOS Y ARTÍSTICOS	01/06/2022	30/06/2022	Excelente
05	01/07/2022	8720001442	PROGRAMAS LITERARIOS, DEPORTIVOS Y ARTÍSTICOS	01/07/2022	31/07/2022	Excelente

En constancia de lo anterior se firma en BOGOTÁ D.C. a los Once (11) días del mes de Agosto de Dos Mil Veintidos (2022)

OT (RA) ALEXANDER PATRICIA HERNANDEZ MARIN  
DIRECTORA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO



Requisitos  
Credenciales  
Identificación  
Fotografía

Defensa  
Decisión  
Fenología  
Normatividad

11001600000020190257100 (NI 1999)  
Indira María Soto Navarro  
22 570 764

Juzgado 4º Penal del Circuito Especializado de Conocimiento de  
Bogotá  
Concierto para delinquir agravado y tráfico de estupefacientes  
Avoca conocimiento, niega libertad condicional  
Reclusión de Mujeres el Buen Pastor  
Ley 906 de 2004

AUTO NO. 964

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



JUZGADO OCTAVO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE  
SEGURIDAD DE BOGOTÁ

Bogotá, D. C., siete (7) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

ASUNTO

Se pronuncia el despacho en torno a la solicitud de libertad condicional formulada por la condenada **INDIRA MARÍA SOTO NAVARRO**, quien se encuentra privada de la libertad en la Reclusión de Mujeres de Bogotá *El Buen Pastor*.

ANTECEDENTES

Este despacho ejecuta la pena de sesenta y seis (66) meses de prisión con el pago de la multa equivalente a mil ochocientos ochenta y dos punto sesenta y siete (1882,67) salarios mínimos mensuales legales vigentes que, por el delito de concierto para delinquir agravado y tráfico de estupefacientes, impuso a **INDIRA MARÍA SOTO NAVARRO** el Juzgado 4º Penal del Circuito Especializado de Conocimiento de Bogotá en sentencia de 27 de abril de 2022.

Por cuenta de esta actuación, la prenombrada condenada viene privada de la libertad desde el 12 de junio de 2019 sin que a su favor se hubiere reconocida retención de pena alguna.

LA SOLICITUD

**SOTO NAVARRO** remitió un escrito vía correo electrónico por medio del cual deprecó la concesión de la libertad condicional, donde asegura

11001600000020190257100 (NI 1999)

cumplir todos y cada uno de los requisitos contemplados en el artículo 64 del Código Penal.

CONSIDERACIONES

1º Avoca conocimiento.

Visto el reparto que realizó el Centro de Servicios Administrativos de esta especialidad, se dispone asumir el conocimiento de la presente ejecución de pena de conformidad con los artículos 38 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004) y 51 de la Ley 65 de 1993.

2º De la libertad condicional.

La libertad condicional es un mecanismo sustitutivo de la pena de prisión, que se creó como instrumento de resocialización y de reinserción social del individuo, cuyo objeto está encaminado a brindar al condenado la oportunidad de que, en su caso y bajo ciertas condiciones en su liberación al tiempo de prisión y en la conducta presentada en dicho lapso, se pueda dejar de ejecutar la condena, primero a manera de prueba durante un tiempo determinado (el que faltare para el cumplimiento de la condena) y luego de forma definitiva si lo exigido se cumple.

El artículo 471 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), impone al interesado en el suceso punitivo la carga de adjuntar con la solicitud la resolución favorable expedida por el Consejo de Disciplina o, en su defecto, por el director del establecimiento penitenciario, copia de la cartilla biográfica debidamente actualizada y de los demás documentos que acrediten las exigencias previstas en el Código Penal, requisitos estos que se erigen como presupuesto de procesabilidad para posibilitar el estudio del subrogado.

A su turno el artículo 30 de la Ley 1709 de 2014, que modificó el artículo 64 del Código Penal, establece los requisitos sustanciales básicos para la concesión del mencionado subrogado, esto es, que el sentenciado haya descontado mínimo las tres quintas (3/5) partes de la pena que se le impuso y reparado a la víctima de que se ha denominado *(factor objetivo)* y que de la buena conducta durante el sustrato, así como de la valoración de la conducta punible objeto de reproche, el Juez pueda colegir que no existe necesidad de proseguir el tratamiento penitenciario *(factor subjetivo)* y, finalmente, que se acredite el arraigo familiar y social del penado.

En el asunto objeto de análisis, en primer lugar se aprecia que no existen en el cartapacio los soportes documentales a que hace referencia el primer presupuesto en mención (procesabilidad), los cuales

11001600000020190257100 (NI 1999)



Señor... por el... de...

Se... de... de...

Se... de... de...

Se... de... de...

	Blanco	Rojo
2010	10	10
2011	10	10
2012	10	10
2013	10	10
2014	10	10
2015	10	10
2016	10	10
2017	10	10
2018	10	10
2019	10	10
2020	10	10
2021	10	10
2022	10	10
2023	10	10
2024	10	10
2025	10	10
2026	10	10
2027	10	10
2028	10	10
2029	10	10
2030	10	10
2031	10	10
2032	10	10
2033	10	10
2034	10	10
2035	10	10
2036	10	10
2037	10	10
2038	10	10
2039	10	10
2040	10	10
2041	10	10
2042	10	10
2043	10	10
2044	10	10
2045	10	10
2046	10	10
2047	10	10
2048	10	10
2049	10	10
2050	10	10
2051	10	10
2052	10	10
2053	10	10
2054	10	10
2055	10	10
2056	10	10
2057	10	10
2058	10	10
2059	10	10
2060	10	10
2061	10	10
2062	10	10
2063	10	10
2064	10	10
2065	10	10
2066	10	10
2067	10	10
2068	10	10
2069	10	10
2070	10	10
2071	10	10
2072	10	10
2073	10	10
2074	10	10
2075	10	10
2076	10	10
2077	10	10
2078	10	10
2079	10	10
2080	10	10
2081	10	10
2082	10	10
2083	10	10
2084	10	10
2085	10	10
2086	10	10
2087	10	10
2088	10	10
2089	10	10
2090	10	10
2091	10	10
2092	10	10
2093	10	10
2094	10	10
2095	10	10
2096	10	10
2097	10	10
2098	10	10
2099	10	10
2100	10	10

Se... de... de...

Se... de... de...

Se... de... de...

Se... de... de...

En vista de lo expuesto, el JUZGADO OCTAVO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y RECLUSIÓN DE SEGURIDAD DE BOGOTÁ

# RESUELVE:

PRIMERO: ASUMIR el cumplimiento de la ejecución de la condena de...

SEGUNDO: NO CONCEDER la libertad condicional a INDIRA MARÍA SOTO NAVARRO de conformidad con lo brevemente anotado.

TERCERO: Por el Centro de Servicios Administrativos REQUIÉRASE a la dirección de la institución de Migración de Bogotá...

CUARTO: ENVIAR a que de esta determinación a la referida institución...

QUINTO: Contra esta providencia proceden los recursos de ley.

# NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

Claudia María Marcela Jiménez Bolañilla  
JUEZ

42



Radicación  
Condenado  
Identificación  
Fallador  
Delitos  
Decisión  
Reclusión  
Normatividad

11001600000020190257100 (NI 1999)

Indira María Soto Navarro

22.520.764

Juzgado 4º Penal del Circuito Especializado de Conocimiento de Bogotá

Concierto para delinquir agravado y tráfico de estupefacientes

Redime pena, niega prisión domiciliaria y ofrece respuesta de tutela

Reclusión de Mujeres el Buen Pastor

Ley 906 de 2004

459.01.23

AUTO No.

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



JUZGADO OCTAVO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE  
SEGURIDAD DE BOGOTÁ

Bogotá, D. C., nueve (9) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

ASUNTO

Decidir en torno a la petición de sustituir la prisión intramural por reclusión domiciliaria en atención a lo dictado por el artículo 38G del Código Penal, previo estudio de la redención punitiva a que haya lugar, conforme la documentación aportada por las directivas de la Penitenciaria «El Buen Pastor» respecto de **INDIRA MARÍA SOTO NAVARRO**.

ANTECEDENTES

Este despacho ejecuta la pena de sesenta y seis (66) meses de prisión amen del pago de la multa equivalente a mil ochocientos ochenta y dos punto sesenta y siete (1882,67) salarios mínimos mensuales legales vigentes que, por el delito de concierto para delinquir agravado y tráfico de estupefacientes, impuso a **INDIRA MARÍA SOTO NAVARRO** el Juzgado 4º Penal del Circuito Especializado de Conocimiento de Bogotá en sentencia de 27 de abril de 2022.

Por cuenta de esta actuación, la prenombrada condenada viene privada de la libertad desde el 12 de junio de 2019, reconociéndose a su favor diecisiete (17) días como redención de pena en providencia de 24 de noviembre de 2022.

11001600000020190257100 (NI 1999)

Powered by CS CamScanner

Powered by CS CamScanner

Powered by CS CamScanner

Powered by CS CamScanner



## LA BOLICITUD

Mediante escrito, **BOTO NAVARRO** solicita la concesión de la prisión domiciliaria consagrada en el artículo 380 del Código Penal, pues sin realizar análisis alguno respecto a los requisitos allí contemplados, afirma su cumplimiento.

Por su parte, tanto la asesora jurídica como la directora de la Reclusión de Mujeres «El Buen Pastor» a través de los oficios identificados con similar radicado 129-CPAMSMBOG-AJUR, hace llegar los comprobantes de las actividades realizadas por la aquí condenada en desarrollo del régimen ocupacional, además de su cartilla biográfica debidamente actualizada y certificados de conducta, para el estudio de redención de pena.

### EL CASO CONCRETO

#### 1º De la redención de pena.

La legislación que ha regulado el reconocimiento judicial de las actividades realizadas por los condenados para rebaja de pena por estudio, trabajo o enseñanza (Ley 32 de 1971, Decreto 2119 de 1977, Ley 600 de 2000 y Ley 65 de 1993), exige para tal efecto, que las labores en cuestión estén certificadas por el director del establecimiento donde se descuenta la sanción, y que el condenado haya observado buena conducta durante los períodos en los cuales realizó las tareas válidas para la reducción de la pena, circunstancia que debe acreditar con la resolución del Consejo de Disciplina o certificación del propio director del centro de reclusión.

Adicionalmente a partir de la vigencia de la Ley 65 de 1993 (agosto 19), las labores propias de redención no son válidas los días domingos y festivos salvo por excepción, debidamente justificada por el director del reclusorio (art. 100). Ahora bien, el Decreto 2119 de 1977 y la Ley 65 de 1993, señalan que las tareas propias para redimir la sanción, se limitarán a 8 horas diarias por trabajo, 6 por estudio y 4 por enseñanza.

Por otra parte el artículo 101 de la Ley 65 de 1993 prevé que para conceder o negar la redención el Juez deberá tener en cuenta la evaluación que se haga del trabajo, estudio o enseñanza por la junta correspondiente, de conformidad con las previsiones de los artículos 81 y 96 ibídem. La Resolución 3272 del 26 de mayo de 1995, vigente a partir del primero de julio de esa anualidad, emitida por el Inpec reglamentó lo concerniente a la evaluación de las labores adecuadas

110016000000020190257100 (NI 1999)



para redimir pena, indicando en sus artículos 27 a 29, quiénes integran la junta de evaluación, los criterios para realizarla, su periodicidad y la forma de registro y control; acto administrativo que fuera subrogado por la Resolución 2376 del 17 de junio de 1997, emitida por la dirección del mismo instituto.

Hechas las precisiones anteriores, se ocupará el despacho del estudio de la documentación aportada para efectuar los reconocimientos a que hubiere lugar de la manera siguiente:

Certificado	Periodo	Horas	Días	Redime
025277	Agosto y septiembre de 2022	60 estudio	10	5 días
18700189	Octubre de 2022	120 estudio	20	10 días

Como la calificación de las labores realizadas fue sobresaliente y que el comportamiento de **INDIRA MARÍA SOTO NAVARRO** en el periodo que comprende el certificado de trabajo se catalogó como «bueno» y «ejemplar» según la cartilla biográfica que se adjuntó, resulta viable reconocer una redención de pena en proporción de **QUINCE (15) DÍAS**, como en efecto se dispondrá en la parte resolutive de este proveído.

#### 2° De la prisión domiciliaria.


Los subrogados penales son mecanismos sustitutivos de la sanción privativa de la libertad, que se instituyeron como instrumento de resocialización y de reinserción social del individuo, cuyo objeto está encaminado a brindar al condenado la oportunidad de que, en su caso y bajo ciertas condiciones, la condena pueda dejar de ejecutarse o hacerlo en el lugar de residencia.

El artículo 38G del Código Penal, introducido por la Ley 1709 de 2014, prevé una de las alternativas para acceder a un mecanismo sustitutivo de la pena de prisión intramural, frente a la cual el legislador exige de manera común, que el infractor no haya evadido de manera voluntaria la acción de la justicia y de manera particular como requisitos estrictamente objetivos el cumplimiento mínimo del 50 % de la sanción irrogada, la acreditación de arraigo socio-familiar y que el delito por el cual se impartió condena no esté incluido en el catálogo de las conductas punibles señaladas en la misma norma.

Descendiendo al caso concreto, una vez revisada la actuación se aprecia que **INDIRA MARÍA SOTO NAVARRO** viene privada de la

11001600000020190257100 (NI 1999)

3-1151  
24 (93)

Powered by  CamScanner

Powered by  CamScanner

Powered by  CamScanner



libertad, ininterrumpidamente, desde el 12 de junio de 2014 que acredita, al día de hoy, un descuento físico de cuarenta y siete (47) meses y ocho (8) días, que sumados a un (1) mes y dos (2) días reconocidos por concepto de redención punitiva (Incluyendo 15 días de esta providencia) arroja que ha purgado un total de **CUARENTA Y OCHO (48) MESES Y UN (1) DÍA** de la sanción, tiempo que se discrimina así:

AÑO	MESES	DÍAS
2019	06	19.00
2020	12	00.00
2021	12	00.00
2022	12	00.00
2023	04	19.00
Descuento físico	47	08.00
Redenciones	01	02.00
<b>TOTAL DESCUENTO</b>	<b>48</b>	<b>10.00</b>

Como se indicó la procesada fue condenada a pena privativa de la libertad de sesenta y seis (66) meses de prisión, así pues, el 50% de tal sanción corresponde a treinta y tres (33) meses de internamiento penitenciario y como a la fecha se encuentra acreditado un descuento total de cuarenta y ocho (48) meses y un (1) día, se concluye que **INDIRA MARÍA SOTO NAVARRO** cumple el factor cuantitativo que exige el artículo 38G de la Ley Penal.

Sin embargo, en el caso concreto no es posible accederse a la gracia sustitutiva pretendida, ello por cuanto la sanción que en este expediente se ejecuta fue impuesta, entre otros, por «concierto para delinquir agravado», conducta que se encuentra expresamente enlistada en el catálogo de delitos consagrado en el mismo canon que invoca el condenado, veamos:

Artículo 38 G - La ejecución de la pena privativa de la libertad se cumplirá en el lugar de residencia o morada del condenado cuando haya cumplido la mitad de la condena y concurren los presupuestos contemplados en los numerales 3 y 4 del artículo 38B del presente código, excepto en los casos en que el condenado pertenezca al grupo familiar de la víctima o en aquellos eventos en que fue sentenciado por alguno de los siguientes delitos: genocidio; contra el derecho internacional humanitario; desaparición forzada; secuestro extorsivo; tortura; desplazamiento forzado; tráfico de menores; uso de menores de edad para la comisión de delitos; tráfico de migrantes; trata de personas; delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales; extorsión; concierto para delinquir agravado; lavado de activos; terrorismo; usurpación y abuso de funciones públicas con fines terroristas; financiación del terrorismo y de actividades de delincuencia organizada; administración de recursos con actividades terroristas y de delincuencia organizada; financiación del terrorismo y administración

1100167010200102057101/01-0001



En conclusión, al existir impedimento legal para conceder la medida sustitutiva deprecada, no queda otra alternativa que negar nuevamente la prisión domiciliaria impetrada por la sentenciada.

Vista la comunicación que antecede, proveniente de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, referente a la acción de tutela incoada por la sentenciada **INDIRA MARÍA SOTO NAVARRO** se ordena ofrecer la respectiva respuesta dentro del término otorgado.

**RESUELVE**

**SEGUNDO: NEGAR** la prisión domiciliaria de que trata el artículo 38G del Código Penal a **INDIRA MARÍA SOTO NAVARRO** de conformidad con lo brevemente expuesto.

**CUARTO: REMITIR COPIA** de este proveído al reclusorio donde se encuentra la condenada para fines de consulta y obre en su hoja de vida.


NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE,

ARMANDO PADILLA ROMERO  
JUEZ

1110160000020190257100 (NI 1999)

Powered by  CamScanner

Powered by  CamScanner

Powered by  CamScanner

Powered by  CamScanner



ATA 183026  
C11100000  
A 110000000  
F000000  
Delitos  
Decisión  
Reclusión  
Normatividad

11001600000020190257100 (NI 1999)

Indira María Soto Navarro

22 520 764

Juzgado 4º Penal del Circuito Especializado de Conocimiento de Bogotá

Concierto para delinquir agravado y tráfico de estupefacientes

Estar a lo resuelto

Reclusión de Mujeres el Buen Pastor

Ley 906 de 2004

REPUBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



JUZGADO OCTAVO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE  
SEGURIDAD DE BOGOTÁ

Bogotá, D. C., nueve (9) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Por parte de la Penitenciaría «El Buen Pastor» se recibe el oficio 129-CPAMSMBOG-, por medio del cual remiten la documentación exigida por el artículo 471 de la Ley 906 de 2004 para adoptar un pronunciamiento en torno a la libertad condicional de la condenada **INDIRA MARÍA SOTO NAVARRO**.

Por su parte, la prenombrada sentenciada deprecia la concesión del beneficio liberatorio advirtiendo el cumplimiento de las exigencias legales establecidas en el artículo 64 del Código Penal.

Con relación a dicho subrogado penal, se hace necesario indicar que mediante providencia interlocutoria de 24 de noviembre de 2022, este despacho judicial no concedió la aludida excarcelación condicional en razón a la valoración que se realizó en torno a las conductas punible que cometió, decisión que le fue notificada personalmente sin que contra la misma hubiere promovido recurso de ley alguno.

En punto de volver sobre lo ya decidido, el Máximo Tribunal de la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad penal, indicó:

3.1. En efecto, la queja constitucional del demandante se circunscribe a la decisión judicial calendarada 5 de abril de los cursantes, que se abstuvo de resolver sobre la petición de libertad condicional que elevara al deber estar a lo resuelto en providencia del 15 de septiembre de 2015 que negó dicho subrogado por incumplimiento del factor subjetivo; así como la posteriormente emitida que declaró improcedente el recurso de absolución que aquél promovió al tratarse de un auto de sustanciación que no admite recursos.

3.2. Se tiene que el actor ha insistido bajo los mismos argumentos en la concesión del subrogado en alusión, de suerte que el despacho resolvió que

11001600000020190257100 (NI 1999)

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner



(b/k)

debía estarse a lo resuelto en pretérita oportunidad en la medida que no se avizara ninguna circunstancia novedosa que amerite hacer un nuevo estudio sobre la materia ya abordada.

3.3. Acorde con lo expuesto, no encuentra la Sala irregularidad alguna en el hecho que mediante dicho auto de sustanciación el despacho demandado hubiese dispuesto estarse a lo resuelto en el proveído que negó al libelista la libertad condicional, como quiera que las diferentes peticiones presentadas por el sentenciado para deprecar su otorgamiento eran reiterativas, puesto que se planteó la misma discusión y en tal medida el raciocinio jurídico del operador judicial no había de variar.

3.4. Situación diferente habría sido que la parte actora hubiese presentado la solicitud con miras a demostrar la existencia de nuevas razones que hicieran viable el otorgamiento de la figura pretendida, como que ello supondría una circunstancia adicional que obligaría al juez a estudiar el tópico y a emitir un pronunciamiento; lo cual, sin embargo, no acaece en este caso, de manera que lo decidido al respecto es asunto que se torna immodificable al haber cobrado firmeza y por ende adquirió el carácter de cosa juzgada formal<sup>11</sup>.

En la mencionada cita jurisprudencial la Corte indica que no es posible regresar sobre asuntos previamente resueltos por la autoridad judicial sin que existan elementos de juicio nuevos que permitan o autoricen la revaloración, máxime en tratándose de decisiones en firme y que, por efecto, gozan de la doble presunción de legalidad y acierto.

De manera que como la negativa de otorgar la libertad condicional ha cobrado ejecutoria en la medida que, habiendo sido notificada en debida forma, contra la misma no se interpusieron los recursos consagrados en el ordenamiento jurídico, tanto las autoridades penitenciarias como la condenada **INDIRA MARÍA SOTO NAVARRO** deberán atenerse a lo resuelto por este Juzgado pues con la nueva deprecación no aportó elementos jurídicos o fácticos novedosos que aconsejen un reexamen del sustituto y variar lo ya decidido.

Entérese personalmente de este proveído a la sentenciada y a su defensor por el medio más expedito

CÚMPLASE,

ARMANDO PADILLA ROMERO  
JUEZ

(97)



**RV: Recurso de reposición**

Juzgado 08 Ejecucion Penas Medidas Seguridad - Bogotá - Bogotá D.C.

Lun 31/07/2023 3:40 PM

Para: Ventanilla 2 Centro Servicios Juzgado Ejecucion Penas Medidas Seguridad - Bogotá - Bogotá D.C.  
<ventanilla2csjepmsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Cordialmente,

Juzgado 8° de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá  
Calle 11 N° 9A - 24

---

**De:** Nestor De Jesus Martes Soto <nestorc165@gmail.com>

**Enviado:** lunes, 31 de julio de 2023 14:43

**Para:** Juzgado 08 Ejecucion Penas Medidas Seguridad - Bogotá - Bogotá D.C.

<ejcp08bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Secretaria Sala Penal Tribunal Superior - Seccional Bogota

<secsptribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Procesos Judiciales - Oficina Juridica

<procesosjudiciales@procuraduria.gov.co>

**Asunto:** Recurso de reposición

Buenas tardes

 **CamScanner 29-07-2023 12.56 (2).pdf**

Envío recurso de reposición de la señora Indira Maria Soto Navarro, identificada con cédula de ciudadanía 22.520.764.

Agradezco su atencion, quedo atenta a sus comentarios.

--

**Cordialmente;**

**Nestor de Jesús Martes Soto.**

**Tecnologo en sistemas integrados de gestion.**

**cel: 3213587870.**